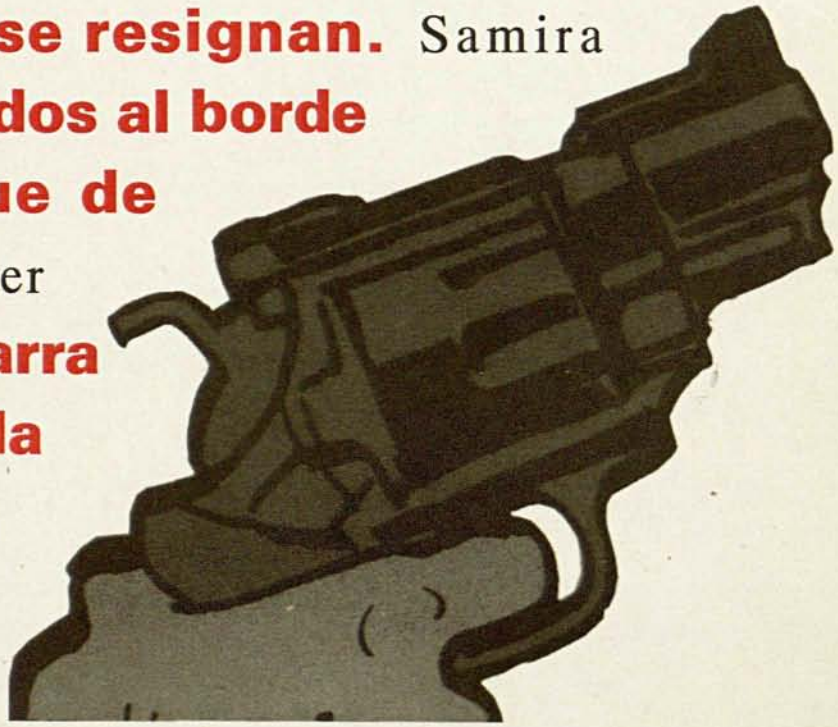
VIENTO SUR

POR UNA IZQUIERDA ALTERNATIVA

● **Los negocios de la política.** Stephen Handelman, Yves Mény, Donatella Della Porta, Albert Recio, Pierre Salama ● **El futuro de las pensiones.** J. Albarracín y P. Montes ● **De la participación ciudadana a las democracias participativas.** Tomás R. Villasante ● **La sociedad ante los cambios en las telecomunicaciones.** J. Navascués ● **Argentina. El regreso de la historia.** Daniel Pereyra ● **Argelia. Las mujeres no se resignan.** Samira Fellah ● **Estados al borde de un ataque de fletán.** G. Buster ● **Rosario Ibarra habla sobre la situación mexicana.** Alfonso Moro



N.º 20 MARZO - ABRIL 1995 700 PESETAS

Número 20 / abril 1995 / 700 pesetas

1 agenda

Notas sobre la actualidad política en el Estado español. *Sabino Cuadra, Carmen San José, Jaime Pastor* **7**

2 el desorden internacional

Argentina
El regreso de la historia. *Daniel Pereyra* **17**
Argelia
Las mujeres no se resignan. *Samira Fellah* **23**
México
Entrevista a Rosario Ibarra. *Alfonso Moro* **37**
Conflicto pesquero
Estados al borde de un ataque de fletán. *G. Buster* **49**
El mar libre de Hugo Grotius dejará de existir. *Nel van Dijk* **51**

3 miradas voces

Fotos de *Guillermo Aguareles* **53**

4 plural

Los negocios de la política
Corrupción y transformaciones económicas. *Albert Recio* **59**
Estado y corrupción en el Tercer Mundo. *Pierre Salama* **66**
La mafia rusa. *Stephen Handelman* **71**
Un análisis comparado. *Donatella Della Porta y Yves Mény* **49**

El estado del malestar
El "Pacto de Toledo" y el futuro de las pensiones. *Jesús Albarracín y Pedro Montes* **87**

Más allá del voto
De la participación ciudadana a las democracias participativas. Tomás R. Villasante **97**

Mercado e información
La sociedad ante los cambios en las telecomunicaciones. Javier Navascués **105**

5 documentos

La Plataforma Cívica por los Derechos Sociales **97**
Carta abierta de un insumiso. Manolo García Olea **124**

Propuesta gráfica a partir de Dick Tracy de *Chester Gould*

VIENTO SUR
POR UNA IZQUIERDA ALTERNATIVA

Consejo Editorial:
Jesús Albarracin
G. Buster
José Ramón Castaños
Montserrat Cervera
Javier González Pulido
Petxo Idoyaga
José Iriarte "Bikila"
Lourdes Larripa
Miren Llona
Juana López
Gloria Marín
Cristina Monje
Justa Montero
Pedro Montes
Joaquín Nieto
Iñaki Olano
Carlos S. Olmo Bau
Alberte Pagán
Jaime Pastor
Oriol Quart
Daniel Raventós
Miguel Romero
Flora Sáez
Iñaki Uribarri
Begoña Zabala

Diseño:
Jerôme Oudin &
Susanna Shannon

Maqueta:
Escala 7

Redacción, administración y suscripciones:
Apartado de Correos 50.522
28080 - Madrid
c/ Embajadores, 24 - 1º izda.
28012 - Madrid
Tel.: (91) 530 75 38
Fax: (91) 527 96 52
Correo electrónico: Viensur
@nodo50.gn.apc.org

Imprime:
J. P. Arts Gràfiques

DL: B-7852-92
ISSN: 1133-5637

Precio:
700 pesetas (IVA incluido)

Han colaborado en este número:

Guillermo Aguareles
Nació en 1968. Como fotógrafo es autodidacta. Empezó a hacer fotos a los 16 años. En 1994 comenzó a exponer en Zaragoza. Actualmente, estudia Economía.

Sabino Cuadra
Militante de Zutik!

Donatella della Porta
Profesora de Administración Local en la Universidad de Florencia.

Nel van Dijk
Diputada del Parlamento Europeo por el Partido de la Izquierda Verde de Holanda.

Samira Fellah
Militante feminista argelina.

Manolo García Olea
Es insumiso.

Yves Mény
Profesor de Ciencias Políticas y director del Instituto Europeo de Florencia.

Alfonso Moro
Redactor de *Inprecor para América Latina*. Militante del PRT mexicano.

Javier Navascués
Es sindicalista de CC.OO. e ingeniero de telecomunicación.

Daniel Pereyra
Escritor y periodista. Autor del libro *Del Moncada a Chiapas*. Ediciones La Catarata. Madrid, 1994

Albert Recio
Miembro del Consejo de Redacción de la revista *Mientras Tanto*.

Tomás Rodríguez Villasante
Miembro del Consejo de Dirección de la revista *Alfoz*.

Pierre Salama
Profesor de Economía en la Universidad de París-XIII

Carmen San José
Feminista, sindicalista de CC.OO y médica.

al vuelo

"Por eso, como el mar, ésta es una historia que siempre vuelve, y no hay punto final, obediencia debida ni indulto, no hay ley alguna, ni decreto que pueda terminar con la historia no saldada de un pueblo". Ana María Careaga estuvo secuestrada en 1977 en el campo de concentración Club Atlético. Ahora ha escrito estas palabras, esperanzadoras a pesar del recuerdo del horror que vuelve también con esa historia y a pesar, sobre todo, de los sentimientos encontrados (temor, perplejidad, indignación...) que produce comprobar que sólo sectores sociales muy minoritarios tienen el coraje de movilizarse para evitar ese "punto final". Porque en Argentina la amenaza, que ya está activada como demuestra la triunfal reelección de Menem, es que se escriba realmente un "punto final" más firme y más legitimado socialmente que el de hace unos años. Sí así fuera, correríamos el riesgo de que esa expresión de esperanza, "la historia siempre vuelve", tomara un contenido amenazador. **Daniel Pereyra**, que vivió en su carne y en la de mucha gente querida, aquel horror, ha analizado para nosotros el significado político y moral de los hechos.

En Argel, la barbarie es un suceso cotidiano, especialmente para las mujeres. Los dos artículos que publicamos, escritos por **Samira Fellah** y **Suad B.**, estudian la situación desde Argel y desde Francia, dos perspectivas complementarias. Lo hacen evitando la lógica del mal menor, el Ejército antes que el FIS, que tiene mucho que ver con el sangriento callejón sin salida en que está encerrado el pueblo argelino.

A mucha distancia, otra mujer, **Rosario Ibarra** cuenta con la fuerza y la ternura que la caracterizan la evolución de los acontecimientos en Chiapas. Es importante reavivar la reflexión sobre lo que está ocurriendo allí, porque en nuestra época, todo lo que dura se olvida o se banaliza. El subcomandante Marcos no es un columnista de *El País*, encumbrado al particular Olimpo estético-político de Regis Debray, sino el símbolo vivo de una experiencia revolucionaria enormemente original y sugestiva: la crítica práctica más radical que conocemos al concepto tradicional de "vanguardia". Hay en Chiapas ideas en movimiento que nos parecen imprescindibles como materia de reflexión para lo que tenemos entre manos por aquí.

El fletán se ha convertido en un concepto político. Si en algún momento ha podido tomarse a broma, los acontecimientos más recientes indican que las guerras de la pesca condensan una cantidad enorme de conflictos diversos: sociales, económicos, territoriales, de enfrentamiento explícita o implícitamente xenófobos, etc. **G. Buster** y la diputada verde holandesa **Nel van Dijk**, se ocupan de estos diversos aspectos de la cuestión. En próximo números trataremos de seguir la evolución de los acontecimientos en zonas más próximas, en especial, en el Estrecho, donde hay una amenaza real de una explosión social fuertemente reaccionaria, sin que nadie de los que pueden hagan nada por impedirlo; particularmente, sin que ninguno de los líderes políticos en campaña hayan a tenido a bien decir esta boca es mía.

La corrupción se ha convertido en una seña de identidad de los sistemas políticos contemporáneos. Pero desgraciadamente el combate consecuente y eficaz contra ella no es en absoluto una seña de identidad de la izquierda, especialmente en los países del Centro, incluyendo a éste en que nos ha tocado vivir. Precisamente, la debilidad, la incoherencia y hasta, a veces, el desdén (como si fuera una pérdida de tiempo, un desvío, ocuparse de estas cosas) de la izquierda ante este poderoso factor de deslegitimación real del sistema político neoliberal es una muestra de sus debilidades cuando tiene que enfrentarse, en la práctica, no en la literatura, al Estado.

Publicamos cuatro artículos que desde perspectivas muy diferentes, como siempre, estudian diversos aspectos de la corrupción. **Albert Recio, Pierre Salama** y **Stephen Handelman** parten de experiencias concretas (el Estado español, el Tercer Mundo y Rusia), aunque Recio y Salama se orientan hacia cuestiones de carácter general: por cierto, nos parecen de mucho interés las diferencias de puntos de vista que ambos mantienen sobre el papel del Estado en la cuestión, y en particular, en la lucha contra al corrupción. Donatella della Porta y Yves Mény hacen una sistematización general que incluye también aspectos muy polémicos.

Esta vez tenemos menos espacio de lo acostumbrado, por lo que no podemos comentar los artículos de **Jesús Albarracín, Pedro Montes, Tomás R. Villasante** y **Javier Navascués**, que tampoco necesitan ningún estímulo especial para despertar el interés de lectores y lectoras.

El motivo de esta reducción de espacio es anunciar el primer Encuentro de *VIENTO* SUR. La convocatoria figura en la página de al lado. Agradecemos desde ahora la presencia de los amigos y amigas que ya nos han confirmado su presencia y os animamos a acompañarnos a lo que desearíamos que fuera una cita habitual de cada año... que, entre otras cosas, pudiera servir de "modelo de regularidad" para la publicación de la revista. Buena falta nos hace.

Y otra cosa, por una vez y sin que sirva de precedente, esta vez la propuesta gráfica no es obra original. Pero hemos pensado que en un número en el que se discute sobre la corrupción nadie mejor que Chester Gould, el inolvidable creador de *Dick Tracy*, para proporcionarnos imágenes adecuadas. Imágenes que, evidentemente, hay que ver en blanco y negro. O sea, que nadie piense que esta vez las *erratas* empiezan con el olvido del color de portada.

I ENCUENTROS DE VERANO

MONASTERIO DE CARRION DE LOS CONDES
(Palencia). 15 y 16 de julio de 1995

Y Sin Embargo, Se Mueven...

Movimientos sociales e izquierda alternativa

Dos días de debates, talleres, convivencia...

- El Código, ¿un nuevo aliado de los movimientos sociales?
- ¿Por dónde puede construirse un movimiento por la reducción del tiempo de trabajo?
- ¿Cómo llevar a la calle el tema europeo con ocasión de la presidencia española de la UE?
- ¿Qué significan esos "otros" movimientos sociales": el integrismo, los populismos...?
- ¿Sirven las ONG para organizar la solidaridad con los pueblos del Sur?
- ¿Qué hemos pensado y sentido viendo *Tierra y Libertad*?

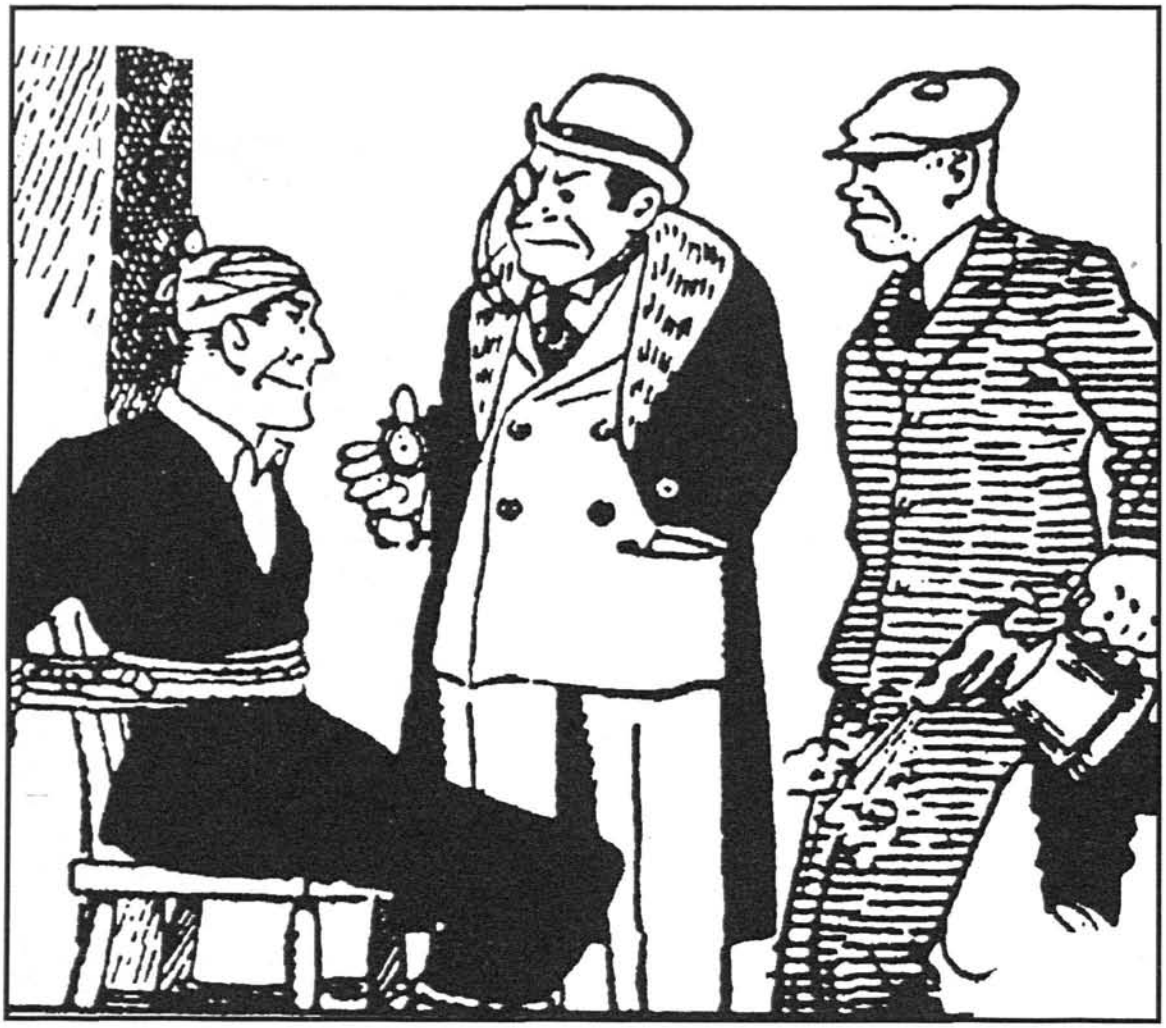
Un panel pluralista y abierto, en el que estarán gente que aporte enfoques diversos de izquierda alternativa, pondrá en común las opiniones que se expresen sobre los aspectos generales y concretos, prácticos y teóricos... sobre el presente y el futuro de los movimientos sociales.

Para animar los talleres y el panel contaremos con la presencia, ya confirmada, de Pedro Ibarra, Begoña Zabala, Verónica Stolcke, Jorge Riechmann, Víctor Ríos, Ramón Fernández Durán, Justa Montero, Luis Enrique Alonso, Ricardo Sosa, Montserrat Cervera, Jaime Pastor, Jesús Albarracín, Pedro Montes, Gloria Marín, José Ramón López de la Osa y miembros del equipo de *Tierra y Libertad* y mucha otra gente del Consejo Editorial y de los numerosos amigos y amigas de la revista.

Precio del alojamiento: 6.000 pesetas (desde la noche del viernes 14, en que deberá realizarse la inscripción, hasta después de la comida del domingo 16).

Precio de apoyo: 10.000 pesetas

Inscripciones en la dirección de la revista



agenda

20 de marzo. El descubrimiento de los cadáveres de José Ignacio Lasa y José Antonio Zabala, enterrados en cal viva hace diez años, prueba la implicación del Gobierno de Felipe González en el horror de las "desapariciones".

Resulta curioso comprobar cómo la cal "viva" sirve para matar, y la cal "muerta" para blanquear, o sea, para dar una cierta vida a aquello sobre lo que se aplica. Y resulta igualmente curioso ver cómo, tanto una como otra, han sido de gran utilidad al Gobierno y demás poderes adyacentes, en todo lo que ha sido el proceso de la transición política y posterior "asentamiento de la democracia".

En su momento, el encalado constitucional y sus emplastes sirvieron para presentar las viejas, húmedas y agrietadas celdas del alcázar franquista como habitaciones homologables con los estándares europeos al uso. Se dio cal a la monarquía, a la Guardia Civil, al Ejército, a la bandera de la tabacalera, a la España una–grande–y–libre, a la Iglesia.... Y le cogieron gusto a la brocha y aún siguen con la labor, que aquí lo mismo se encala a Fraga, carnicero en Montejurra y en Vitoria, blanqueado ahora de docto y bondadoso señor, que a la Lola Flores, la Lola de España de siempre y para siempre, la Lola defraudadora de Hacienda a quien, una vez bien encalada, aplauden en su homenaje ministras y demás faunas.

Pero no por eso el viejo alcázar ha dejado de hacer aguas. Las grietas y humedades renacen año tras año, y estallan de repente ocultas goteras –Lasa y Zabala– que nos traen a la memoria otras muchas muy mal retejadas:

- Poco antes del 23-F, el militante de ETA Joseba Arregi moría en las dependencias policiales centrales de Madrid tras nueve días de interrogatorios y torturas.

- En 1981, tres jóvenes a quienes se confunde con etarras son detenidos en Alemania. La Benemérita los tortura, asesina y, finalmente, quema en el interior de un coche.

- La policía detiene, asesina y hace desaparecer el cuerpo de el Nani, de quien se dijo era el primer desaparecido de la "democracia". Aún no se sabía lo de Lasa y Zabala.

- Mikel Zabalza, navarro, es detenido, confundido con un colaborador de ETA.

Aparece ahogado en el Bidasoa. No sabía nadar y estaba esposado con las manos en la espalda, pero la Guardia Civil jura que se les escapó y se arrojó al río para huir.

- 1992: la *cúpula tricornial* encargada de la lucha contra el narcotráfico es procesada, encarcelada y condenada por diversos delitos que, en teoría, debieran haber combatido.
- 1995: el caso Roldán descubre que la verborrea "anti–ETA" de muchos altos cargos policiales oculta un interés real en que no se acabe nunca la "lucha antiterrorista"... y los fondos reservados a ella destinada.
- 1995: aparecen los cuerpos torturados, asesinados y quemados en cal viva de Lasa y Zabala, primeras víctimas de la larga e indiscriminada cadena de crímenes del GAL, esa criatura mafiosa amamantada por la policía y la Guardia Civil.

La lista puede hacerse interminable y de lo mas variada: asalto a una plaza de toros disparando indiscriminadamente a los tendidos (Sanfermines 78); detenidos en comisaría que se arrojan por la ventana (Anuk) y se matan; personas que se suicidan (Foz de Lumbier) disparándose dos-tiros-dos en la cabeza; comandos enteros que, antes de ser detenidos, se obstinan en ser exterminados en los pisos donde son hallados...

La versión oficial. Escarbando estas últimas semanas en la prensa nacional y estatal para recoger información en torno a la muerte de Lasa y Zabala uno ha podido comprobar cómo ha sido dedicado bastante más espacio informativo a cubrir los sucesos de Rentería (una furgona de la Ertzaintza es atacada con cócteles molotov) que seguir los acontecimientos de Alicante.

No sólo era eso. Mientras que estos hechos eran satanizados y se achacaba rápidamente la responsabilidad de los mismos a Jarrai, Kas, HB y las cien mil bichas violento-independentistas, nada de esto se hacía con los casos de Lasa y Zabala. Aquí, la vara de medir es muy distinta. Como en la guerra del Golfo, la información se tecno-objetiviza: abundan las fotos y mapas de dónde se encontraron los cuerpos, de sus posturas, de fotografías del depósito de cadáveres, de los informes de los forenses... pero apenas se mencionan las causas profundas de aquellos hechos. La decisión política y puesta en marcha económica, policial y humana, a través del Ministerio del Interior y la Guardia Civil, de todo el montaje de los GAL: del GAL policial y del GAL *verde*.

Desde la transición hasta hoy, la versión oficial siempre ha presentado estos casos (Almería, Nani, Arregi) como ejemplos aislados de extralimitaciones policiales que no afectan a la constitucionalidad y buen hacer de los cuerpos afectados. Y ante esta versión, todo el marco institucional (Izquierda Unida incluida), tras exigir muy digno –¡faltaría más!– que se investigasen los casos hasta "llegar al fondo" de los mismos, pasaba rápidamente la página para ocuparse de asuntos políticos y electorales de mayor importancia, y así hasta la siguiente.

Hoy las cosas son algo distintas. Debido al tamaño de los *marrones* que van surgiendo (caso Roldán, confesiones de Amedo y Domínguez, descubrimiento de desaparecidos) y al propio del PP e IU, los partidos de la oposición están llegando a señalar incluso las responsabilidades directas de miembros del Gobierno, cuando no de la camarilla en pleno.

Sin embargo, el problema debe ser abordado más en profundidad. Decía el sociólogo Jesús Ibáñez, refiriéndose al proceso de transición política de los años 70, que en el mismo "las moscas habían cambiado, pero la mierda seguía siendo la misma". Pues eso, a eso vamos.

Los catres. En una rueda de prensa ofrecida por las Gestoras Pro Amnistía de Euskadi para comentar el caso de Lasa y Zabala afirmaron que "la famosa X de los GAL no está únicamente en éste o aquel político. La X de los GAL está en la Constitución española". Y es que la guerra sucia es algo más que Barrionuevo y el PSOE de Felipe González. Antes que el GAL, durante el gobierno de Suárez, existieron otros grupos como el BVE (Batallón Vasco Español), ATE (Antiterrorismo ETA) etc..., y una práctica generalizada de malos tratos y torturas que enlazaba directamente con los periodos de excepción franquistas.

Cuenta la leyenda del bandido Procusto que éste, tras atar a sus víctimas a una cama, cortaba las extremidades de todos aquellos a quienes ésta les quedaba pequeña con el fin de acomodarlas a la misma. Supe de ella a través de un libro que citaba este caso como ejemplo de lo que era el pensamiento metafísico y su colección de dogmas y verdades inmutables a las cuales ajustaba brutalmente la realidad.

Pero la cama de Procusto es útil también en el terreno político y policial, y no tan sólo en el filosófico. Así, por ejemplo, cuando los últimos gobiernos que hemos conocido han tropezado con realidades que no se ajustaban bien al Estado al cual servían, en vez de modificar ese Estado, sus instituciones o sus leyes, cogían el serrucho del consenso, de las razones de Estado o de la Guardia Civil y recortaban la realidad hasta hacerla encajar dentro de aquél.

Así se ajustó en su día la Constitución al catre cuartelero del régimen franquista y, posteriormente, se ha usado la motosierra de las razones de Estado cuantas veces ha sido necesario para conseguir que la sociedad se amolde al camastro constitucional. Y aquí ha valido todo, desde el 23-F y su "Pacto del Capó", hasta el referéndum de la OTAN, los fondos reservados y, cómo no, cuantos BVE y GAL haya sido preciso organizar para ajustar detalles e imprevistos.

Cuando se descubrieron los cadáveres de Lasa y Zabala, se interpeló sobre el particular al secretario del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera, y éste, ocurrente e ingenioso como nadie, no se lo ocurrió otra cosa que decir que, en ese momento, le preocupaban más las mociones que entonces se discutían en el pleno del Congreso sobre la llamada "fe pública" y el papel de los notarios, que el macabro descubrimiento. A él, como al Gobierno, más que la vida real le preocupaba la "fe pública", esa virtud medieval atribuida a los notarios para que, con letra grande y a tanto la página, documenten y oficialicen hechos y negocios varios.

El Gobierno, notario mayor del Reino y sus *desagües,* nunca nos dirá una verdad que sea la que resulte de colocar la realidad sobre la cama de Procusto y recortar a base de tenaza y cal viva todas las extremidades políticas, sociales, personales... que excedan a ese asqueroso catre empapado del sudor y la mugre de décadas y siglos de opresión y privilegios.

Leo en la prensa de hoy, 10 de abril, que la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, ha afirmado que en el plazo de diez días habrá concluido la investigación sobre el caso Lasa y Zabala y que "los ciudadanos tienen que tener la absoluta convicción de

que vamos a intentar llegar hasta el final, caiga quien caiga". O sea, parece como si el Ministerio del Interior hubiera decidido ya que el caso no tiene mayor complicación que la que pueda tener un vulgar palanquetazo a un estanco.

Leemos asímismo que una de las hipótesis barajadas es la de atribuir el asesinato al grupo de mercenarios comandado en aquel entonces por el ex paracaidista del Ejército francés y de la OAS, Jean Pierre Cherid, casualmente muerto en 1984 cuando colocaba una bomba en el coche de un dirigente de ETA en Francia. En fin, ya se sabe, "al burro muerto, la cal al rabo". De todas formas, sería muy impresentable cargar todas las responsabilidades sobre gente de "fuera de la casa", así que quizá ofrezcan algo de carnaza de la propia (algún cabo primero, por lo menos). De todas formas, después de cómo les ha salido de respondón Amedo, la cosa no es nada fácil.

No sabemos, pues, como pretenderán terminar "oficialmente" este caso. Ya hemos dicho antes que las cosas están cambiando y que aquel pacto de silencio, de *sordez* y de *cieguez* que funcionó durante los años ochenta entre la clase política y el terrorismo de Estado no sirve ya. La arena política es distinta y encima de la mesa hay un *merdé* que no se puede obviar tan fácilmente. Será preciso pues, en aras de las sacrosantas razones de siempre, readecuar algo aquel pacto. Costará, pero mayores se han cubierto en los últimos veinte años.

Cambiarán pues las sábanas de la cama. Cambiarán quizás –no está tan claro–, las colchas mugrientas, pero la cama de Procusto seguirá ahí. A ella se seguirá ajustando la realidad política del país y a su servicio se pondrá de nuevo el machete de las razones de Estado, los fondos reservados, las democráticas y abnegadas policía y Guardia Civil y, para mayor tranquilidad de todos y todas, nuestro querido CESID y el Ejército constitucional, guardián él de la *unidad patricia* y su orden social.

Sabino Cuadra Lasarte

8 de mayo. La huelga de médicos del Insalud, un paso más en la escalada de conflictos laborales en el sistema sanitario español.

A principios de la pasada década se inició lo que sin duda ha constituido la mayor reestructuración de los sistemas sanitarios públicos en los diferentes países occidentales. Las principales causas esgrimidas fueron lo limitado de los recursos, ante el incremento exponencial que estaban teniendo los gastos en sanidad, y la crisis económica de la segunda mitad de los años 80; sin embargo, con anterioridad las ideas neoliberales ya habían propiciado el cambio con su nueva forma de concebir los servicios de salud.

La reforma emprendida en los sistemas sanitarios fue más profunda en aquellos países que contaban con servicios nacionales de salud, ya que eran precisamente las características de estos modelos (servicios públicos, de cobertura universal,

financiados básicamente con impuestos, acceso gratuito a la atención a la salud, etc.), lo que se quería combatir. De esta forma el cambio más emblemático lo inició el Servicio de Salud del Reino Unido.

Un modelo irreconocible. En el Estado español esta reforma ha sido desigual ya que se partía de un sistema de Seguridad Social que perduró hasta la mitad de los años 80, creándose más tarde el Sistema Nacional de Salud (SNS), con las características de un modelo público de salud, si bien la ley que lo implantó ya preveía la coordinación y colaboración del mismo con el sector sanitario privado.

A pesar del avance que supuso la creación del SNS, en la actualidad ya se han realizado los suficientes cambios como para no poder ser reconocido como un modelo de salud público. Esto se debe a la introducción en los diferentes Servicios de Salud de cada comunidad autónoma, cuyo conjunto conforma el SNS, de un tipo de gestión que permite la competitividad interna entre proveedores de servicios sanitarios, sin diferenciar si esta provisión la realiza el sector público o el privado: sólo se tiene en cuenta la rentabilidad. Esto se conoce como el mercado interno sanitario.

La distorsión que este tipo de reformas han incorporado al desarrollo de los Servicios de Salud es tan enorme que hoy día es difícil asegurar si lo que se persigue con esa enorme inversión (alrededor de 3 billones de pesetas anuales), tanto en recursos materiales como humanos, es mejorar la atención de las necesidades de salud que tiene la población o mejorar la relación coste/beneficio para alcanzar el umbral de rentabilidad.

La planificación del conjunto de actuaciones que cada Servicio de Salud debe llevar a cabo para resolver problemas de salud en base a los estudios epidemiológicos, los planes socio-sanitarios, etc. ha dado paso a la búsqueda de la rentabilidad en la asignación que se hace de los presupuestos públicos al sistema sanitario. Esto está acarreando, entre otras cosas, la hipertrofia de la burocracia y el crecimiento de los puestos de gestión frente a los puestos asistenciales, que cada día se ven más mermados.

Por otra parte, estos cambios traen una mayor dependencia del SNS con el sector sanitario privado, al que se le transfieren cada vez en mayor medida aquellas actuaciones más rentables. Es decir, en lugar de invertir el SNS en tecnología, lo cual a largo plazo supondría un ahorro, se alquila ésta al sector privado.

Los profesionales. La realidad de todas y todos los profesionales del SNS no ha sido ajena a las reformas que han tenido lugar en los últimos años en el propio sistema.

Las transformaciones no sólo han operado en la forma de concebir actualmente los servicios públicos sanitarios como empresas, sino que los cambios han alcanzado también a la asistencia sanitaria prestada y a las propias relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario. Hoy en día los administradores de estas "empresas sanitarias" están más preocupados por "agradar a los clientes" que por atender con una buena calidad asistencial las necesidades que en materia de salud tiene la población.

Por otra parte, a las relaciones laborales de los profesionales sanitarios se les han aplicado poco a poco las leyes laborales más regresivas que se han implantado con las sucesivas reformas laborales.

En el caso de las y los médicos, se han sumado a las cuestiones estrictamente laborales las derivadas de la obtención de las licenciaturas y titulaciones de especialistas.

Esto es así en el caso del Estado español por diversas razones que intentaré enumerar:

• **Paro masivo.** En el año 1984 un estudio del Ministerio de Sanidad estimaba la cifra de médicos necesarios para el sistema sanitario público en la década de los 90 en 72.201; entonces trabajaban en él 51.945. Después de casi once años el número de licenciados en medicina en activo ronda los 100.000 médicos y médicas, pero el SNS no ha llegado a cubrir ni sus expectativas de dar trabajo a 72.000, porque hoy la cifra no supera ni los 71.000 licenciados con trabajo en el SNS. En el sector privado exclusivamente no trabajan más allá de un 2 ó 3%; lo habitual es que se compatibilicen ambos sectores, por lo que es muy difícil tener una cifra exacta.

Para conocer el origen del problema de unos 30.000 licenciados en paro, o con empleo precario, nos tendríamos que remontar a los años 70, cuando las aulas de las Facultades de Medicina se vieron desbordadas: más de 22.500 estudiantes en 1977 y 10.000 licenciados en un solo año (1983). Nunca se habían realizado estudios desde la administración sanitaria o la educativa para prever las necesidades de médicos, tanto para atender a la población en el Estado español, como para cubrir convenios internacionales o para tareas solidarias; tampoco se supo prever el número de médicos que la Universidad y el dispositivo asistencial estaba en condiciones de formar.

Con el ingreso del Estado español en la Comunidad Europea el problema se agravó por diversas razones. En primer lugar tanto el Tratado de Maastricht como los planes de convergencia obligaban a un tipo de política económica que, de forma muy directa, influía sobre los servicios públicos en general, y en particular, sobre los servicios públicos de salud; uno de los medios utilizados para disminuir el déficit público fue usar los recursos del sector sanitario privado y recortar los presupuestos del Estado destinados a salud. Esto ha tenido efectos negativos directos sobre el empleo en el SNS.

• **¿6=0?** En segundo lugar, el Estado español se comprometió al cumplimiento de la Directiva 457/86 en enero de 1995, por la cual se supeditaba el ejercicio de la medicina general en los sistemas sanitarios públicos a la posesión de formación específica a tiempo completo durante al menos dos años. Por lo tanto, y en contra de lo que hasta ahora venía sucediendo, la licenciatura en Medicina y Cirugía carece de todo valor a efectos prácticos para poder ejercer como facultativo general en el sistema público. Hecho éste que afecta, por un lado, a todos los nuevos licenciados a partir de 1995 y, por otro, a todos los miles de licenciados que no trabajan en el SNS (unos 30.000) y no han podido acceder a la formación posgraduada. Menos del 10 % de cada promoción de nuevos licenciados se ha podido formar como especialista por la vía MIR, vía de formación de posgrado de médicos internos y residentes, única vía existente para la obtención del título de especialista desde el año 1984.

En tercer lugar, las autoridades sanitarias españolas admitieron el nuevo rango de especialidad que debía tener la medicina general y, en contestación a la CE,

manifestaron que en el Estado español el título que acreditaba esta formación era el de medicina familiar y comunitaria, que se venía impartiendo por la vía MIR.

Las razones de un conflicto. Hace años que desde diversos foros, asociaciones progresistas de profesionales de la salud, sindicatos, etc. se venía advirtiendo tanto a la administración sanitaria como a la educativa, que si no se tomaban con antelación las medidas oportunas para poder cumplir las exigencias de las directivas el conflicto estallaría en cualquier momento, básicamente porque habían admitido una titulación para poder ejercer tanto en el Estado español como en cualquier país de la UE que poseían muy pocos licenciados, tanto entre los que trabajaban como entre los que aspiraban a trabajar en el sector público.

En los últimos meses los enfrentamientos entre instituciones, la sanitaria que da empleo y la universitaria que imparte las titulaciones, han estado a la orden del día, no habiéndose llegado todavía a ningún acuerdo. Las razones de ello son:

- Sanidad no piensa ampliar su oferta de empleo, es más, pretende aumentar la productividad del SNS: esto es, con las mismas plantillas de facultativos intenta incrementar la oferta horaria de los hospitales y centros de salud, para lo cual está flexibilizando la jornada de las y los médicos.
- Las Facultades de Medicina pugnan por tener mayor protagonismo en el desarrollo de la etapa de posgrado, frente a los hospitales del SNS donde se forman en la actualidad los MIR.

Por lo tanto, el Ministerio de Sanidad promueve una vía MIR o similar muy restrictiva para la obtención del título de medicina de familia, a sabiendas de que a la mayoría de los futuros especialistas no los va a absorber el sistema sanitario público. Frente a esta opción las universidades pretenden estimular vías alternativas a la formación MIR, con un objetivo totalmente corporativo de controlar la etapa formativa de posgrado y, por añadidura, abrir una vía de financiación, ya que detrás de las propuestas de la mayoría de las Facultades de Medicina se esconde la intención de hacer pagar la obtención del título en las mismas.

Los colectivos afectados. Parece lógico pensar que los estudiantes que se licencien en el verano del 95 serán los primeros en sufrir las consecuencias de la entrada en vigor de la directiva 457/86, ya que serían los primeros licenciados que sin una formación posgrado de al menos dos años no podrán ejercer en el SNS, ni en ningún otro sistema sanitario público de la UE. Además, nos encontramos con un elevado número de médicos (unos 30.000) que por las restricciones de la vía MIR, no han tenido acceso a la titulación de medicina de familia, no tienen trabajo y tampoco podrán ejercer. Por último, y dadas las limitaciones de empleo que ha sufrido el SNS, entre los miles de desempleados se encuentran algunos miles de médicas y médicos con el título de medicina de familia. Las y los médicos con empleo fijo en el SNS, aunque no tengan el título de medicina de familia, no parece que tengan la misma problemática, ya que de la noche a la mañana nadie podría echarles de un puesto de trabajo estable y, por otra parte, se ha buscado la fórmula de un certificado que les mantendría en el SNS.

Como es fácil deducir, la situación actual es dramática para muchos miles de licenciados y licenciadas que después de muchos años de formación y esfuerzos

económicos ven frustradas sus aspiraciones de poder trabajar en el SNS. Los culpables se reparten entre, por una parte, una administración sanitaria absurda que negoció una homologación de títulos de especialista sin tener en cuenta la realidad del país, incapaz de prever las necesidades de unos profesionales sanitarios cuya formación cuesta al erario público miles de millones y que, sin embargo, se empeña en aplicar las más modernas técnicas de gestión empresarial al SNS para reducir costes; por otra parte, una universidad anclada en buena parte en el siglo XIX, cuyo profesorado no está dispuesto a perder los privilegios de clase que siempre ostentó.

Carmen San José

29 de abril. La mayoría de los dirigentes de Izquierda Unida ceden a la "presión ambiental" al evaluar el atentado de ETA contra Aznar.

Entre las reacciones que ha suscitado la acción de ETA contra el principal líder de la oposición, lo más relevante en casi todas ellas ha sido la instrumentalización del atentado para volver a exigir fidelidad a un frente común "antiterrorista" que muy pronto ha ido asociado a la defensa de la "unidad española".

Por desgracia, la mayoría de los dirigentes de Izquierda Unida, en mi opinión, ha cedido en aspectos fundamentales a esa presión ambiental dominante. Urge, por tanto, promover una reflexión y un debate más profundos dentro de esta formación con el fin de que se dé un giro importante ante una cuestión respecto a la que no podemos aceptar que sólo quepan dos posturas: o con ETA o con el Estado.

Porque, una vez dejado claro el desacuerdo con el atentado, con la estrategia de ETA y con la defensa que de la misma ha hecho la dirección de HB, de lo que se trata es de buscar desde la izquierda una postura diferente de la que caracteriza a aquellas fuerzas que, como el PSOE y el PP, cierran filas en su rechazo del derecho a la autodeterminación y en su opción por la vía represiva como única respuesta política.

Es cierto que algunos dirigentes de IU han manifestado su respeto al derecho a la autodeterminación, aunque sigan dejando en la ambigüedad su formulación y concreción; también lo es que se ha denunciado la utilización del atentado para desviar la atención de la "guerra sucia" de los GAL y del esclarecimiento del terrible asesinato de Lasa y Zabala. Pero cuando, por ejemplo, se ha pedido al PNV que abandonara sus "ambigüedades" respecto a la independencia o que fuera "más hostil" frente a HB, lo que cualquier observador ha podido ver es que ha habido por parte de IU una defensa del *status quo*, incluso contra una fuerza nacionalista moderada. Declaraciones como la de que había que "reducir a escombros a HB" o que la Guardia Civil debía seguir en el País Vasco –ignorando la impopularidad de

una fuerza todavía militarizada, puesta de nuevo de actualidad por el caso Intxaurrondo– han reflejado una preocupante tendencia a alinearse con las fuerzas más beligerantes contra las demandas democráticas que siguen planteando sectores del nacionalismo vasco. Y, lo que es peor, han demostrado una subestimación de las razones por las que, pese a todos sus errores, organizaciones como HB continúan contando con un apoyo social nada despreciable.

Una política alternativa. Esa actitud tiene efectos particularmente graves fuera de Euskadi porque se contribuye a considerar, equivocadamente, que el fenómeno ETA sería en la actualidad similar al de grupos como el GRAPO, dejando así al margen sus notables diferencias. Por eso comparto el juicio que de la izquierda española ha hecho Jonan Fernández en esta misma revista: "En los últimos 17 años la aportación de la izquierda no ha ido más allá de sumarse al coro de las condenas y del testimonio ético contra la violencia. No ha presentado alternativas efectivas y no ha hecho aportaciones, ni ha tomado iniciativas para racionalizar este contencioso. Desde el más absoluto desacuerdo con el uso de la violencia de ETA, hubiera sido posible, por parte de la izquierda, una política alternativa, constructiva y singular que no se ha dado. La cuestión merece, sin duda, una profunda reflexión" **/1**.

¿Por dónde podría ir esa política alternativa? Es difícil concretarla, pero, con la ayuda de algunos de los grupos pacifistas que han surgido en Euskadi, creo que están sentándose las bases para ella. Me limitaré a hacer sólo algunos apuntes.

En primer lugar, hay que dejar claro que sólo la disposición a buscar un diálogo entre todas las fuerzas políticas y sociales interesadas puede desbloquear la actual situación. Ese proceso debería iniciarse sin exclusiones y sin condiciones previas por parte de nadie: la Conferencia por la Paz de Elkarri fue un buen ejemplo de que esa vía es posible, pese a las reticencias que pueda seguir habiendo desde un lado o desde el otro.

En ese diálogo deberían ponerse sobre la mesa todos los problemas en litigio, incluida la petición de tregua a ETA, pero también otras como las que afectan a los presos políticos vascos **/2** o al derecho a la autodeterminación. A este respecto experiencias como la de Irlanda y las conversaciones del Sinn Fein con John Major, aun teniendo en cuenta las diferencias entre ambos procesos, sí tienen utilidad para demostrar la viabilidad de procedimientos de resolución de conflictos que terminen con la violencia. La "doble moral" de nuestros gobernantes, que les permite decir no estar dispuestos a dialogar con los "violentos", al mismo tiempo que no han tenido reparos en practicar el terrorismo de Estado y en entablar conversaciones secretas en diversas ocasiones, no es de recibo si lo que se quiere es frenar una escalada de violencia que, por mucha represión que haya, parece imparable.

Lógicamente, optar por el diálogo implica poner en cuestión la participación en

1/ "La asignatura pendiente de la izquierda", en *Viento* Sur, nº 18, noviembre-diciembre 1994.

2/ Por cierto que el grupo parlamentario de IU-IC votó en contra de una proposición de HB en la que se pedía que los presos políticos vascos cumplieran sus condenas en cárceles cercanas a su entorno familiar y social y no sufrieran discriminaciones en lo referente a permisos, visitas o libertad condicional. El diputado de IU Ricardo Peralta llegó a afirmar que "en España no existen presos políticos", negando por tanto esa condición no sólo a los vinculados a ETA sino también a los insumisos. El sectarismo político llegó así al extremo de no reclamar derechos humanos básicos en nombre de "la unidad de las fuerzas antiterroristas".

unos pactos como los de Ajuria Enea y Madrid que, como se ha comprobado de nuevo, sólo sirven para legitimar la vía policial de lucha contra ETA. Como ya escribimos varios compañeros en el debate preparatorio de la IV Asamblea Federal de IU, hay que replantearse la presencia en unas "mesas" en las que persiste la negativa a afrontar las raíces políticas del conflicto y, además, se contribuye a que sigan gozando de amplia autonomía unos organismos estatales cuyo grado de corrupción ha quedado sobradamente demostrado. No hace falta recordar que, desde que escribimos esto, la reapertura del caso GAL, la aparición de los cadáveres de Lasa y Zabala, el escándalo de los fondos reservados o el indulto a dos torturadores miembros de la Guardia Civil, han confirmado con creces tanto el diagnóstico como el pronóstico que hacíamos.

El modelo federal. Dentro de ese diálogo Izquierda Unida debería defender su alternativa de modelo federal basado en la voluntariedad y no en la imposición a las distintas nacionalidades y pueblos del Estado español. Esto debería suponer la defensa del derecho a la autodeterminación y la apuesta por propuestas de regulación del mismo similares a la que en el momento del debate constitucional presentó, por ejemplo, Francisco Letamendía y que por desgracia fue muy pronto relegada al olvido. La incoherencia entre, por un lado, un discurso federalista que asume la necesidad de una reforma constitucional y, por otro, la inercia de declaraciones que, bajo pretexto del combate contra el terrorismo o de la lucha contra las comunidades "ricas", reproducen la peor parte de las concesiones hechas en la transición política, debería ser superada en los próximos tiempos.

Por eso mismo la construcción de una "tercera vía" pasa también, sobre todo fuera de Euskadi, por combatir la peligrosa dinámica de polarización entre "separadores" y "separatistas" que ha vuelto a aflorar a raíz de la instrumentalización del atentado a Aznar por parte de determinadas fuerzas políticas y medios de comunicación españoles. Hay en esto una ardua pero imprescindible labor político-cultural a desarrollar por el conjunto de la izquierda de ámbito estatal y en la que no se puede olvidar que, como ya recordaba en una interesante polémica Borja de Riquer, persiste una situación de desigualdad entre uno y otros nacionalismos: "El nacionalismo español tiene la mayor fuerza de penetración ideológica que le ha proporcionado la larga utilización, exclusiva y abusiva, de los poderes públicos y de todos los medios de comunicación. Son, por tanto, mucho más vulnerables a la crítica antinacionalista los nacionalismos periféricos por su propia debilidad política e institucional" **/3**. Por esa razón el reconocimiento, desde el internacionalismo y el federalismo, del carácter plurinacional, plurilingüístico y pluricultural del Estado español no puede quedarse en mera retórica, sobre todo cuando se hace en Madrid; ha de reflejarse en el establecimiento de puentes de entendimiento y de respeto a la diversidad entre los distintos pueblos y, en el caso que nos ocupa, en la defensa del derecho legítimo de sectores del pueblo vasco a no sentirse "españoles" y a reclamar la libre decisión sobre su propio futuro.

Jaime Pastor

3/ "Sobre el lugar de los nacionalismos-regionalismos en la historia contemporánea española", en Historia Social, nº 7, primavera-verano 1990.

Argentina

El regreso de la historia

Daniel Pereyra

*[*Daniel Pereyra *escribió para nosotros este artículo justo al comienzo de las revelaciones que han desenterrado el horror de la dictadura militar argentina. Desde entonces se han sucedido acontecimientos –sórdidos, siniestros, en su gran mayoría– que no han añadido nueva información sustancial sobre aquella barbarie, pero sí nos ayudan a comprobar la miseria política y moral de los tiempos que vivimos: ¡Esos elogios unánimes a las autoabsoluciones, más que autocríticas, de los jefes militares! ¡Esa velocidad vertiginosa con que esta historia atroz ha pasado de nuevo a los archivos! ¡Ese triunfo de Menem! Hay también, afortunadamente otras noticias que llegan de Argentina: modestas experiencias de reconstrucción de sindicatos clasistas, de reagrupamientos de izquierda... Todo ello justifica sobradamente que volvamos sobre la actualidad argentina en próximos números.]*

"Se le llamaba un vuelo. Era normal, aunque en este momento parezca una aberración.... se les informó que iban a ser trasladados al sur y que por ese motivo se les iba a poner una vacuna, quiero decir una dosis para atontarlos, sedante... después se les subió a un camión verde de la Armada. Fuimos a Aeroparque... se cargaron como zombies a los subversivos y se embarcaron en el avión.... Una vez que decolaba el avión, el médico que iba a bordo les aplicaba una segunda dosis, un calmante poderosísimo... Se les desvestía desmayados y cuando el comandante del avión daba la orden en función de donde estaba el avión, mar afuera de Punta de Indio (Océano Atlántico) se abría la portezuela y se les arrojaba desnudos uno

por uno.

- ¿Qué cantidad de personas calcula que fueron asesinadas de ese modo?
- De 15 a 20 por miércoles.
-¿Durante cuánto tiempo?
- Dos años.
- Dos años, cien miércoles, de 1.500 a 2.000 personas.
- Sí".

(*Confesión del capitán de corbeta Adolfo Francisco Scilingo al periodista Horacio Verbitsky*)

El terrible relato del marino criminal ilustra con precisión algo que ya se sabía y fue denunciado años atrás por los sobrevivientes y las organizaciones de derechos humanos: que el Estado argentino, por medio de las Fuerzas Armadas, aplicó masivamente la pena de muerte a miles de prisioneros políticos, sin juicio, sin defensa, y sin legalización de la pena ni información al detenido, ni a sus familiares.

La Junta de Comandantes en Jefe, la cúpula del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, que desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 detentaba la suma del poder ejecutivo y legislativo, y como puede verse, de hecho también el poder judicial, dispuso una metodología de lucha contra las organizaciones populares armadas y contra toda forma de oposición –sindical, religiosa, estudiantil, o de derechos humanos– que implicaba la participación del conjunto de las fuerzas armadas y de seguridad y el aniquilamiento de la inmensa mayoría de los detenidos. Dotaba de poder de vida y muerte a los jefes operativos y del derecho al botín a los participantes en la represión, según el orden jerárquico castrense.

Los métodos

Los detenidos eran conducidos a alguno de los 340 campos de detención ilegal establecidos en todo el país, regidos en cada caso por la fuerza correspondiente al área. Allí eran torturados con todos los medios y la imaginación de los verdugos de turno en busca de información que permitiera seguir ampliando la represión, y al considerar el caso cerrado, es decir, que ya no se podía extraer información útil al secuestrado, se procedía a su definitiva desaparición, es decir, a su ejecución. Los numerosos casos de muertos en la tortura sufrían el mismo destino: la desaparición definitiva.

Los métodos utilizados variaban según el campo de que se tratara. La Marina parece haber optado por arrojar a los prisioneros desde aviones al mar o a los ríos, vivos o muertos, aunque también el Ejército utilizó en algunos casos tal sistema. Numerosos cadáveres impulsados por corrientes adversas aparecieron en la época en las costas uruguayas o argentinas de los ríos de la Plata, Paraná o Uruguay. Multitud de enterramientos clandestinos aparecieron con cadáveres de prisioneros fusilados o volados con explosivos en jurisdicción del Ejército, como es el caso del campo de La Perla, en la provincia de Córdoba, o en zonas controladas por las policías provinciales o federal.

La utilización masiva del sistema del detenido–desaparecido, así como el posterior intento de hacer desaparecer el cadáver, respondió a una iniciativa de la

alta cúpula del poder, así como la tortura sistemática, sin límite alguno, y la bendición eclesiástica brindada por la jerarquía de la Iglesia y aplicada en los campos y salas de tortura por capellanes de las fuerzas armadas y policiales.

La aplicación de los tormentos, si bien era realizada por especialistas, contaba en ocasiones con la presencia de altos jefes que así apoyaban moralmente a sus subordinados. En cuanto a las ejecuciones, hay testimonios de que los generales han participado personalmente en ellas, haciendo en ocasiones el siniestro primer disparo. Scilingo explicó que en los citados vuelos participaron prácticamente todos los oficiales de la Marina en forma rotativa, en un auténtico pacto de silencio mafioso. El almirante Massera y el general Menéndez, por sólo citar a dos connotados represores, visitaban con frecuencia campos de sus respectivas jurisdicciones. De tal forma se obtenía una complicidad del total de las fuerzas y un espeso manto de silencio sobre los métodos empleados.

La práctica de las desapariciones buscaba negar todo tipo de información a compañeros y familiares, frenar cualquier intento de solidaridad con los presos y sembrar el terror entre la población en general. Una extremada y refinada crueldad impregnaba todo el proceso: detención violenta, torturas brutales y sin solución de continuidad durante días y semanas, cadenas y capuchas permanentes, lugares de encierro carentes de las mínimas condiciones higiénicas, y estado de hambre permanente era el régimen para los detenidos. La muerte en las peores condiciones imaginables, muchas veces bajo engaño, como en el caso de los vuelos. Y para los familiares la incertidumbre permanente de ignorar el destino del preso, la peregrinación por cuarteles y juzgados, el dolor y la angustia durante años y años. Ni siquiera al retirarse los militares del poder accedieron a dar explicaciones sobre lo actuado. Tampoco durante los juicios donde fueron encontrados culpables y condenados. Estos autoproclamados defensores de los valores occidentales y cristianos revelaron una carencia total de justicia e incluso de piedad para sus víctimas, y para mayor escarnio de tales valores contaron con el apoyo explícito de la cúpula de la iglesia católica argentina. Tampoco le faltó a la dictadura el apoyo activo de la gran patronal y de los políticos de la derecha, encantados de un régimen que les procuraba paz social aunque fuera la paz de los cementerios.

La denuncia del genocidio

La propia masividad de tal sistema de represión y muerte fue generando el fin de secreto. Los familiares más cercanos en su búsqueda del desaparecido se encontraban en las puertas de comisarías y cuarteles, de iglesias y despachos oficiales. Luego la formación del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, que con un valor ejemplar hicieron pública su demanda de información primero y de justicia después. Más tarde el surgimiento de la Asociación de ex Detenidos- Desaparecidos, que nuclea a los pocos supervivientes del genocidio y que vivieron la terrible experiencia dentro de los campos. Existen relatos estremecedores donde se narra en forma pormenorizada los horrores que les tocó vivir y los mecanismos de funcionamiento de tal sistema, como los testimonios de Graciela Daleo y de nuestro compañero Roberto Ramírez, entre otros. Y finalmente, diversos organismos defensores de los derechos humanos y un amplio sector de la sociedad que se sumó

"Transcurren los preparativos
que implica un traslado
de varias decenas
de secuestrados,
este es el segundo
en lo que va de julio del 78.
Como en el anterior
hay mucho nerviosismo
con idas y venidas
con abrazos, risas y llantos.
Faltan pocas
horas para la partida.
Los que se van
se emocionan hasta las lágrimas
de dejar atrás este infierno
y de ir al imaginado reencuentro
con la tierra, el aire y el sol
—de aquí a una quinta
hasta que definitivamente
sean recuperados socialmente—,
les han dicho.
Llegan hasta la enfermería
y nos abrazan con pena
porque no fuimos incluidos.
Los último que veo
son sus espaldas
ya en fila
prontas a partir."

Fragmento del libro *Eso no está muerto, no me lo quitaron* de Roberto Ramírez (*Viejo Guillermo*)

a las protestas una vez retirados los militares del poder, cuando la Justicia llegó a la condena de la cúpula de la dictadura militar y al encarcelamiento de Videla y sus cómplices. Por último, las contradicciones surgidas en el seno de las fuerzas armadas a lo largo de estos años, que han llevado a algunos de sus miembros a confesar su intervención en los crímenes cometidos, como el citado Scilingo o los marinos Rolón y Pernía, que al tratarse su ascenso en el Senado relataron que la comisión de torturas y otras aberraciones en las que participaron fue orden de la superioridad. Muy recientemente el capitán del Ejército Héctor Vergez, que actuó en el campo de concentración de La Perla, sugirió con un cinismo absoluto la posibilidad de que se reunieran los militares asesinos y los representantes de sus víctimas para sincerarse sobre los crímenes cometidos "por ambas partes".

Los Gobiernos cómplices

Tras la derrota de la Guerra de las Malvinas, los militares alcanzaron las mayores cotas de impopularidad de su historia. Se revelaron incapaces y cobardes en el ejercicio de su profesión y un tribunal de honor compuesto por

veteranos jefes pidió para varios altos mandos de las fuerzas armadas la pena de muerte. En esas condiciones no era difícil ejercer justicia por sus crímenes de lesa humanidad cometidos contra 30.000 detenidos –desaparición, tortura, robo de propiedades, secuestro de hijos pequeños, asesinato– condenando y encarcelando a todos los inspiradores y ejecutores de tales crímenes. Pero los Gobiernos del radical Alfonsín y del peronista Menem prefirieron pactar con las fuerzas armadas y preservarlas para que pudieran seguir cumpliendo su rol de custodios del orden establecido. Así se acotaron los juicios a la cúpula militar, y una decena de jefes fueron condenados. Luego se estableció una Ley de Obediencia Debida, por la cual en virtud de órdenes recibidas de los superiores se podían cometer los mayores crímenes sin responsabilidad personal. Más tarde se estableció el *punto final*, paralizando todo nuevo juicio contra autores de cualquier delito –secuestro de niños, torturas, etc– cometido bajo la autoridad de la Junta Militar. Y por último, para mayor escarnio de la tan mentada justicia, el presidente Menem procedió a indultar a los pocos condenados, con lo cual y en el lapso de unos pocos años se dio por terminada la responsabilidad de los militares en el mayor crimen cometido en Argentina, el genocidio contra 30.000 personas.

Ni siquiera se exigió la apertura de los archivos y el conocimiento de la verdad de lo actuado ni el arrepentimiento, según los criterios del perdón eclesiástico.

Así los militares comenzaron a levantar cabeza y son muchas las voces que reclaman un reconocimiento oficial de sus méritos en la lucha contra la "subversión". El mismo Alfonsín habló de los militares como los héroes de Malvinas, y Menem ensalzó su labor de defensa de los valores nacionales, contra el enemigo interno.

El broche de oro lo puso Menem cuando el capitán Scilingo realizó su confesión, sugiriéndole que si se sentía arrepentido que recurriera a los servicios de un sacerdote en lugar de provocar escándalo público. Nada de exigir una investigación, de abrir los archivos militares de la represión, ni de procurar justicia a las víctimas y sus familiares. Nada de eso, sino procurar el silencio del denunciante.

Asignatura pendiente

Ante el escalofriante relato de Scilingo, las Madres de Plaza de Mayo y la Asociación de ex Detenidos–Desaparecidos han hecho oir la más autorizada de las exigencias: identificación de todos los asesinos y castigo de sus crímenes en la cárcel.

En esta consigna está la única salida a la profunda deuda que la sociedad argentina tiene contraída con sus hijos desaparecidos y consigo misma. Luchar por el castigo a los culpables del genocidio es hacer honor a los luchadores del pasado, es apostar por el futuro, es frenar a los asesinos del pueblo y a sus inspiradores y cómplices, civiles o militares.

Es asegurar que ningún crimen contra el pueblo ha de quedar nunca impune.

Por eso hoy la denuncia de los crímenes de la dictadura debe continuar, y cada brecha que se abra en el muro del silencio debe ser ampliada hasta conseguir que un vasto movimiento popular exija y logre el castigo de todos los culpables.

Argelia

Las mujeres no se resignan

Samira Fellah

Argelia ha venido a añadirse estos últimos años a las duras experiencias iraní o afgana sobre las relaciones entre mujer e integrismo, caracterizadas por una violencia excepcional. ¿Por qué las mujeres son blancos privilegiados de los islamistas, por qué sirven de instrumento de afirmación de movimientos político-religiosos? ¿En qué consiste la especificidad de la situación de las mujeres que lleva a negarles todos los derechos, a hacerles pagar con su vida combates políticos por proyectos de sociedad que les excluyen casi tanto unos como otros? ¿Por qué sirven de carne de cañón en estas guerras de nuevo tipo? A estas preguntas deberán responder todas y todos los que viven esta realidad. Por el momento sólo tenemos una masa de datos y unas briznas de respuestas.

Desde la independencia de Argelia, tradicionalistas y modernistas libraron una batalla a través del estatuto de las mujeres. En esta sociedad patriarcal, sacudida por las transformaciones sociales que habían introducido la guerra de liberación nacional y las necesidades de reconstrucción del país, las mujeres habían conquistado espacios públicos apreciables, al menos en las grandes ciudades. La generación de mujeres formadas en las luchas democráticas de los años 70 y 80, alimentadas de ideas feministas occidentales, llevadas por los entusiasmos de la independencia, de las nacionalizaciones, de la escolarización masiva de las niñas y del acceso a la universidad, había reaccionado regularmente a cada agresión del régimen, apoyándose principalmente en la legitimidad histórica de las *mudjahidates*. Las movilizaciones de estos núcleos se afirmaron regularmente contra los proyectos de estatuto personal, las leyes restrictivas y discriminatorias en los deportes, el derecho al alojamiento, las autorizaciones de salida del territorio sometidas a la tutela paternal o marital. Bajo la presión de fracciones tradicionalistas del poder, los gobernantes intentaban retomar con una mano lo que daban con la otra y las militantes respondían sin tregua, hasta la adopción del Código de la Familia en el verano de 1984.

Muy pocas de ellas conocían la virulencia de los textos islamistas de la época. Sin embargo las declaraciones de Soltani, en la década de los 70, no tenían nada que envidiar a las de Abassi o de Belhadj actualmente. Es el momento de recordar que las tesis islamistas no han nacido brutalmente un día funesto de 1988 o de 1989. Pero a diferencia de lo ocurrido estos últimos años, eran extremadamente minoritarias.

La génesis

En sus escritos, los islamistas de la época consideraban que el poder argelino era ilegítimo porque no reflejaba la identidad fundamentalmente musulmana del pueblo argelino e impío porque había optado por el "socialismo" y porque llevaba a todo un pueblo a la depravación, autorizando las "prohibiciones" musulmanas

alejando a las mujeres de su misión natural y original de procreadoras y educadoras. Era necesario pues, según ellos, corregir esta profunda crisis moral mediante un restablecimiento de las costumbres, que pasaba necesariamente por una domesticación radical de las mujeres seducidas por "Occidente". De aquí surgieron una avalancha de publicaciones moralistas y de panfletos, entre los cuales los más célebres fueron los de Masmoudi y de Abou Jerra.

Estas tesis, que son las mismas de hoy, muestran con claridad que la cuestión de las mujeres es central en el proyecto islámico como, por otra parte, en cualquier proyecto fundamentalista. Esta cuestión es tan esencial que está en el origen de múltiples divisiones del movimiento islamista. Si las secciones femeninas de El Irchad Ouel Islah, próximas al Hamas de Mahfud Nahnah, en un pasado más reciente, han seguido admitiendo el derecho al trabajo, al divorcio, a la práctica del deporte sin poner en cuestión ni la poligamia ni la preponderancia de los hombres sobre las mujeres, otras tendencias, la del FIS principalmente, llegaban a utilizar barras de hierro contra las estudiantes de las ciudades universitarias para impedirlas salir. A pesar de estas diferencias, todos se ponían de acuerdo en considerar que la edificación del orden islámico pasa por la normalización de la sociedad y por la servidumbre de las mujeres a su papel procreador y de educadoras.

El desarrollo

Estas ideas no podían expandirse en una Argelia en pleno desarrollo, admirada, adulada, rica con su renta del petróleo, que ofrecía trabajo, vivienda y salud para todos, ni tampoco a la sombra de una dictadura que impedía cualquier contestación. Pero la Argelia de los años 80, enfrentada a una crisis económica sin precedentes, ofrecía un escenario propicio para la expresión de la revuelta por la degradación de las condiciones de vida, con sus consecuencias de paro, de exclusión y de empobrecimiento de fracciones enteras de la sociedad. La necesidad de comprender las causas de la descomposición social se colmaba con las explicaciones sumarias propagadas por los islamistas a través de la red que ofrecían las innumerables mezquitas.

Por otra parte, la crisis económica provocaba un repliegue sobre las estructuras tradicionales de solidaridad, reavivando un terreno que los islamistas han podido utilizar.

Las mujeres tenían la culpa de que nada marchara en el país, de que los jóvenes no tuvieran trabajo, los desocupados se drogaran, o estuvieran repletos los orfanatos.

La brecha democrática abierta en 1988 había ofrecido espacios a todos, tanto al movimiento democrático como a los islamistas, pero con una desigualdad de partida: el régimen de Chadli Benjedid no iba a dejar a los movimientos de izquierda desarrollarse, puesto que su política tenía por objetivo desarrollar el *infitah* económico y liberalizar a ultranza. Por el contrario, los islamistas constituían un apoyo excelente en el terreno económico y la confianza en la fuerza del Ejército permitía las maniobras más osadas.

Así se hizo. Las mujeres, que se habían beneficiado también de la apertura para

ampliar su base de presión y habían realizado formidables movilizaciones, se encontraron frente a un enemigo suplementario que se beneficiaba de la complicidad del primero. Sus protestas eran tratadas como "chillidos", igual que la revuelta de los jóvenes era considerada un "alboroto de críos". ¿Qué peso podían tener las reivindicaciones de las mujeres frente a tal situación?

Se desarrollaron las prédicas más violentas contra las mujeres y se multiplicaron las violencias físicas impunes. El Gobierno se obstinaba, sin embargo, en considerar estos actos, sintomáticos de una confianza en aumento de los islamistas en su propia fuerza, como excepcionales, como simples "sucesos". Confiando en su poder, les dejó decir y hacer, pensando poder poner las cosas en su sitio cuando quisiera.

La confrontación

Las movilizaciones de esos años estaban encuadradas por la generación de mujeres de 40 años cuyas filas se ampliaban a jóvenes activistas de los movimientos estudiantil y bereber, únicos bastiones en los que las ideas de izquierda se perpetuaban, se renovaban. En el resto de la sociedad, el radicalismo tomaba poco a poco la forma del islamismo y el discurso misógino del FIS respondía a las frustraciones de los jóvenes y a sus rencores. El éxito electoral del FIS en las elecciones municipales de 1990 les convenció definitivamente de que estaban en el campo de los vencedores.

En esa época, campaña electoral obliga, era a las mujeres a las que había que liberar de sus cargas, era a las mujeres a quienes había que rehabilitar, "démosles agua, viviendas decentes, salarios", pero a condición de que permanezcan en la casa, que hagan hijos y que dejen a los hombres, traducid por los hombres del FIS, ocuparse de los asuntos serios, los del Estado. La mayoría aplastante de las mujeres, las trabajadoras sobre todo, cansadas por la vida cotidiana, por la doble jornada agotadora, los transportes difíciles, las penurias de agua y de alimentos, los horarios imposibles de los niños escolarizados, se dejaron llevar por este discurso. Otras, jóvenes principalmente, encontraban en el activismo militante unos espacios de libertad, un derecho al movimiento que la sociedad tradicional no les habría nunca permitido de otra manera. Tenían derecho, además, a un reconocimiento social nunca soñado por parte de padres, hermanos y vecinos. A ese precio, el velo no significaba nada. De signo de opresión, se convertía en un medio de afirmación propia. Han sido estas mujeres las que han servido para oponer a las reivindicaciones feministas los argumentos más contrarios a los derechos de las mujeres. Son ellas a las que se han hecho desfilar, por millares, en las calles de Argel, de Constantina y de Blida, reclamando un Estado islámico que no les consentiría más que el papel de reproductoras de la especie.

Nada de extraño pues en que estas mujeres en lucha por sus derechos de una parte, y el integrismo de la otra, se hayan encontrado, poco a poco, en una confrontación cada vez más directa, cada vez más violenta.

Es esta confrontación, crecientemente desigual, la que se traduce hoy en los secuestros, las violaciones, los asesinatos de mujeres, incansablemente denunciados por los núcleos organizados de mujeres.

Estas manifestaciones extremas de la violencia contra las mujeres son relativamente recientes puesto que al comienzo de la guerra civil larvada, las mujeres estaban excluidas de las listas de exacciones. Una *fatwa* general había decretado que sólo se podía matar a una mujer si llevaba armas. Es así, por otra parte, como fue justificado el primer asesinato, el de la joven Belhadj, secretaria de policía. Se oía explicar en la televisión al informador de este asesinato que habían hurgado en el bolso de la joven en el suelo hasta encontrar allí una pistola inexistente. Sólo una decena de meses más tarde, Katia Abad, bachiller de 17 años, fue abatida en una parada de autobús de Meftah, por haberse negado a llevar el *hidjab*. Siniestro ejemplo de la campaña de terror, que amenazaba de muerte a todas las mujeres que no aceptaran plegarse a esta conminación. Campaña fracasada, por otra parte, puesto que fuera de los pueblos donde la hegemonía reciente de los grupos armados integristas, conjugada con el tradicionalismo es indiscutible, las mujeres han continuado yendo a la compra, al trabajo, con la cabeza descubierta, ocupando la calle, ostensiblemente, durante el día. Es la época en que las mujeres, extranjeras unas respecto a las otras, intercambiaban sonrisas y miradas, en una complicidad teñida de malicia, sacando coraje y energía en esta resistencia compartida, tan alejada de las manifestaciones ruidosas y alegres de los años precedentes.

Luego han venido los asesinatos sangrientos de mujeres acompañando en la muerte a sus maridos, hermanos o padres designados por los grupos armados como funcionarios o simples apoyos del sistema. Jóvenes, viejas, mujeres embarazadas... la televisión comenzó a hacer desfilar las imágenes de sus cuerpos ensangrentados, de sus gargantas rajadas, de sus vientres abiertos. Las dos jóvenes de Birtuta, cerca de Argel, en noviembre de 1994, mostraron el horror de las jóvenes secuestradas y violadas. Los arrepentidos, desfilando en la pantalla, se pusieron a describir las prácticas salvajes y primarias de los grupos de guerrilleros. La guerra de los *kouffars* era total: en nombre del *djihad* islámica contra los impíos, el robo y la violación eran ya autorizados. El miedo, hasta entonces reservado a los representantes modestos del poder, policías, gendarmes, pequeños funcionarios del Estado y sus familias, a los militantes de partidos cómplices del golpe de Estado de enero de 1992, a los intelectuales percibidos como aliados del régimen, se extendía a toda la sociedad.

Por el derecho a la vida

La incorporación al curso escolar en septiembre de 1994, prohibida desde agosto por los comunicados del GIA, se realizó a pesar del miedo generalizado. Enviar los hijos a la escuela, y sobre todo acudir a ella cuando se era enseñante, requería una gran valentía, voluntad de no ceder a una sucia guerra entre dos poderosos antagonistas armados.

De todas las manifestaciones organizadas estos últimos años contra el terrorismo, la del 22 de marzo de 1993 convocada por la Unión General de los Trabajadores argelinos y la del 22 de marzo de 1994 convocada por las mujeres, corresponden a momentos de revuelta sincera contra la violencia. El llamamiento a esta última manifestación contenía términos innobles, en los que afloraban el

racismo neo-*pied noir* de ciertos sectores de la pequeña burguesía a la que esta guerra privaba de sus mezquinos privilegios, del tipo "ya no puede uno beber tranquilamente su cervecita con los amigos". Pero las mujeres que constituían los dos tercios de los manifestantes, reclamaban esencialmente el derecho a la vida, a la diferencia, y ciertamente no el asesinato organizado de centenares de miles de jóvenes desesperados de la vida hasta el punto de quitársela a los demás, en un juego siniestro de doble o nada con la historia.

Ni FIS ni Ejército

Los verdaderos lugares de encuentro son, desde hace ya tiempo, los entierros. Es allí donde se intercambian las informaciones, los consejos, las direcciones discretas; allí se organizan la solidaridad, las salidas, las adopciones. Es ahí donde cada cual, pero sobre todo las mujeres, toman nuevas fuerzas gracias a los difíciles y precavidos contactos, a la posibilidad de compartir la pena y la angustia. El entierro de la señora Ourais, enseñante y militante feminista, asesinada en la calle, en el mes del Ramadán, reagrupó a centenares de mujeres, enseñantes en su mayor parte. Las palabras intercambiadas eran más compromisos de resistencia que mensajes de desesperación. El miedo está ahí, por supuesto, pero también hay cólera ante la impotencia de una población atenazada en una guerra cuyos medios la superan, cuyas formas la sublevan.

Con el innoble asesinato de Nabila Djahnine, presidenta de la Asociación Grito de Mujeres, se ha franqueado una nueva etapa. A través de ella, claramente, las militantes aparecen como objetivo, porque son los eslabones más firmes en la oposición al proyecto islamista. A través de ellas se quiere hacer callar a las voces más claras, para poder dominar a toda la sociedad. La lógica de los grupos armados consiste no sólo en aislar al régimen, tanto en el exterior como en el interior, acosarle en todos los frentes a fin de atomizar sus fuerzas, sino también en paralizar a la población de forma de que se destruya toda veleidad de oposición a su voluntad de conquista del poder.

Pero las mujeres no han podido contribuir a la construcción de una tercera fuerza, un frente de oposición a los islamistas, independiente del poder. Como en los años de apertura democrática, no pudieron obligar a todos los que se proclamaban demócratas a ser consecuentes con ellos mismos. Más afectadas que nadie por el proyecto islamista, las mujeres tenían una conciencia más aguda del peligro. *Casandras* imposibles de silenciar para muchos "demócratas", han obtenido, aquí, allí, apoyos a veces reales, aunque a menudo dichos con la boca pequeña, en momentos cruciales. Cuando la campaña por candidaturas de mujeres en las legislativas de 1991, y las luchas universitarias, los límites fueron lamentables y trágicamente visibles.

En la edificación de una fuerza real, los líderes "democráticos" preferían ostensiblemente los medios de comunicación. Mientras unas militantes se gastaban en la tarea, otra, disfrutaban con frases bien construidas ante las cámaras de ultramar. No es que la utilización de los medios de comunicación sea inútil para un trabajo de propaganda, sino que ellos y ellas olvidaban la necesidad de trabajo en el país. La nefasta lógica mediática continúa, puesto que los divos políticos, al abrigo en el exilio, viviendo de declaraciones intempestivas, hacen pagar sus posiciones, ya personales, a quienes han elegido no abandonar el país.

Nabila Djahnine, opuesta, en enero de 1992, a los llamamientos al Ejército que harán de los islamistas mártires de la democracia, determinada a proseguir su lucha de mujer y de demócrata por la resistencia tenaz, cayó bajo las balas del enemigo.

Las tradiciones unitarias dominantes en el movimiento feminista han impedido siempre denunciar las mentiras más flagrantes y las declaraciones menos respetuosas de la pluralidad de las posiciones. La negativa a aparecer divididas ha encerrado a toda una fracción del movimiento mujer, desde enero de 1992, en un silencio que ha contribuido a hacer creer que ya no militaban. Y sin embargo, mientras que esas grandes señoras participan valientemente en los platós ilustres de las cadenas de televisión francesas, hay militantes, modestas, discretas, que continúan trabajando, enseñando a pasar de las escuelas incendiadas, hasta en los barrios calientes y los pueblos alejados, que participan en la huelga de hambre de los despedidos de las trabajadoras de correos, en octubre de 1994, que organizan la huelga de los petroleros en noviembre y negocian los convenios colectivos en diciembre, que trabajan sin descanso en la formación de jóvenes militantes feministas, que mantienen los contactos entre gente comprometida, mediante encuentros regulares, y denuncian, de cerca, a los asesinos.

A todas estas mujeres valientes, que desafían el peligro cotidianamente, se les debe un homenaje particular. Una solidaridad particular también. Evidentemente, hay que mantener y extender la que se dirige a las refugiadas. Pero ésta no debe hacer olvidar la que tanto necesitan todas estas argelinas y todos esos argelinos que consagran su energía a vivir normalmente, a reducir el peso de la tensión y de la emoción y gracias a los cuales, Argelia no es aún un país de resignados.

INPRECOR nº 389/ Marzo de 1995/ París
Traducción: Alberto Nadal.

El integrismo islámico, una amenaza mortal para las mujeres

Suad B.

El ascenso del integrismo islámico en el Magreb, principalmente en Argelia, constituye un peligro mortal para las mujeres de esos países. Los asesinatos de mujeres, algunas ejecutadas públicamente por haberse negado a llevar el velo islámico o por haber salido con los brazos descubiertos, se cuentan por centenares. Secuestros, violaciones colectivas, degollamientos son, para las mujeres, la actualidad cotidiana de un país desgarrado entre la dictadura sanguinaria de los actuales dirigentes del Ejército y las abominaciones de los integristas. La evolución de la situación en Argelia no puede dejar de tener ecos en la situación de la emigración en Europa y particularmente en Francia donde la población de origen argelino es numerosa (800.000 argelinos más son todos los que, incluso siendo de nacionalidad francesa, mantienen lazos estrechos con su país de origen).

A la inversa, los integristas no pueden esperar triunfar en Argelia sin intentar ganar o meter en cintura a una inmigración argelina en Francia que ejerce una influencia no despreciable en la misma Argelia, desde un punto de vista económico, en parte, pero sobre todo desde un punto de vista cultural.

Incluso si la insuficiencia de los lazos del movimiento obrero en general y de la izquierda radical en particular con los medios populares de la inmigración magrebí residente en los barrios periféricos no permite medir con precisión su amplitud y audiencia, hay demasiados datos que concuerdan: se está desarrollando una ofensiva islámica integrista. Hablando claro: los dirigentes islámicos pretenden hacer jugar a la población de origen musulmán en Europa –y particularmente en Francia donde es la más numerosa– en su beneficio y bajo sus criterios, el papel logístico y financiero desarrollado por la Federación de Francia del FLN durante la guerra de Argelia. Con la enorme diferencia de que el FLN llevaba a cabo una revolución anticolonial contra la opresión francesa, mientras que los integristas dirigen una guerra contra su propio pueblo, en primer lugar contra las mujeres, para establecer su dictadura teocrática y obscurantista, que sustituya a la de los actuales dirigentes del Ejército.

Una ofensiva contra las mujeres

En Francia, como en el pasado en Irán o actualmente en Argelia, la ofensiva islámica toma como objetivo principal a las mujeres. Esto no tiene nada de sorprendente. La religión y las sociedades tradicionales musulmanas han creado un terreno favorable a la exacerbación de los prejuicios en su contra. Sin hacer toda la lista de las abominaciones reivindicadas y practicadas por el integrismo, recordemos no obstante el matrimonio forzado, la poligamia, el derecho al repudio, el de la violación conyugal, los golpes, la reclusión, etc. Estas prácticas no son ciertamente exclusivas del integrismo y siguen usándose en países y medios que incluso pueden oponerse a él. Pero, consecuencia de la urbanización, de la cohabitación con la cultura occidental aunque sólo sea por la televisión o la difusión de los medios de comunicación, y de la reivindicación tenaz de las mujeres, estas costumbres han podido parecer, durante un tiempo, en vías de regresión.

El integrismo islámico pretende no sólo frenar esta evolución sino llevar a las mujeres catorce siglos hacia atrás.

Dicho esto, no estamos tratando un problema de religión. El islamismo no es una variante de la religión musulmana. Es la utilización de esta religión con fines políticos ultrareaccionarios, como fue el caso del integrismo católico de la primera mitad del siglo, entonces utilizado en Francia por la extrema derecha fascista. Es indudable la realidad de esta ofensiva y que las mujeres originarias de los países de tradición musulmana son su primer objetivo. Según el ministro francés de la Educación Nacional, François Bayrou, cuatro alumnas llevaban el velo al comienzo del curso de 1989; eran cerca de 2.000 en septiembre de 1994. Se pueden discutir las cifras. Pero, a falta de otros datos, hay que apoyarse en ellas, tanto más cuando no parecen desproporcionadas con los ecos que nos llegan por otros lados. No hay generación espontánea. Que centenares de alumnas, probablemente miles de mujeres en el país, se hayan puesto a ostentar el

velo en el plazo de algunos años, no es ni el efecto del Espíritu Santo, ni el del repentino entusiasmo por el símbolo de su opresión, pese a que generaciones de militantes, mujeres y hombres progresistas han luchado encarnizadamente por obtener el derecho a no llevar ese velo. Es el resultado directo o indirecto de una campaña decidida y organizada por los integristas, una campaña para ganarse a los hombres, ofreciendo a los más atrasados de ellos la confusa compensación de hacer pagar a las mujeres las humillaciones que sufren como explotados y como inmigrantes.

Por supuesto, las motivaciones de las jóvenes que se ponen el velo "libremente" pueden ser diversas y todas no adoptan, automática ni íntegramente, las concepciones integristas del papel y del lugar de la mujer. Es al menos lo que afirman las que se expresan (o a las que se les deja expresarse). Es cierto que las otras, a las que sus padres o sus hermanos obligan a ponerse el velo, no se expresan. Hacerlo o denunciar públicamente la obligación sería el comienzo de un combate mucho más difícil.

Quizá algunas jóvenes deseen proclamar su identidad (y su odio por el racismo) portando el velo. Pero otras miles, y quizá decenas de miles reivindican que quede prohibido para no ser obligadas, ellas mismas, a llevarlo contra su voluntad. El *hidjab* islámico es un uniforme integrista, es un signo de intolerancia que insulta a las que no lo llevan, considerándolas "putas", como cuenta Taslima Nasreen.

La realidad de la ofensiva

Según las informaciones parciales que podemos tener, decenas (¿centenares?) de asociaciones más o menos inspiradas por los integristas actúan en los barrios en numerosos dominios de la vida asociativa, supliendo en una cierta medida el papel social que los servicios públicos descuidan y el que las asociaciones, los sindicatos y las organizaciones de izquierda no cubren. La primera cadena de la TV francesa ha difundido recientemente un reportaje sobre "el *cuscús* de la amistad" generosamente distribuído en Lille por una asociación islámica (mujeres con velo cocinando bajo la mirada de los barbudos). En La Rochelle, han sido pegados carteles llamando a una distribución idéntica (y regular), precisando que el alcohol y el tabaco están prohibidos. Ayuda social, encuadramiento de la juventud, incluso caza de los camellos, campamentos y vacaciones, alfabetización, cursos sobre la civilización musulmana, apoyo escolar y, por supuesto, control de los lugares de culto: los integristas tejen su red, llenando los vacíos dejados por los servicios públicos y las asociaciones laicas.

Aunque debamos tomarlas con las precauciones de rigor, hay informaciones de la prensa francesa y extranjera sobre la constitución de redes de apoyo a los integristas argelinos en Europa. La prensa alemana ha señalado una red de exportación de armas hacia Argelia; la prensa británica habla de colectas de fondos y de chantaje a los argelinos emigrados al Reino Unido. Finalmente, tanto sobre el atentado perpetrado este verano en Marruecos como más recientemente sobre el desmantelamiento de una red de apoyo al GIA, la prensa ha mencionado la existencia de tales redes en Francia. Estas informaciones, difícilmente verificables porque emanan de fuentes policiales que tienen sus intereses propios y

no dudan en practicar la intoxicación, tienen sin embargo cierta credibilidad. En efecto, ¿cómo creer que organizaciones comprometidas en una sangrienta lucha armada contra la dictadura de los militares argelinos no sueñen con utilizar todas las complicidades posibles, empezando por la de sus conciudadanos en Europa? El dinero puede ser proporcionado por tal o cual Estado islamista. Pero no los hombres que compran, almacenan, transportan y utilizan las armas. Ganar a los emigrantes es una necesidad tanto militar como política. Y habría que ser muy ingenuo para creer que los integristas no han comenzado ese trabajo.

El asesinato de los residentes extranjeros en Argelia, particularmente franceses, igual que el secuestro del airbus Argel-París, se inscriben en esta lógica. Este último es evidentemente un desafío. Como han subrayado los comentaristas, ni la compañía apuntada (Air France), ni el destino reivindicado (París), han sido elegidos al azar. Se trataba de una señal dirigida a las autoridades francesas. Pero ahí no estaba quizá lo esencial, pues los dirigentes islámicos tienen suficientes contactos con el Gobierno francés para hacerle conocer sus peticiones y hacerle saber su determinación. Se trataba también de un gesto político hacia la población francesa y la población inmigrante en Francia. La humillación que el GIA pretendía hacer sufrir a las autoridades francesas debía constituir una venganza por las humillaciones sufridas por los inmigrantes en este país, y la indignación provocada por su acto reforzar el racismo en Francia. Pues, digan lo que digan, el racismo que echa a los inmigrantes a brazos de los integristas les sirve, les proporciona un vivero de simpatías y de apoyos. Que a fin de cuentas el proyecto haya abortado, no cambia nada. Volverán a intentarlo.

Una ilusoria dignidad

En los países subdesarrollados, el integrismo se alimenta de la miseria material y moral, como todo el mundo sabe. En Francia también, incluso si la pobreza toma aquí aspectos materialmente atenuados pero moralmente igual de insoportables.

Predicando la vuelta a la "tradición", lanzando el anatema sobre el Occidente depravado, halagando el nacionalismo y atizando los prejuicios antifeministas más retrógrados, los integristas han hecho de su concepción de la religión un arma política. Privada de toda esperanza, víctima del racismo, objetivo predilecto del acoso policial, condenada al paro o al trabajo precario, aparcada en las ciudades ghetto, olvidada por los organismos sociales e ignorada por las organizaciones tradicionales de la clase obrera, una fracción de la población originaria de los países de tradición musulmana puede ser tentada a volverse hacia los demagogos que, a falta de proponerles una salida real, les ofrecen reconquistar una ilusoria dignidad combatiendo mediante los medios más radicales un mundo que les ignora y les desprecia.

Este sector de la población es de las que más ha sufrido el freno del crecimiento económico desde 1974. Mano de obra no especializada en el caso de la generación de los padres, una parte importante de los empleos que ocupaba en los sectores más afectados por la crisis (siderurgia, carbón, construcción, automóvil, metalurgia) han desaparecido sin que, por razones culturales o a falta de las relaciones necesarias, gozara de solidaridades y de posibilidades de reconversión

profesional o regional. Numerosos trabajadores inmigrantes han sido abandonados a su suerte. Muchos de sus hijos, los de la segunda o la tercera generación, no han conocido nunca otro horizonte que las ciudades ghettos y la ayuda social.

Sin embargo, desde hace varios años, los organismos sociales que, en el período precedente, tomaban a su cargo a las familias o los grupos con dificultades se revelan inoperantes. Concebidos para resolver "casos particulares", están desarmados en cuanto la miseria material y moral se hace regla. La cuestión no es entonces ya de su competencia. Competería a medidas económicas y políticas. Pero, en esa materia, todos los gobiernos que se han sucedido desde hace veinte años se han dedicado a agravar las condiciones de vida de las categorías más vulnerables de la población, disminuyendo los salarios reales y limando las prestaciones sociales y la indemnización del paro.

Se está lejos del 90% del último salario bruto concedido por Chirac en 1975 a los despedidos por razones económicas, con el fin de ir aclimatando a la clase obrera para el regreso de la plaga del paro. El paro hoy conduce inmediatamente a una reducción drástica de las rentas y, a corto plazo, con la rápida disminución de las indemnizaciones, a un descenso dramático del nivel de vida, desencadenando el proceso de marginación de todo el grupo familiar.

Quistes de miseria

Los servicios sociales están desbordados, reducidos a no intervenir mas que sobre los casos de urgencia o los más graves, descuidando la pobreza "ordinaria". Una fracción de la población, entre ella numerosos inmigrantes, tiene el sentimiento de estar abandonada. Asistentes sociales sin medios, alcaldías desbordadas, infraestructuras sociales inadaptadas, transportes públicos degradados, oficinas de correos alejadas, calles abandonadas, barrios de viviendas protegidas que concentran los problemas de ruido, vecinaje, pequeña delincuencia, toxicomanía, etc., establecimientos escolares que acumulan los fracasos y las dificultades, todo concurre a hacer de ciertos barrios y ciertos ambientes quistes de miseria.

A estas condiciones, que son el lote común de los habitantes de los barrios "podridos", se añaden para los extranjeros las consecuencias de las políticas de lucha contra la inmigración pretendidamente clandestina que, desde hace veinte años, han llevado a cabo todos los gobiernos sin excepción. Sin conseguir en absoluto frenar el ascenso del paro (pero ese no era su verdadero objetivo), estas políticas han reforzado el racismo en la población francesa y llevado a excluir a decenas de miles de extranjeros de los circuitos económicos y sociales legales.

Según un viejo tópico, quizá en vías de verificación, la sociedad americana, en adelanto de uno o dos decenios sobre Europa, es una prefiguración del futuro del viejo continente: a una clase media instalada en una vida más o menos confortable (pues, en su seno también las diferenciaciones sociales son importantes y reina la explotación), se opone el mundo de los *ghettos* de los centros de las ciudades, duraderamente instalados en la marginación, la violencia, la droga y la miseria. No hemos llegado aún a eso en Francia, pero

nada dice que no lleguemos, si no se hace nada para impedirlo. Con la importante diferencia de que, con lo que podemos juzgar desde aquí, toda esperanza, incluso mítica, parece haber abandonado al pueblo de los *ghettos* norteamericanos, mientras que no está asegurado en Europa, y particularmente en Francia, que el pueblo de los ghettos en vías de constituirse no responda al llamamiento de los demagogos si nadie más se dirige a él.

Pasqua, con su pasado y su estilo, y la competencia de Le Pen y de Villiers, no podían hacer menos que añadir la demagogia antiinmigrante generadora de racismo.

Sus recientes medidas limitando el derecho de asilo y limitando el reagrupamiento familiar dan, de hecho, un poder casi discreccional a la policía en materia de expulsión de "clandestinos". La brutalidad con la que son aplicadas conduce a situaciones vergonzosas: padres expulsados mientras que los hijos de nacionalidad francesa son confiados a la DDAS, conyuges de franceses llevados a la frontera, enfermos de sida despedidos, enseñantes con trabajo despedidos y expulsados, jóvenes delincuentes expedidos a un país del que no conocen nada, etc. A falta de "aterrorizar al terrorista", Pasqua intenta aterrorizar a los extranjeros. Los discursos sobre "la lucha contra la inseguridad", contra el paro, contra la "inmigración clandestina", pronunciados por Pasqua no son sino malos pretextos. Como sus predecesores, sabe perfectamente que desde ese punto de vista, la eficacia de sus medidas es nula. Incapaz de alcanzar los objetivos que proclama, hace de los inmigrantes chivos expiatorios con la esperanza de cortar electoralmente la hierba bajo los pies de Le Pen y de Villiers. Toda la población de origen inmigrante, francesa o no, está alcanzada. No tener el "tipo europeo" es ser objeto de la sospecha policial, a veces ayudada por otros servicios (controladores de la RATP, ciertas policías municipales, incluso ciertos funcionarios de servicios sociales). Las medidas de Pasqua concurren a expandir y a agravar el racismo en ese país y, de rebote, a lanzar en los brazos de los integristas la fracción de la población originaria de los países musulmanes. Más allá de las baladronadas, Pasqua y sus medidas inicuas contribuyen al desarrollo del integrismo en el país, desarrollo del que, a su vez, la extrema derecha saca argumentos para alimentar sus campañas racistas y reforzarse.

Una situación explosiva

Numerosos jóvenes de las periferias, de cualquier origen, incluso aquellos jóvenes magrebíes que tienen un lugar importante, manifiestan a través de explosiones de cólera su exasperación ante la situación en la que se encuentran y ante el racismo del que son víctimas. El asunto de Amiens, donde la agresión policial deliberada, a golpe de granada lacrimógena, contra una reunión de jóvenes que festejaba un aniversario ha desencadenado dos días de motines, es significativa. Esta explosión no es ni la primera, ni la última. Les Miguettes, Vaux-enVelin, Roubaix, Les Mureaux, le Val Fourré, etc. son otros tantos nombres de ciudades-ghettos que aparecen en las portadas de los periódicos al ritmo de las explosiones juveniles y que hacen tanto más urgente su organización.

El contacto con estos jóvenes de las barriadas, "inmigrantes" o no, la comprensión de los problemas que plantean y que se plantean, la actividad para combatir la marginación en la que les encierra la sociedad son indisociables de la lucha contra el integrismo y el Gobierno. Abandonarles a la miseria material y moral y a las razzias de los policías por un lado, y dejar que las chicas se dejen poner el velo por los integristas por el otro, proviene la misma ausencia de política frente a dos peligros complementarios: el control de los jóvenes magrebíes por el fascismo integrista y el desarrollo de las ideas racistas y de las medidas xenófobas en el resto del país. Integristas islamistas y dirigentes france-ses se apoyan mutuamente. No hay otro medio de salir de esta trampa que inician la ofensiva contra uno y contra otro. Sin concesiones.

Ahora bien, el retroceso de la presencia militante se ha hecho notar en estos barrios más que en otras partes. Asociaciones, sindicatos y organizaciones políticas estaban principalmente implantadas en las grandes empresas y en los sectores más cualificados de la clase obrera . Incluso en estos medios, sufren un retroceso significativo desde hace una quincena de años. Éste es aún mayor en los sectores marginados de la población. La fractura social se ha traducido también en la separación con los militantes.

Reconstruir el tejido social

Esta carencia se manifiesta de numerosas formas: la actividad de barrio dormita y, donde continúa existiendo, es llevada a cabo a menudo por militantes que no tienen ya una visión transformadora de la sociedad. Toma una coloración mas caritativa que reivindicativa. Es urgente reconstituir el tejido asociativo antes de ser adelantado por los islamistas.

No pasa prácticamente una semana sin que aquí o allí un joven sea asesinado en circunstancias dudosas. Legítima defensa, pretenden sistemáticamente los asesinos, policías o no. Es quizá cierto a veces. Pero no tenemos ninguna razón para creer su palabra. El asunto de Amiens lo prueba. Pero los colectivos de abogados, las personalidades que podrían sistemáticamente ayudar a las familias y a los compañeros de los jóvenes a establecer la verdad ya no existen.

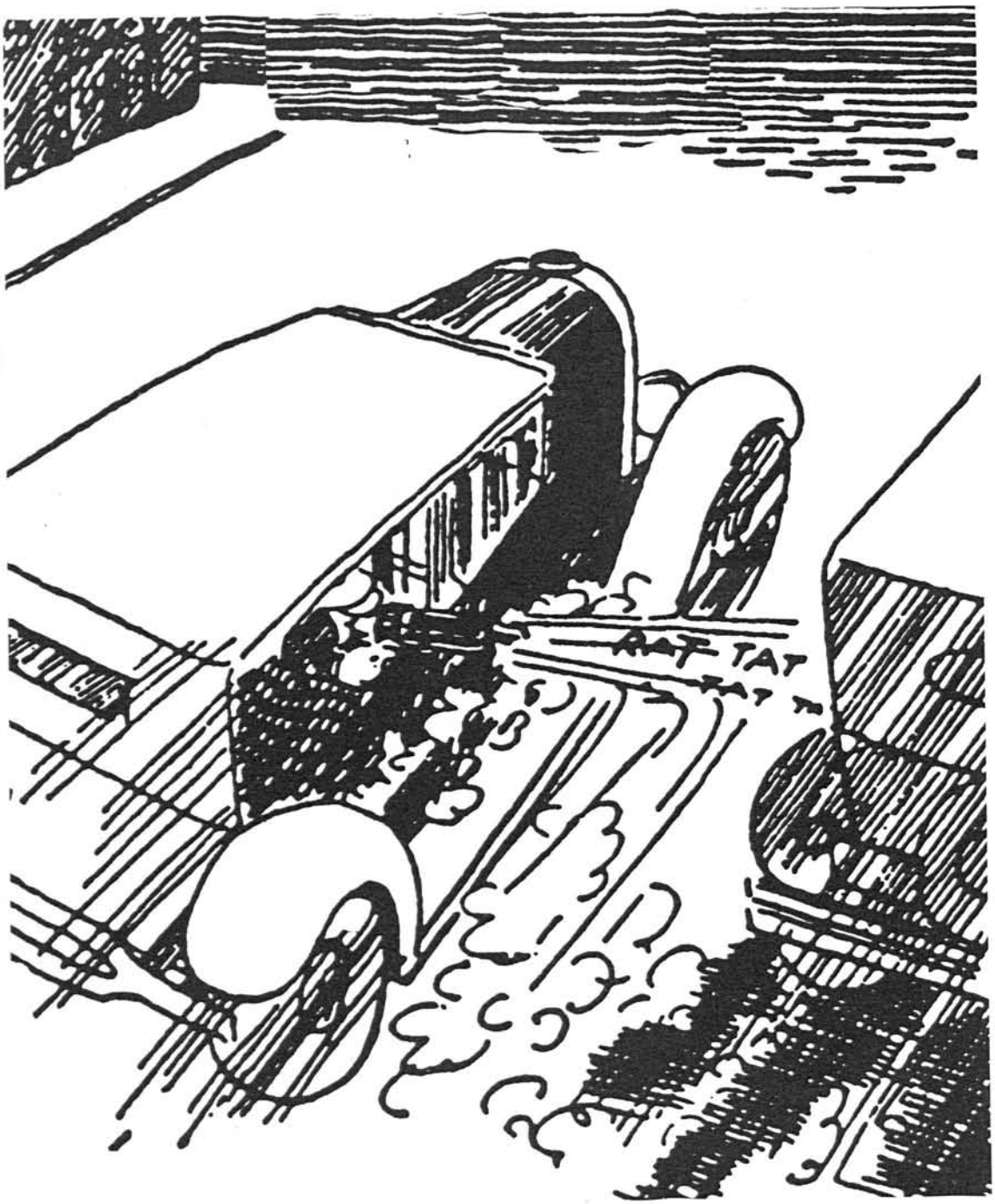
Las explosiones de cólera que se producen regularmente en las barriadas no toman necesariamente las formas más eficaces para alcanzar los objetivos que se proponen (cuando se lo proponen explícitamente, pues son a veces explosiones brutas). Pero ¿qué hacemos para que no se dispersen en el humo de los incendios de coches? Si la presencia de militantes de la LCR ha sido sensible en las manifestaciones que, el año pasado, siguieron al asesinato de un joven en una comisaría del XVIII distrito, es porque tenían lugar en París y no en Nantes, Amiens o en Minguettes, reflejo de un trabajo local más o menos adelantado.

Evidentemente, el cumplimiento del conjunto de estas tareas supone fuerzas militantes de las que la izquierda radical está lejos de disponer. Pero, felizmente, la cuestión no se plantea únicamente bajo ese ángulo.

Es, en efecto, posible (y es de esperar) que sometidos a la triple presión de la situación social, de las medidas de Pasqua y del ascenso del integrismo en

Francia y en Argelia, un sector de los jóvenes, y más aún de las mujeres, jóvenes y menos jóvenes de estos barrios sientan la necesidad de tomar posición y de actuar contra el futuro siniestro que se les prometió por todas partes. En realidad, si hay solución, se encuentra entre las jóvenes y los jóvenes. Corresponde en primer lugar a ellas y ellos combatir las tentativas de colocarles bajo la dictadura del orden moral, sea el de los integristas o el de Le Pen. A todos los jóvenes. Y más aún a los y las que, de la primera, segunda o tercera generación, son originarios de países de tradición musulmana. Pues son ellas y ellos los primeros que están en el punto de mira. Son estas jóvenes a las que los integristas quieren cubrir con un lienzo, son estos jóvenes a los que quieren desviar del combate por la emancipación social para encerrarlos en la prisión del oscurantismo y de la opresión. Son ellos también a quienes oprimen el racismo y la política gubernamental. Son ellos a los que es urgente ayudar a movilizarse para combatir el integrismo en los institutos y en los barrios. ¿Serán capaces los revolucionarios de hacerlo, empezando por aclarar sus ideas sobre el problema?

INPRECOR nº 389/ Marzo de 1995/ París
Traducción: Alberto Nadal


RAT TAT
RAT TAT

México

Rosario Ibarra

"Esta solidaridad tan humana, tan bella, debe continuar"

Entrevista de Alfonso Moro

[A finales de marzo pasado, la diputada mexicana Rosario Ibarra *realizó una gira por varios países europeos. Desgraciadamente, y pese a sus deseos y los de la gente de aquí solidaria con Chiapas, no fue posible acogerla en el Estado español. A falta de su presencia, nos han llegado al menos sus palabras en esta entrevista realizada por* Inprecor para América Latina.*]*

P.: A tu parecer ¿piensas que se puede hablar de una crisis histórica, incluso terminal en México?

Rosario Ibarra: Sí, es lo más probable que se esté en una fase terminal del régimen político mexicano. El problema que siempre hemos visto en México es que esta crisis, que tiene elementos muy patéticos desde el punto de vista de sus consecuencias y repercusiones para la sociedad, no trae aparejada inmediatamente una alternativa global a ella.

Ahora los elementos más factuales de la crisis serían más o menos los siguientes: el descrédito de la población frente al partido oficial y al Gobierno. La gente dejó de creer en el Gobierno, a diferencia de antes, que sí le creía.

En segundo lugar, otro elemento que está evidenciando esta crisis es la división y los asesinatos al interior del propio partido oficial; la forma como se asesinó a Colosio y a Ruiz Massieu [secretario general del PRI en el momento de su asesinato], implica que las viejas normas y reglas que existían antes para reproducir el sistema político mexicano no existen más. El problema es que no hay todavía nuevas reglas, y eso hace que los aspectos más violentos de ese régimen salgan a flote no sólo contra la población, sino incluso contra ellos mismos.

Tercero, lo que se conocía como la política de masas del Estado, que fue afectada por lo que se conoció en el Gobierno de Salinas [1989-1994] como el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol); ahora, esa política que durante muchos años realizaron sectores del PRI, de la clase obrera, del campesinado, etc. no tiene el mismo peso, pues con el proceso de lo que llaman desregulación económica todos esos mecanismos de control también han sido desregulados, y ahora no tienen la misma capacidad para hacer una mediación entre la sociedad y el Estado.

Y habría uno más que, creo, también juega su papel, que es el cambio que, por la misma crisis, el Gobierno se ha visto obligado a llevar a cabo, en lo que era la tradicional política institucional del Ejército mexicano; al utilizar al Ejército federal como fuerza de choque política, al meterlo a perseguir a los zapatistas en la Selva Lacandona, al estar en contacto permanente los soldados con las comunidades indígenas, pues lo que ha traído es un efecto muy difícil para el Ejército, en tanto tiene elementos nuevos de discusión política que no existían antes, de acceder a tener una opinión política, y por lo tanto cada vez que el Ejército tiene esa

posibilidad surgen diferentes posiciones, incluso algunas más patrióticas y democráticas, y algunas profundamente reaccionarias y fascistas. Pero, en última instancia, a diferencia de lo que sucedía antes, el Gobierno no tiene la posibilidad de controlar, digamos de manera tranquila, al Ejército. Entones, creo que todos esos elementos conforman una crisis definitiva del Estado mexicano, y claro, todo esto se vino a conjugar con lo que es una situación económica terrible para México.

Pero lo importante es insistir en que no es simplemente una crisis económica que se traduce en una cosa política, sino que es una crisis del sistema de dominación que en el tiempo coincide con diversos momentos críticos de la economía, en especial en éste, y esto hace que tenga aspectos sumamente complicados, contradictorios y explosivos la actual crisis.

P.: Uno de los pilares del régimen de dominación política es la figura presidencial, el presidencialismo mexicano. Tras la toma de posesión de Zedillo se ha conocido el enfrentamiento entre él y el ex-presidente Carlos Salinas. Esta forma de fractura del presidencialismo lleva a suponer que es una crisis definitiva; esto es, la figura presidencial que era intocable ahora se ha vuelto objetivo de enconadas críticas no sólo de sectores de la población, lo que es comprensible pues ella es la más afectada, sino, incluso, de la patronal mexicana y de sectores en el interior del PRI. Esta crisis del presidencialismo, ¿cómo piensas puede afectar la eventual capacidad de recomposición del sistema político mexicano?

R. I.: Bueno, en primer lugar, evidentemente que la crisis del presidencialismo no es producto de todas esas payasadas que han hecho sobre todo Salinas, pero también Zedillo. La crisis del presidencialismo es también algo que se venía arrastrando desde hace tiempo. Como has señalado, antes, en México, la figura presidencial era intocada e intocable. Pero esto va a sufrir una modificación fundamental, no tan sólo desde el punto de vista de la oposición, o de los empresarios, sino también como elemento de expresión de los mexicanos, es decir, de los pobres frente a los ricos, contra alguien que por el mismo papel que se le da, pues es responsable de todo. Es decir, en cualquier otro sistema político, a nivel del mundo, si existe o estalla una crisis, no existe el mismo nivel de responsabilización que haga la sociedad al presidente; lo que pasa es que en México el sistema presidencialista históricamente ha definido la evolución del país, y por muchos años trataron de explicar en función de ese presidencialismo el éxito que se tuvo en México a partir de que no había los niveles de inestabilidad que tenían otros pases de América Latina. Ahora, frente a los fracasos, la gente tiende a responsabilizar directamente al que está encargado de la conducción política del país.

La gente le perdió miedo al presidente, y le perdió también el respeto a la figura presidencial. Porque siempre el presidente en México tenía esos dos aspectos: el aspecto de inspirar miedo, pero también el inspirar respeto. Ahora eso está en crisis. Y creo, tiene que ver con todo el proceso de transformación política y económica que ha vivido México. Su primera expresión fue en 1988 y la segunda en 1994. Este presidencialismo extremo ya no podrá existir. Es mi convicción que pase lo que pase en México, sea que se abra un canal de diálogo con la oposición donde los zapatistas puedan dirigirse al conjunto del país, y con esto crear una

conciencia social que permita realizar algunos cambios democráticos, sea que el Gobierno se decida por una vía de exterminación de los zapatistas, sea que haya un golpe militar, etc., no se puede volver a un presidencialismo que ya mostró sus límites en el marco mismo de lo que él buscaba, asegurar la dominación política de los mexicanos.

P.: A partir de 1988 la política seguida por Carlos Salinas de Gortari va a llevar a que la economía mexicana fuese presentada como un paradigma. Y todo ese sueño se acabó con la devaluación del peso mexicano y la crisis que le ha seguido. Se habla de condiciones draconianas impuestas en ese terreno. Entiendo que como diputada tienes información que llegó a la Cámara de Diputados. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?

R. I.: Bueno, no es fácil porque yo no soy economista, pero quisiera decir algo. Este problema de la crisis mexicana quedó claro para muchos países a partir de diciembre de 1994. Sin embargo, en México, exactamente la rebelión zapatista fue de alguna manera una suerte de revelador de la situación nacional. Si uno mira la economía por eso que los que saben llaman índices macroeconómicos, evidentemente parecía que México se iba desarrollando, o que por lo menos había salido de la crisis tan fuerte que vivió en los años 80. Pero el problema es que ese modelo económico que se comenzó a aplicar desde el Gobierno de Miguel de la Madrid [1982-1988] y que profundizó Salinas, lo que generó fue una polarización económica y social extrema, sin precedentes, donde una serie de aventureros se hicieron ricos de la noche a la mañana con una economía especulativa, lo que en México llaman "economía de casino", donde ellos iban a apostar y tenían todo para ganar si eran amigos del presidente, lo que se conoce en México como la "familia feliz", que eran todas esas gentes cercanas al presidente. Todo eso mientras 40 millones viven en una situación miserable.

Ahora, en diciembre de 1994, estalló la crisis de una manera más fuerte. Zedillo tuvo incluso el descaro de responsabilizar en un primer momento al Ejército Zapatista del estallido de la crisis, cuando justamente los zapatistas se rebelaron contra ese proyecto; esto es, no fueron ellos quienes impulsaron esas políticas y fracasaron, sino fue Salinas y después Zedillo, es decir el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y sus aliados. Y el estallido de esa crisis lo que ha mostrado ya no es tan solo la existencia de la miseria en México, que ya el movimiento zapatista había dado a conocer por todo el mundo, y que nos llena de dolor y vergüenza porque México es un país rico, sino que también mostró que el modelo en sí mismo, desde el punto de vista de los mismos datos que ellos tenían, era un fracaso.

Eso nos ha hecho ser profundamente vulnerables en nuestra relación con los Estados Unidos. Y ahora que estamos vinculados completamente a los vaivenes del norte del continente pues, desde luego, nuestra dependencia crece como abrazo de la muerte. Según mi información, jamás se había dado a ningún otro país en el mundo [52.000 millones de dólares], y luego, con las condiciones que pusieron, pues es obvio que están aprovechando la crisis mexicana, pues los elementos de violación de la soberanía nacional ahora han llegado a niveles patéticos.

Hay un acuerdo que fue firmado entre el ministro de Hacienda y el Departamento

del Tesoro en el que en la práctica hay una cesión de la soberanía, al menos partes fundamentales de ella. Por ejemplo, aceptaron que un tribunal neoyorquino entrará en una relación entre los dos países, donde el sistema judicial de los Estados Unidos se le impone ahora a México y el gobierno mexicano lo acepta; además, podrá haber dictámenes de un juez de distrito en Nueva York que serían obligatorios para el Gobierno mexicano. Y eso muestra hasta dónde es una farsa eso de que el Parlamento mexicano avala o no las peticiones de créditos, pues allí está ese juez de distrito norteamericano que puede definir aspectos fundamentales de lo que suceda en México. Además, según los textos que nos dieron en la Cámara de Diputados, han convertido al cónsul de México en un simple agente de notificaciones, incluso literalmente se le da esa nominación; a lo que se agrega el hecho de que las facturas petroleras se quedarán en Estados Unidos y éste podrá disponer directamente de esos dineros si el Gobierno mexicano no paga.

P.: Es interesante ver que a principios de enero, ya con la devaluación de la moneda, con la crisis económica que había estallado en 1994, Zedillo haya sido capaz de hacer aprobar con otras organizaciones políticas, aquéllas que tienen presencia en el Parlamento, lo que se conoce como el Acuerdo Político Nacional. En esto lo que quisiera saber es cómo explicas que, por ejemplo, la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) haya aceptado este tipo de negociación. Incluso, que después, en el mes de febrero, en plena ofensiva del Gobierno contra los zapatistas, todavía siga habiendo fuerzas, no sólo de la derecha como es el Partido Acción Nacional (PAN), sino también del PRD que se preocupen más por la vigencia del Acuerdo Político Nacional.

R. I.: Podemos decir que la dinámica hacia la búsqueda de un acuerdo político nacional empezó casi al otro día de las elecciones de 1994; o sea, todo un sector del PRD sacó como conclusión que la campaña electoral, por su forma, por su mensaje, y por la política que se había seguido durante seis años, que había seguido fundamentalmente Cuahutémoc Cárdenas, había sido un fracaso. Todo esto bajo la idea que había sido una actitud intransigente, que había espantado a sectores importantes de la población de las posiciones del PRD, y que lo que se imponía ahora era buscar un camino diferente, que supuestamente ellos habían visto que pagaba, que era el camino de negociar con el Estado, como lo había hecho el PAN tras el fraude de 1988, y la lectura que ellos hacían es que esa forma de actuación del PAN le había dado como resultado avances electorales importantes en varios estados, incluso ganar algunas gubernaturas, y que el sistema se las reconocía.

Entonces buscaban una reinserción en la política del Estado. Y Zedillo, en los primeros días después de que aparentemente ganó las elecciones, inmediatamente comenzó a enviar mensajeros hacia el PRD, un poco creando la ilusión de que esperaran pacientemente a que saliera Salinas, que había sido su archienemigo, y que la primera acción que haría el nuevo Gobierno sería hacer una demostración de que él caminaría con otro tipo de política. Así estaban y una serie de sectores del PRD se ilusionaron con esta posición. Antes de que tomara posición Zedillo varios diputados del PRD decidieron reunirse con él, ir a desayunar con él, comer con él, etc., en una palabra: contemporizar con Zedillo, lo que por cierto creó

fuertes disgustos en la base del PRD que no entendía cómo era posible que al mismo tiempo que se estaba acusando al Gobierno de hacer fraude en agosto, se hacía una política hacia el que se había beneficiado por ese fraude.

Entonces, lo que ha mostrado un sector importante del PRD y de su fracción parlamentaria es su disposición a esa fusión, y muchas veces parece que conflictos como el de Chiapas, o la existencia del EZLN son vistos al interior de esos sectores del PRD como obstáculos para avanzar en ese proceso de reorganización del Estado mexicano.

Ahora, si alguien me pregunta que si ésta es la posición de Cuahutémoc Cárdenas o de las bases del PRD o de algunos sectores de su dirección, yo no podría responderlo afirmativamente; quizá habría que preguntarle directamente a ellos, pero siento, simplemente es un sentimiento, que la mayor parte del PRD no busca esto.

P.: Vamos a un terreno que conoces perfectamente, el de las luchas sociales, y en particular lo que tiene que ver con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Al respecto, ¿quisieras comentarnos brevemente qué representa el EZLN dentro de la historia de este tipo de organizaciones político-militares, no sólo en América Latina, sino en particular en México? Puede distinguirse que hay muchas innovaciones en este terreno, pero para tí ¿cómo lo defines, y cuáles serían algunos de los rasgos fundamentales de esta organización?

R. I.: Antes que nada, significó la llegada de aire fresco a un ambiente político profundamente enrarecido, donde opositores y funcionarios jugaban un papel como en una especie de comedia. Es indudable que el zapatismo se benefició durante décadas, y más cercanamente, cinco o seis años, de una lucha democrática, tenaz, del pueblo mexicano, y es allí que encontró un receptáculo para poder tener sus posiciones. Pero también creo que desde el punto de vista del significado político de una organización mostró y se presenta con una serie de diferencias que son muy importantes.

Primero, es una fuerza que surge, por el mismo hecho de ser político-militar, al margen del aparato del Estado, y este hecho en México es clave, aunque en otros países podrá ser una especie de perogrullo; pero en México, donde la capacidad de cooptación ha sido permanente, el hecho de que surja una fuerza por fuera del aparato de Estado crea una situación totalmente novedosa. Esto, creo, es un elemento que ha puesto al sistema mexicano en una situación crítica, porque no sabe tratar con una fuerza a la que nunca se ha enfrentado. Quizá el movimiento estudiantil de 1968 fue otra ¿no? Y el EZLN surge incluso de una forma mucho más política, y desde el inicio se plantea con un discurso equidistante tanto del poder político como de los partidos políticos tradicionales. Y la base de esa equidistancia es precisamente una serie de elementos claves que han surgido de los planteamientos políticos zapatistas.

En primer lugar, y puede ser que tenga que ver con una visión muy personal, está la incorporación de una serie de elementos éticos a la política. Todas esas definiciones de los zapatistas de "para todos todo, nada para nosotros", o esas frases que dicen que ellos son "los mexicanos y mexicanas más pequeños", "los hombres y mujeres más pequeños", "los que volverán a la noche de donde salieron

si es que hay democracia", los que no quieren tomar el poder, porque sería una tragedia que un grupo armado tomara el poder en México, los que apelan constantemente a la sociedad civil para que ella tome en sus manos el control de la actividad política nacional, etc. Es decir, una serie de elementos que modifican sustancialmente el discurso político que tradicionalmente había en México, y que le dan un contenido ético a la política. Con eso yo diría que le dan un aspecto fundamental al discurso de la izquierda mexicana que no tenía antes, donde aspectos como el de la dignidad, y el creer realmente lo que se está haciendo y diciendo juegan un papel central. Claro, aquí está también el aspecto mayoritariamente indígena de la rebelión y de esa organización que desde luego juega para tener este nuevo discurso.

Creo que eso es una cosa muy importante, y al mismo tiempo lo que ha permitido es abrir una serie de puentes y canales de diálogo con el resto de la sociedad, que ciertamente se siente identificada con este discurso ante el fracaso de los proyectos políticos en México, y ante el fracaso número uno, porque el fracaso número uno no es el de los partidos de oposición, sino es el de un régimen político que se creó a la sombra de una revolución, que la traicionó, la institucionalió, la violó, la pisoteó, y evidentemente todo eso tiene repercusiones en la credibilidad de la sociedad. Por eso no deja de ser sorprendente, pues el sistema mexicano es el segundo sistema, junto con el que existía antes en la Unión Soviética, más viejo. Pero a diferencia de lo que pasó en la URSS, la caída del régimen no está acompañada de un vuelco a la derecha, sino que lo que está siendo el proceso de crisis del régimen se da, existe, a partir de un cierto giro a la izquierda de la población, de la sociedad civil, que ve con gran entusiasmo e interés a esta nueva fuerza política.

P.: Conocemos y hemos publicado varios de los comunicados del EZLN, pero hay una cosa que llama la atención: por un lado, todo el problema ético que tú has planteado; su discurso, a mi parecer, se centra fundamentalmente en una visión democrática. Llama también la atención que en todos sus mensajes hay un discurso anticapitalista, aunque más allá del rechazo del Tratado de Libre Comercio, que es fundamental pues es una lápida para enterrar a los indígenas, nunca se ha visto un pronunciamiento más claro con respecto al imperialismo. ¿Cómo explicas esto?, ¿Cómo explicas que estén asentados fundamentalmente en una base social de carácter indígena? ¿No tiene que ver esto con un cambio de visión de lo que eran los esquemas en la izquierda de siempre, pensar que era la clase obrera la que se iba a levantar, que era quien iba a encabezar las grandes luchas y, obvio, con las modificaciones que ha habido en el plano social, estructural, en lo económico en los últimos años?

R. I.: Bueno, son muchas cosas juntas. Ellos insistentemente han señalado que representan a ese México del sótano que es el México indígena, que había sido profundamente marginalizado, hecho a un lado, y ahora se le quería casi hacer desaparecer con las medidas de los últimos años. Cuando dicen ¡basta! parten de una idea: que tienen que reconstruir la nación, que tienen que reconstruir el país, la patria, y que para hacerlo, el único camino es la democracia.

Dicen que quieren un México libre, y luego dicen ya veremos. Es decir, un

México donde se puedan expresar los diversos proyectos políticos, y la gente les pida qué es lo que quiere. Así, a diferencia de antes, donde había un cierto vanguardismo de las organizaciones que diseñaban lo fundamental no tan sólo de las luchas para derribar a un régimen, sino también sobre lo que se construiría después, ellos lo que plantean es que en México en tanto la sociedad civil, los diferentes sectores sociales, la clase obrera, los campesinos, e incluso los mismos empresarios no han tenido oportunidad de construir sus propias organizaciones y de reflejar sus propios intereses y ponerlos a consideración del grueso de la sociedad, pues evidentemente se requiere primero que nada eso: liberar a la sociedad de esa tutela asfixiante que la ahoga y que ha sido el dominio del partido de Estado y el Estado mismo. Entonces, creo, eso es lo que ellos ponen por delante. Para mí, el discurso que ellos hacen es un discurso profundamente justiciero, de justicia social, y en ese sentido yo lo vivo como un discurso favorable hacia la izquierda, favorable a posiciones socialistas, aunque, evidentemente, todas estas palabras han sido desgastadas por las terribles actuaciones de gente que dijo hablar en nombre del socialismo, o de la clase obrera.

En un país como México, si uno lucha por tierra, salud, salarios, habitación, vestido, agua, y al mismo tiempo por democracia, paz, justicia y dignidad, evidentemente está luchando contra un sistema de dominación, ¿no?

Creo que han tenido la virtud de expresar lo que son demandas históricas que sin embargo tienen una actualidad muy grande, para tratar de unir al pueblo, a la población en función de esas demandas con el objetivo de crear un sistema político, económico, social diferente. Y todos estos elementos, en una situación como la que vemos por todas partes, sin hacer tantos aspavientos, se manifiesta concretamente contra un dominio imperial, en tanto lo que le interesa al Gobierno americano, a los inversionistas norteamericanos, es la existencia de una mano de obra barata, una estructura sindical profundamente reaccionaria, etc.

Y con respecto a la clase obrera, es necesario decir que ellos insistentemente han señalado, sobre todo en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, pero en otros comunicados también, que los cambios a fondo que requiere el país no se podrán hacer sin el concurso de la clase obrera. Insistentemente han señalado esto; de hecho, ellos, sin hacerlo totalmente explícito, están planteando una suerte de alianza entre el México del sótano y el México de abajo para que de una manera autónoma, independiente -cosa que nunca ha sucedido en México, más que en la época de la revolución con los ejércitos de Zapata y Villa- pudiesen ofrecer al conjunto de la sociedad una alternativa global de nación.

P.: Hablemos de la Convención Nacional Democrática (CND). Primero, ¿qué es?, ¿cómo está integrada la CND?; hay, se sabe, aproximadamente 300 organizaciones de carácter diverso: sindicales, culturales, políticas, etc. pero ¿cómo la defines tú?. Sé que es una iniciativa de los zapatistas. En tu calidad de presidenta de la primera asamblea nacional de la CND, que se tuvo el año pasado, ¿cómo definiríais a la CND?

R. I.: Bueno, ahora ya no soy presidenta, ahora hicimos un Consejo Nacional de Representantes, y lo que yo podría decir es que la CND es un espacio de la sociedad civil, un espacio fundamental en el que la sociedad civil que no tiene instrumentos

políticos, que muchos de los que hacen parte son apartidistas, que no tienen experiencia, encuentran canales de expresión. Para eso fue creada. Es decir, bajo la idea fundamental de que los diferentes sectores sociales que se movilizan y están luchando en México pudieran tener un espacio para poder expresarse también políticamente. Al mismo tiempo, es un espacio donde el ciudadano común y corriente puede o debe tener lugar. Todo eso fue claro en los inicios de la CND, que no tan sólo se representen organizaciones sociales sino también ciudadanos como tales.

La CND es un fenómeno social nuevo, no tiene ni siquiera un año y bueno, ha sufrido procesos de transformación. Personalmente creo que ha vivido momentos difíciles, porque después del primer gran éxito que tuvo con el llamado a la primera asamblea, una serie de gentes, que estoy convencida deberían tener su lugar en la Convención, no encontraron un ambiente favorable para su participación, y si bien no han roto de una manera abierta con la CND sí han tomado ciertas distancias; y, por otro lado, una serie de organizaciones sociales, que normalmente no tan sólo son apartidistas, sino anti-partidistas han tratado de hacer de la CND una especie de estructura política que les dé voz. Y esta contradicción lo que ha generado son momentos difíciles. Pero, en general, más allá de sectarismos muy fuertes que todavía existen en la Convención, y que pretenden convertirla en una expresión de lo que ellos llaman la extrema izquierda, la CND puede convertirse y ser la expresión de los sectores populares y radicales del país con un planteamiento político flexible desde el punto de vista de su táctica, desde el punto de vista de sus alianzas.

P.: ¿Qué representa para tí el hecho de que al momento de la primera asamblea de la CND el subcomandante Marcos te haya entregado la bandera nacional?

R. I.: Bueno, lo primero, es un honor muy grande, un orgullo muy importante, algo que me inundó toda, hasta las lágrimas; pero también un enorme compromiso, el compromiso de ser la depositaria de esa prenda que es el emblema de nuestra patria, y más recibiéndolo de manos de quien lo recibí, de gente que ha honrado ese símbolo, de gente que ha expuesto su vida por llevarnos a un México más justo, un país donde la democracia sea una realidad. Donde haya paz con justicia y dignidad, como ellos dicen.

Fue un momento muy emotivo. Fue uno de los momentos que quedarán grabados en mi mente como los mas bellos de mi vida y, creo que solamente sentiría una emoción similar si volviese a abrazar a mi hijo desaparecido, a Jesús.

P.: Una vez que se han celebrado tres asambleas nacionales de la CND, la más reciente el pasado mes de febrero en el estado de Querétaro, ¿cuáles serían a tu parecer los problemas principales que ella enfrenta para responder a los llamados cada vez más angustiantes del EZLN?

R. I.: Creo que no siempre han sido entendidos los llamados de los zapatistas por fuerzas de la CND y esto ha limitado las posibilidades de avanzar más rápidamente. Ahora, hay que decirlo, esto no es sencillo porque el problema fundamental es que la CND tiene ahora una realidad social, y que conjuntar a toda esa gente que participa no es sencillo, pues porque siempre hay posiciones extremas en esa especie de espectro político que conforma la CND.

Creo que los problemas centrales se ubican en lo fundamental en la necesidad de que la CND se dote de una estrategia que claramente ubique sus objetivos. ¿Cómo explicarte? La CND surge por la democratización del país, por la realización de un congreso constituyente -porque la Constitución en México ha sido enmendada, pegada, violada, vuelta a pegar por el mal gobierno-, y no surge por la realización de un programa socialista, o incluso un programa antimperialista, aunque la CND en tanto tal tiene un programa claramente antimperialista. Pero para lograr sus objetivos la CND debe diseñar una política de alianzas, de ir sumando fuerzas y esa política debe partir de reconocer que no es el programa de la CND el que se le puede imponer a otras fuerzas, a otros partidos. El EZLN llamó en el mes de diciembre de 1994 a la conformación de un gran movimiento amplio, plural, el Movimiento para la Liberación Nacional (MLN); algunos compañeros primero no estuvieron de acuerdo con esto y luego matizaron su posición dentro de la CND y dijeron sí al MLN, pero poniendo como condición una serie de puntos que en la práctica limitaban esas posibilidades de alianza. Entonces, lo fundamental es encontrar un mínimo denominador común que pueda unir a todas las fuerzas oposicionistas al régimen para ubicar una alternativa democrática, lo que no quiere decir que cada una de estas fuerzas por separado levante su programa, lo popularice.

De entrar al MLN, si éste llegara a formarse, la CND actuará en dos terrenos: uno, el terreno de lo que resulte como mínimo común denominador para conformar ese frente, y otro, que no lo pongo en orden de prioridades, es el llevar su programa, el programa propio de la CND al conjunto de la población de México. Si no se entiende esto y si simplemente se pretende imponer nuestras concepciones a las otras fuerzas, nunca constituiremos un frente, nos uniremos con nosotros mismos, es decir, no tendremos capacidad par a crear esas alianzas.

Desde mi punto de vista, y así lo he dicho públicamente en México, el MLN debería ser la suma de cuatro sectores: uno, la CND, otro el cardenismo -y ahí podrá ubicarse también al PRD, aunque no tan solo al PRD porque el cardenismo es algo más que el PRD-, el tercero, evidentemente es el EZLN, porque ellos tienen su lugar, sus propuestas y de hecho son promotores de esta idea, y un cuarto, podríamos decir, son todos aquellos sectores que estuvieron en algún momento en la CND, pero que ahora no están más, pero que juegan un papel en la sociedad, que han sido claves después de esta ofensiva militar del 9 de febrero, que han sido fundamentales para construir las caravanas, la solidaridad, la política de apoyo a las comunidades, etc. y que tienen un espacio que es necesario respetárselo en México.

P.: Tú has tenido la oportunidad de encontrarte varias veces con el subcomandante Marcos, con miembros la dirección del EZLN. Incluso, según nos comentabas, en algún momento el Gobierno comenzó a correr el rumor de que Marcos sería tu hijo. Pero más allá de esto, tú estuviste en la Selva Lacandona días después que el Gobierno de Zedillo lanzara la ofensiva militar de febrero. ¿Qué nos puedes hablar sobre las condiciones en que están viviendo los indígenas allá en Chiapas?.

R. I.: Bueno, primero, es necesario decir que aunque el subcomandante Marcos no es mi hijo, para mí es un orgullo que se le considere así...

P.: Entiendo que incluso te dice mamá, ¿no es así?

R. I.: Así es..., y yo lo llamo mi hijo. En mi caso ésta es una relación de mucho cariño, de mucho amor, porque en Marcos y en la dirección del EZLN yo veo cristalizada lo que fue la lucha de mi hijo desaparecido desde hace 20 años. Desde ese punto de vista pienso que lo que ha pasado en esos 20 años no ha sido en balde, que hay gente que continúa la lucha que mi hijo llevó a cabo, y es por eso que existe esa gran identidad de mi parte hacia el EZLN, y en especial hacia el subcomandante Marcos.

Por otro lado, efectivamente hice un recorrido por una parte de la Selva Lacandona a principios de marzo, y lo que pudimos ver eran cosas desoladoras, es decir, comunidades enteras que se fueron a lo más profundo de la selva, ya sea porque huyeron por miedo, ya sea que se fueron a apoyar a los zapatistas; vimos muchos lugares inhabitados donde el Ejército había destruído las pequeñas pertenencias de esas gentes, pertenencias increiblemente elementales que tenían los indígenas como sus cazuelas, sus ollas, sus pequeños fogones; destruyeron sus camas, sus sarapes, etc. Y una cosa que nos golpeó mucho fue el hecho de que en un lugar llamado Nueva Estrella vimos cómo en el interior de esas chozas abandonadas estaban los machetes y botas de los indígenas. Y eso nos preocupó mucho por el hecho de que los campesinos e indígenas cuando van a entrar a la selva lo último que dejan son sus botas, sus machetes, puesto que es lo que les permite entrar en la selva y abrirse brecha. Y entonces, eso nos ha creado un gran temor de que en realidad ellos no hayan huido sino que hayan sido secuestrados ilegalmente por el Ejército.

Todo eso es muy difícil de constatar, porque no será sino a condición de que la paz volviera a Chiapas y las comunidades pudieran regresar, que podríamos ir a levantar un censo y ver hasta dónde la gente que vivía allí regresa, y los que no regresen pues, evidentemente, habrá que plantear que se encuentran desaparecidos por el Ejército, por el Gobierno mexicano.

El temor de las gentes, más el hecho de encontrar comunidades de 110 habitantes donde hay más de mil soldados, donde las mujeres nos decían que ya no van a bañarse al río porque los soldados están ahí, todo esto refleja una situación de guerra que se asemeja mucho a la situación que han vivido países como Guatemala, Vietnam, o el Salvador, y que nunca pensamos que pasaría en nuestra patria.

De ese mundo que veíamos en la selva cuando estaban los zapatistas, que era un mundo para decirlo francamente casi bucólico, donde se respiraba paz, tranquilidad, donde no había conflictos entre los habitantes, donde la gente discutía en asambleas para resolver sus problemas, hoy lo que vemos es esta visión de confrontación, de odio, de traer campesinos de otras regiones para que habiten las casas de los que se fueron, y a través de ello crear un sistema de aldeas estratégicas, donde los pobres se enfrentan contra los pobres por la posesión de propiedades totalmente miserables, por las pocas cosas que tiene la gente allá. Entonces esa es la situación y, creo, es necesario subrayar que hay un responsable de todo eso, que es el jefe de las fuerzas armadas en México, Ernesto Zedillo, pues de acuerdo con la Constitución a él le corresponde toda la responsabilidad por ese terrible infierno en que ha convertido a la Selva Lacandona.

P.: Antes de que salieras de México se discutió y aprobó en el Parlamento lo que se llama la Ley por el Diálogo, la Amnistía, etc., que fue una propuesta impulsada originalmente por el Gobierno a través de una comisión parlamentaria, que fue aprobada por la absoluta mayoría de los diputados. Entiendo que sólo siete de esos diputados de un total de 500 con que cuenta la Cámara de Diputados votaron en contra, entre otros tú. ¿Cómo explicas este voto tuyo?

R. I.: Hay dos momentos de la Ley. Un primer momento que tenía una declaración de motivos en la que sólo se hacían elogios al Ejército y se llenaba de vituperios a los zapatistas, incluso donde ni siquiera se les mencionaba por su nombre y sólo se hablaba de "los que se inconformaron"; tampoco se hablaba de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), y eso ya había sido firmado por el PRD, por los diputados y senadores que estaban dentro de esa comisión. Hubo un repudio generalizado de ese primer proyecto y se hizo un segundo, en el que se cambió la declaración de motivos de la ley. Era menos triunfalista con respecto al ejército federal, se hablaba ya del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque fuese como siglas, y se hablaba de CONAI, también como siglas y sólo en la declaración de motivos no en el cuerpo de la ley.

Pero había un punto que es clave y que no aparece en ninguno de los dos proyectos y ese fue el punto central que motivó nuestro voto en contra. El hecho de que en ningún momento, ni en la declaración de motivos ni en el cuerpo de la ley, se planteara el retiro del ejército. Y este es un punto para mí fundamental, porque es imposible que haya un diálogo, una negociación con una pistola en la cabeza.

En segundo lugar porque todo el pretexto jurídico que utilizó el doctor Zedillo para lanzar el ejército federal a la Selva Lacandona hoy no existe más; es decir, el pretexto, porque constitucionalmente el ejército debe estar en sus cuarteles, es que el Ejército iba a ser coadyuvante de la Procuraduría General de la República para llevar a cabo las órdenes de aprensión contra los zapatistas. Pero una vez que la ley dice que las órdenes de aprensión se suspenden por 30 días y que ese plazo puede prorrogarse por la gente que esté negociando, la pregunta es ¿cuál es la base jurídica que permite que el Ejército federal siga en la región de la selva?. El gobierno anunció que habrá un retiro de cuatro kilómetros, pero esto para nada garantiza el asunto. Entonces, el hecho de que no se planteara para nada en la Ley la presencia inconstitucional del ejército motivó mi voto en contra así como el de otros seis diputados.

Ahora, este punto era y es algo fundamental, y es como yo entiendo el trabajo parlamentario. Para mí el trabajo parlamentario no es qué se le puede arrancar al gobierno, qué punto chiquito, qué modificaciones chiquitas se le pueden arrancar al gobierno para festejarlo como un triunfo; para mí el trabajo parlamentario tiene que ver con realmente representar al pueblo, es decir, un diputado tiene dos alternativas: o mira hacia el poder, o mira hacia la gente, o vota en función del poder o vota en función de la gente, y la gente en las calles ha pedido, exigido el retiro del ejército; ningún diputado de esos que votaron la Ley podría pararse en un mitin para decir no compañero, no exijamos el retiro del ejército, porque inmediatamente hubiera sido silbado, porque las cuatro veces que se ha llenado el centro de la ciudad de México en estas últimas semanas toda la gente gritaba

¡fuera el ejército!, y yo creo que es sobre eso que debe actuar un diputado para que realmente sea considerado como representante popular, es decir actuar en función de los intereses de la población.

Además, creo que esto es fundamental para poder garantizar que haya un diálogo donde no hay alguien que llega de rodillas. Y en tercer lugar estoy en contra de aquellos que dicen no, eso le toca exigirlo al EZLN, y yo digo si eso le toca exigirlo al EZLN, es decir a los que están en la situación más difícil, es tanto como pedirles que exijan algo que para nosotros no tiene la misma dificultad. A lo mejor el EZLN va a tener que aceptar el marco de la ley y en ese contexto plantear el retiro del Ejército, pero lo hubiera hecho en condiciones mucho mejores si un buen número de diputados, por lo menos todos los del PRD hubieran votado en contra, o hubieran hecho una propuesta concreta sobre el retiro del ejército que permitiera dejar en claro que hay toda una parte de la Cámara de Diputados que los apoya. El problema a mi entender es que este voto refleja el desarrollo de una visión que confunde el trabajo parlamentario con un trabajo simplemente de acotar un poco el poder presidencial, y de ser simplemente una especie de presión, convirtiendo a la Cámara en una suerte de lobby para presionar en favor de algunas modificaciones insustanciales de lo que son los proyectos presidenciales. Bien, por todo eso voté en contra.

P.: Rosario, después de tu gira por Europa, donde has estado en Bélgica, Suiza, Francia, dada la situación que existe hoy en Chiapas, ¿cuál sería tu mensaje al movimiento de solidaridad de los europeos con esa lucha?

R. I.: Lo que he venido haciendo en este mínimo recorrido.Un llamado a entender la dolorosa realidad del pueblo de México, a comprender que no es una lucha solamente de los zapatistas; que el Ejército Zapatista lo ha dicho muchas veces, que no son sólo un ejército zapatista de liberación del pueblo chiapaneco, sino un Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tiene raíces profundas en el sentimiento del pueblo, porque han sido ellos quienes han recogido los anhelos, las ansias y las demandas de justicia que por muchos años, incluso me atrevo a decir que casi por siglos, hemos tenido todos los mexicanos, y que hoy ellos se han atrevido a presentarlo. Como dice Marcos en uno de sus hermosos comunicados más reciente: la dignidad se ha mantenido en el alma de los más insignificantes, de los más pequeños, de los más pobres; no tienen otra riqueza más que la riqueza millonaria de su dignidad.

Además creo que la solidaridad internacional ha sido la clave para lograr detener la política asesina que estaba llevando a cabo el gobierno mexicano. Junto a las grandes movilizaciones en la ciudad de México y en todo el país, lo que se hizo en España, Francia, Alemania, etc. ha sido fundamental para plantearle al gobierno mexicano que habría un costo político, social, diplomático muy grande si seguía adelante con su política. Y, es necesario repetirlo, esa solidaridad tan humana, tan bella, debe continuar, debe crecer y llenar todos los rincones de la tierra. Esta es una lucha que va para largo.

Conflicto pesquero

Estados al borde de un ataque de fletán

G. Buster

La "guerra del fletán" ha sido el conflicto diplomático bilateral mas importante, si se exceptuan quizás los relacionados con la antigua colonia de Guinea Ecuatorial, al que se ha visto enfrentado el Estado español desde 1977. Por eso merece la pena analizar sus causas y desarrollo, que generarán actitudes nuevas no sólo en el PSOE, sino especialmente en el PP, sobre la eficacia de la política exterior española consensuada hasta ahora. El conflicto, generado por el control en aguas internacionales de materias primas, en este caso pesca, ha enfrentado a dos aliados de la Alianza Atlántica. Pero su gestión a estado en manos de la Comisión de la Unión Europea, que ha hecho una defensa bastante dura de los principios de derecho internacional, al mismo tiempo que presionaba al Gobierno español para aceptar una reducción significativa de las cuotas de captura que ella misma se había atribuido tras romperse el consenso en el organismo internacional de gestión de estas pesquerías, la NAFO.

La estrategia canadiense se había preparado con una antelación de casi un año. Respondía a un grave problema de paro en Terranova, resultado de una pesca incontrolada y esquilmadora en aguas territoriales y la zona económica exclusiva de 200 millas por una flota pesquera envejecida y sin capacidad tecnológica, que a diferencia de la flota pesquera española ha carecido de subvenciones estatales para ese fín. El problema social se estaba convirtiendo por días en un problema político que podía tener repercusiones directas en las discusiones constitucionales sobre el futuro de Canada, añadiendo al nacionalismo de Quebec uno nuevo en Terranova, antiguo territorio británico que se incorporó muy tarde a Canadá. El ministro de Pesca canadiense, Tobin, oriundo de la región, utilizó además la situación para conseguir un prestigio político que le permita aspirar a un futuro liderazgo del Partido Liberal.

El primer paso de esta estrategia consistió en lograr la aprobación por la NAFO, en septiembre de 1994, de una cuota total de capturas para el fletán negro de 27.000 toneladas. El fletán había sido descubierto como especie comercial por la flota pesquera española hacia tan solo cuatro años, gracias al desarrollo de unas complejas técnicas que le permiten pescar por debajo de los 900 metros de profundidad. Sin cuotas totales de captura, la flota española pudo obtener anulamente entre 40.000 y 60.000 toneladas, lo que podría poner en peligro los bancos, aunque no existe certeza científica sobre este punto. Posteriormente, en febrero de este año, la NAFO repartió la cuota total de 27.000 toneladas: un 60% para Canadá, un 12,5% para la UE, un 12% para Rusia, un 10% para Japón y el 5% restante para otros países, por el procedimiento de voto mayoritario. La UE, con un solo voto, denunció el acuerdo, según establece el reglamento de la NAFO y se fijó mientras tanto unilateralmente una cuota de capturas de 18.000 toneladas, el 69% de la cuota total.

Lo que se estaba discutiendo no era un problema ecológico, que todo el mundo parecía aceptar al reducir la cuota total de capturas, sino la importancia a la hora

de hacer su reparto de los derechos adquiridos por capturas anteriores e inversión en investigación científica sobre la zona, en aguas internacionales, o de la reivindicación de los Estados colindantes de tener prioridad mas allá de la zona económica de las 200 millas. Se trata de un conflicto capitalista en estado puro sobre el control de materias primas y recursos naturales, que enfrenta el derecho consuetudinario con la reivindicación de un derecho emergente no admitido universalmente. Un tipo de conflicto que sólo puede ser resuelto por la fuerza o mediante la regulación consciente con criterios ecológicos no capitalistas.

Patente de corso

La decisión unilateral de la UE de defender sus derechos consuetudinarios fue contestada por Canadá con la aprobación de una ley por su Parlamento, y posterior reglamento, por la que se obligaba al Gobierno de Ottawa a actuar también unilateralmente en contra de barcos de otras naciones en aguas internacionales. Se trataba de una patente de corso, camuflada en un lenguaje proteccionista. Los hechos posteriores son conocidos: captura del *Estai,* aplicación de la nueva ley canadiense, envío de patrulleras guardacostas a la zona para acosar a las flotas española y portuguesa, que constituyen el 95% de la flota de la UE, corte de redes, campaña internacional de propaganda de Tobin, envío de patrulleras españolas como observadoras y, finalmente, la negociación entre Canada y la UE.

El reparto final de cuotas que ha salido de esta negociación, 40% para Canada, 40% para la UE y el resto para los otros países de la NAFO, representa un intento de evitar una escalada del conflicto y alcanzar un equilibrio de fuerzas que no erosione la supuesta solidaridad transatlántica. En terminos prácticos, la flota española perdía en nombre de la misma el 25%, aproximadamente, de la cuota unilateral que se había fijado la UE en febrero. Y como en toda solución de equilibrio, Canadá conservó su legislación, cara a posibles nuevos conflictos, mientras el Gobierno español justificaba lo que para la opinión pública era una muestra de debilidad y dejación de intereses. Lo importante, sin embargo, era la aceptación colectiva de un sistema prolongado de ajustes anuales que refleja la autoregulación, de acuerdo con la jerarquía política real dentro de la OTAN, de la "solidaridad atlántica".

Este conflicto típicamente capitalista cuyos antecedentes se remontan a las guerras norteamericanas del siglo XVII entre Francia y Gran Bretaña por el control del comercio de pieles, pasó de puntillas sobre el tema de los derechos sociales de los pescadores de ambos Estados, mientras que la lógica de su desarrollo estuvo marcada en última instancia por la capacidad de conceder subvenciones a los empresarios de las respectivas flotas. La mayor capacidad en este sentido de la UE marcó su posición de defensa del derecho internacional, la negativa del Gobierno liberal canadiense de actuar en el mismo sentido le obligó a centrarse en las cuotas. Pero su victoria parcial esconde una incapacidad creciente para aumentar la productividad de su flota a través del desarrollo tecnológico.

El Estado español demostró carecer del aparato diplomático y de una visión de la situación y las relaciones internacionales necesarias para este tipo de conflictos. La rápida comprensión de este hecho por el Gobierno del PSOE, y de que solo podía perder imagen, hicieron que Madrid depositase toda su responsabilidad en la UE,

que demostró la prioridad de la "solidaridad atlántica" a la cohesión interna en un tema que no afectaba a los otros Estados miembros. Francia, un año antes, había resuelto un conflicto pesquero con Canadá, relacionado con los derechos de sus posesiones de St. Pierre y Miquelon, de una manera mas equilibrada gracias a su capacidad de presión diplomática bilateral. El desequilibrio entre haber desarrollado la segunda flota pesquera mas importante del mundo y el peso político limitado a nivel internacional del Estado español son un ejemplo patente del desarrollo desigual y combinado del capitalismo en nuestra época y de la importancia que aún tiene el Estado en este supuesto nuevo orden mundial neoliberal.

El mar libre de Hugo Grotius dejará de existir

Nel van Dijk

El conflicto pesquero entre la Unión Europea y Canadá no surge de repente. Cuando en 1986 España y Portugal ingresaron en la Comunidad Europea, se estipuló que sus flotas pesqueras obtendrían hasta el año 2002 tan sólo un acceso limitado a las zonas de pesca europeas. La Comunidad les envió a otras partes del mundo. Los Estados miembros de la UE pagan todavía 300 millones de florines al año para poder utilizar zonas de pesca cerca de Africa.

La política de pesca de la Unión Europea ya ha causado muchos conflictos, tanto dentro (España contra Irlanda), como fuera de la Unión (España contra Noruega). Hasta ahora estos conflictos fueron arreglados amistosamente, pasando por alto acuerdos internacionales sobre cuotas y comenzando a pescar en sitios más lejanos. Mientras tanto, existe ya una pesca excesiva en el 70% de las zonas de pesca internacionales. Mundialmente, disminuyen las capturas. Es de esperar que el embargo del *Estai* por parte de las autoridades canadienses conduzca a una reconsideración.

Hubo una época en que los pescadores españoles y portugueses pescaban con embarcaciones y redes pequeñas en sus propias aguas costeras. Pero las flotas de ambos países han sido modernizadas a un ritmo acelerado con la ayuda de subvenciones europeas. De esta forma la Unión Europea es en alta medida responsable de la pesca excesiva en los océanos.

Canadá sufre mucho por ello. El país ha reducido su propia flota como consencuencia de acuerdos internacionales sobre cuotas, lo que condujo a un paro elevado. A continuación, Canadá tuvo que contemplar como barcos de la UE no hacen caso de las cuotas, reclamando las dos terceras partes de la pesca del fletán en el noroeste del Océano Atlántico.

Es comprensible que Canadá ya no lo acepte. Para justificar la manera brutal con que pararon a los españoles, incluso en el *mare liberum*, los canadienses alegan la UNCLOS, la convención de derecho marítimo de las Naciones Unidas. Desde el punto de vista jurídico su posición probablemente no es muy fuerte, ya que la UNCLOS busca precisamente la cooperación internacional para mantener las especies.

La comisaria europea Ema Bonino que reaccionó con dureza a la "piratería" canadiense, parece tener el derecho internacional de su lado. Pero desde el punto de vista moral y ecológico, es más difícil defender la posición de la Unión Europea, puesto que no es justificable que la UE reclame una parte desproporcionadamente grande de la pesca. Esto sucede a expensas de otros países, a expensas de muchas especies de peces y a expensas de futuras generaciones que ya no podrán pescar.

Bonino haría mejor en trabajar para diseñar una política de pesca más duradera, lo que requerirá medidas tanto a nivel europeo como mundial. La Unión Europea debe asumir su responsabilidad y reducir la capacidad de su flota pesquera a un volumen que ya no ponga en peligro de desaparición de numerosas especies de peces. Será una intervención dolorosa, pero a largo plazo más ventajosa que persistir en la propia razón jurídica.

Mantener la actual política de pesca excesiva no conducirá tan solo a más conflictos internacionales no deseados, sino también a una reconversión de la flota pesquera cuando ya no queden peces.

Esta guerra pesquera acentúa también otro problema universal. Bien se trate de la pesca de ballenas, de la pesca excesiva o de la contaminación nuclear del mar, en todos los casos se hace en la mas total impunidad, porque las aguas internacionales son consideradas como un refugio: el *mare liberum*. Este concepto que data de hace siglos, propagado algún día por Hugo Grotius, simplemente ya no sirve.

A pesar de numerosos tratados internacionales sobre la pesca de ballenas, sobre la pesca, sobre la protección del mar, continúa a un ritmo acelerado el saqueo irrecuperable de los océanos. Ha llegado pues el momento de poner fin al *mare liberum*. Para ello no queda otra vía que poner el empleo de las aguas internacionales bajo control colectivo. Todas las demás vías, como la ampliación de las aguas territoriales, conducirán tan solo a más conflictos internacionales. Además no ofrecerán una garantía contra la pesca excesiva y la contaminación.

La difícil creación de la Organización Mundial para el Comercio (OMC), ha puesto de manifiesto que la comunidad internacional es capaz de llegar a acuerdos, aunque imperfectos, sobre un tema tan amplio como el comercio universal. Debe ser también posible reunir en un tratado todos los aspectos de una gerencia duradera de los océanos, que oblige mediante sanciones a los Estados miembros a la protección y a un empleo justificado de las riquezas del mar.

La captura del *Estai* ha provocado, en todo caso, que el problema de la pesca excesiva y de la necesidad de la protección del mar y de sus recursos figuren en un lugar prominente en la agenda internacional. Si Canadá, con su "defensa ecológica", ha violado o no el derecho internacional es un asunto que, en comparación, tiene mucha menor importancia.

DE VOLKSKRANT/18 de marzo de 1995/ Amberes

3 miradas voces

Una pequeña isla en el caribe, rodeada de tiburones

¿Bailas?

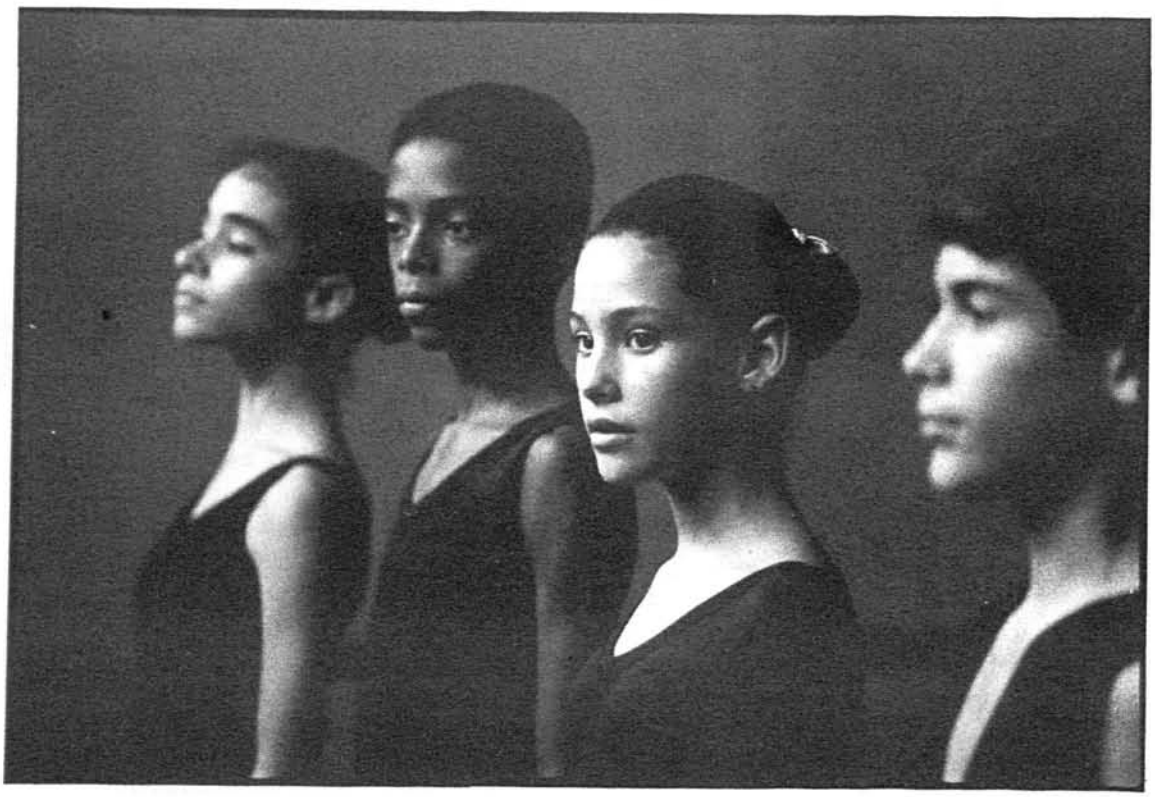
¡Ahí te va!

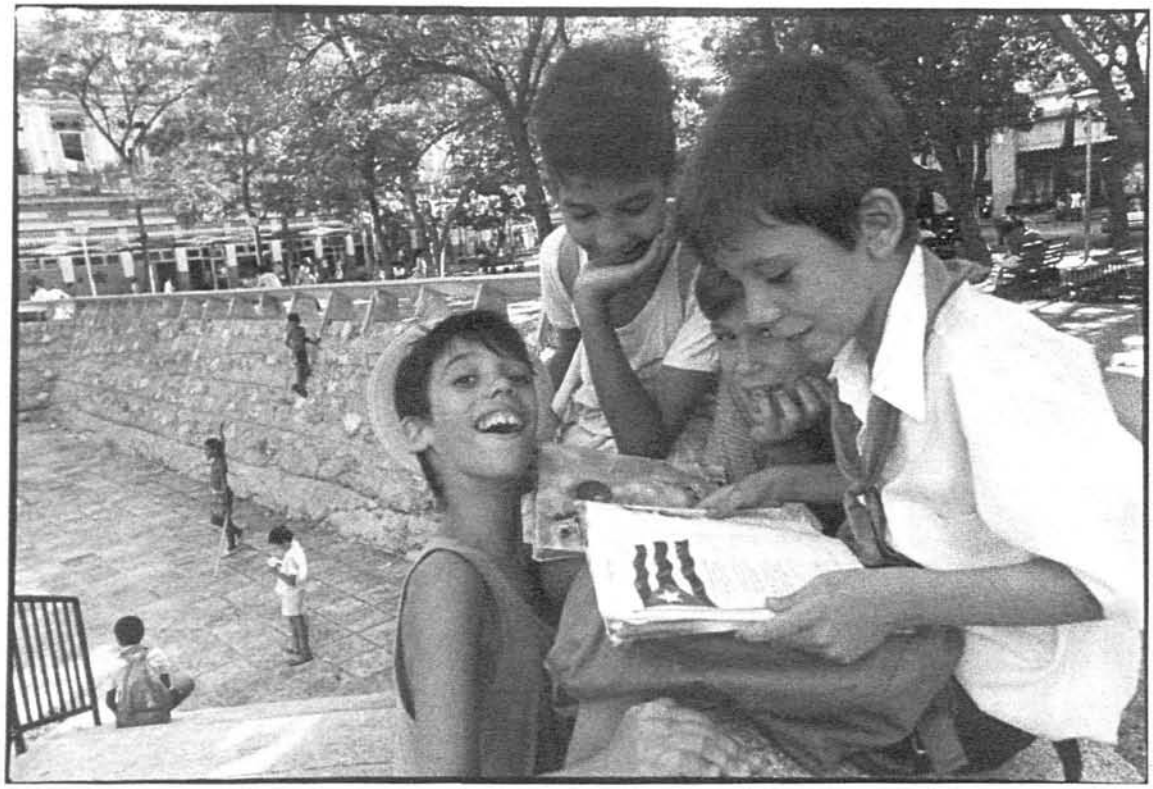
Yo te miro

Hermanos

Nosotros nos quedamos

Fotos de Guillermo Aguareles





4 plural

1 Los negocios de la política

Corrupción y transformaciones económicas

Albert Recio

Como cualquier otro hecho social la corrupción constituye un fenómeno que tiene muchos aspectos y que por tanto puede analizarse desde ángulos diversos. La mayor parte de valoraciones se han centrado en los aspectos éticos, políticos y jurídicos de estos comportamientos y las consecuencias que generan. Todas estas aproximaciones permiten plantear preguntas adecuadas para mejorar nuestra comprensión de la cuestión y tratar de hallar respuestas a la misma. En esta nota trato de plantear otro punto de vista, el que relaciona la corrupción actual con los cambios que han tenido lugar en el funcionamiento de las economías capitalistas, en general, y la española en particular.

De enfermendad endémica a epidemia virulenta

La corrupción ha sido vista, desde siempre, como uno de los peligros potenciales que existen en toda sociedad en la que el comportamiento individual esté dominado por pulsiones egoístas. Por esto todas las sociedades han tendido a establecer mecanismos (de tipo ideológico-cultural, jurídico y político, en dosis variables según cada situación concreta) orientados a evitarla o, como mínimo, mantenerla en cotas tolerables.

Durante largo tiempo se ha considerado que el sistema institucional de las sociedades permitía mantener la corrupción bajo control. Se suponía, además, que las posibilidades de ganancia legal eran suficientemente atractivas y disuadían el

recurso a vías irregulares. Las situaciones mafiosas se consideraban circunscritas a contextos muy particulares. La corrupción se ha considerado por el contrario endémica en la mayoría de sociedades en desarrollo, en las que se combina una mayor presión por el enriquecimiento rápido, un menor peso del "mercado regular" y una mayor intromisión del poder político, en la mayoría de los casos escasamente democrático.

El hecho nuevo es que estas prácticas han alcanzado un peso notable en gran parte de los países capitalistas más desarrollados, como lo atestiguan casos tan variados como el ya olvidado *affaire* Lock heed (que llegó a implicar a alguna casa reinante europea), la crisis de las cajas de ahorro estadounidenses (en las que se vio implicada la misma familia del presidente Bush), el caso Flick en Alemania, los sucesivos escándalos financieros de Japón y Francia (socialista y conservadora), el cáncer que ha acabado con la primera república italiana y los muy numerosos acontecimientos que motean nuestra historia reciente. Una sucesión demasiado vistosa de escándalos como para ser considerada como una mera causalidad y que obliga a preguntarse qué ha ocurrido en el conjunto del sistema económico para que haya estallado esta epidemia.

La contrarrevolución neoliberal

La proliferación de este tipo de comportamientos puede asociarse en parte a las nuevas orientaciones de política económica a escala mundial. Un cambio que no se limita a la mera adopción de medidas concretas sino que se prolonga en muy diversos campos, entre los que destacamos los que tienen relación con la fijación de pautas de comportamiento aceptables, de modelos de conducta, etc. Se trata de un movimiento económico de largo alcance, globalmente conocido como neoliberalismo, que ha ganado especial audiencia tanto en el campo de la academia económica, en la política económica (entronizada por el binomio Reagan-Thatcher, aunque el primer experimento tuvo lugar en el Chile de Pinochet, y sacralizada por organismos como el cincuentenario FMI), y la cultura económica divulgada por los principales medios de comunicación.

El punto central de esta filosofía es la prevalencia del comportamiento individual por encima de la mediación colectiva, lo que se traduce en considerar al mercado como mecanismo básico de regulación social. En la medida en que en las sociedades modernas la distribución de los recursos económicos es muy desigual la consigna de "más mercado" debe traducirse a "más capitalismo", por cuanto que son los grades poseedores de propiedades y riquezas los que detentan más "votos" en el mercado y por tanto quienes influyen, con sus decisiones mercantiles, sobre las orientaciones básicas que adopta la actividad económica.

Esta defensa radical del mercado no sólo se traduce en una política económica de privatización de actividades económicas y de desregulación de campos diversos (en especial, pero no exclusivamente, el mercado laboral) sino que también tiene un importante efecto cultural. Recetar "más mercado y más capitalismo" suppone proponer a la sociedad la primacía de los intereses individuales por encima de los colectivos, la búsqueda de la ganancia privada a corto plazo, y la prevalencia de unas relaciones humanas basadas en la competencia y la rivalidad por encima de la

cooperación y la solidaridad /1. No es extraño que en este contexto cualquier conducta orientada al objetivo del beneficio a corto plazo se considere legitima por irregulares que sean los métodos utilizados y más especialemte cuando, como ha ocurrido en nuestro país, han sido los líderes políticos quienes han santificado insistentemente la bondad de la ganancia individual /2.

No se trata de un proceso nuevo. Numerosos pensadores, por ejemplo, Karl Polanyi /3 o Claus Offe /4, han subrayado adecuadamente las distorsiones sociales que en diversas épocas ha generado la expansión del capitalismo y del mercado, así como los movimientos de control del mercado aparecidos como respuesta a la misma. La figura del especulador rapaz que prolifera en las épocas de euforia capitalista ha sido asimismo objeto del retrato crítico de numerosos literatos, desde Zola hasta Tom Wolfe, sin despreciar las descripciones de nuestros literatos locales como el Narcís Oller de la "Febre de l´Or", el Eduardo de Mendoza de "La ciudad de los prodigios" o "La verdad sobre el caso Savolta" o la de alguno de los personajes que pululan en diversas entregas de la serie "Carvalho" de Vazquez Montalbán.

La corrupción, en sus diversas variantes, de especulación, fraude fiscal, compra de derechos políticos, etc., es sin lugar a dudas un resultado *colateral* de la expansión agresiva del capitalismo. El autoritarismo, especialmente en el plano de las relaciones laborales pero también en otros terrenos, es la otra.

Uno de los rasgos del autoritarismo empresarial lo constituye el secretismo de muchas de sus actuaciones. La protección de la privacidad de la gestión empresarial, unida a las facilidades existentes para la creación de empresas ficticias, estructuras empresariales opacas, etc., han ayudado al desarrollo de estas prácticas como lo atestiguan, por ejemplo, los casos Torras-KIO, Banesto o Rubio-Ibercorp. La nueva *legalidad* que se ha ido desarrollando en apoyo de esta liberalización ha constituido, sin lugar a dudas, un poderoso impulso al desarrollo de este tipo de comportamientos.

La privatización de lo público

Las actividades estatales, en su doble vertiente de primer cliente nacional y de regulador de deterrminadas actividades mercantiles, han constituido desde siempre campos abonados a la corrupción. En gran medida porque las compras de grandes suministros de bienes y servicios y las normas que configuran el desarrollo de determinadas actividades dependen, en definitiva, de decisiones políticas sujetas, potencialmente, a todo tipo de cambalaches. Las nuevas orientaciones políticas que promueven la prestación de muchos servicios públicos por empresas privadas, reduciendo al Estado al papel de cliente que compra el servicio y determina las

1/ Un magnífico análisis de lo que ello significa en el plano de la gestión del medio natural se encuentra en B. Commoner *En paz con el planeta*, Ed. Crítica, Barcelona, 1992.

2/ Una buena muestra de lo tenue que resulta la defensa del mercado y la aceptación de la corrupción puede encontrarse en el artículo de uno de los economistas teóricos liberales de nuestro país: R. Marimón, "Italia, la dificultad de cambiar la norma", *El País*, 13 de abril de 1993, pág. 8.

3/ K. Polanyi (1941): *La gran transformación*, V.E. La Piqueta, Madrid, 1989.

4/ C. Offee (1988): *Contradicciones en el estado del bienestar*, V.E. Alianza, Madrid, 1990.

condiciones de prestaciones, ha ampliado de forma notoria el terreno en que florecen estas prácticas.

La visión mitologica del mercado como un mecanismo impersonal que pone en relación a una miríada de compradores y vendedores, si ya resulta falsa como representación global de las econnomías reales es, en el caso de los mercados públicas, un engaño completo. En todas partes, los mercados de suministros públicos –armamento, obras públicas, servicios públicos privatizados...– se caracterizan por la existencia de un reducido número de empresas que compiten entre sí frente a un sector público que debe adoptar una decisión política. La complejidad y multidimensionalidad de la mayoría de temas a concurso (obras sigulares, servicios que admiten grados diversos de prestación, etc.) hace difícil, casi siempre, una solución estrictamente técnica de costes y calidad **/5.** Parece normal que en mercados de este tipo, la rivalidad entre empresas pase por la búsqueda de influencias sobre aquellos que van a tomar la decisión.

Las obras públicas constituyen un caso habitual; la industria de armamentos constituye otro buen ejemplo. Los análisis que se han realizado de la industria de la construcción muestran que en los últimos años estas empresas se han reorganizado en el sentido de desentenderse del proceso de producción directa, que realizan en gran medida a través de empresas subcontratadas, y que se centran en dos actividades: la coordinación técnica y la obtención de contratos públicos **/6**. Una tarea en la que han alcanzado una notable especialización como lo muestra el hecho de que un reducido número de una veinte empresas controle el 85% de toda la obra pública, grado de concentración que tiende a aumentar cuando el análisis se desarrolla a nivel de comunidad autónoma o municipio (en este sentido el papel preponderante de HASA–Huarte en el caso de Navarra, puesto en evidencia por el escándalo Roldan, resulta aleccionador).

Estas tendencias se han visto reforzadas con la oleada de privatizaciones de servicios públicos. Son en muchos casos negocios sumamente apetitosos: se trata en su mayor parte de mercados seguros y bastante protegidos de la competencia, que aseguran un iflujo continuado de ingresos (garantizados en muchos casos por el propio contrato público o simplemente por tratarse de servicios con demanda en expansión), donde abundan precios administrados que garantizan el margen comercial... En la mayor parte de casos, las mismas compañías que han aprendido a negociar con las administraciones la concesión de un determinado tipo de contratos entran en los nuevos campos abiertos por las privatizaciones poniendo en marcha lo que constituye su mejor "patrimonio tecnológico": su capacidad de entendimiento y negociación con los dirigentes políticos. Este es el caso, por ejemplo, de las grandes empresas francesas de la contrucción y los servicios (Générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux–Dumez —uno de los principales accionistas de la española Aguas de Barcelona—, Bouygues, etc.)

5/ Tampoco puede descartarse que en algunos mercados, como los de obras públicas, donde el número de competidores es bastante reducido, puedan darse acuerdos informales entre las empresas para repartirse los contratos eludiendo la competencia entre ellas. El hecho de que cada una de las obras sea una operación singular hace más difícil que en otros campos detectar la existencia de estas posibles conclusiones.

6/ F. Miguélez et al: *Transformaciones laborales en la industria de la Construcción en Catalunya*, CERES, Barcelona, 1990.

En el caso español esta tendencia es quizá más pronunciada, especialmente en lo relativo al capital local. Mientras en el campo industrial el proceso de internacionalización ha supuesto el paso de la mayor parte del aparato productivo a manos de los grandes grupos multinacionales (que también practican este tipo de presiones cuando se trata de la obtención de contratos públicos, como lo muestra la implicación de grupos tales como los productores de equipamiento eléctrico y material ferroviario GEC Alsthom o ABB en el *affaire* Filesa), en el campo de la construcción las empresas locales han resistido el empuje con más fuerza y se mantienen como uno de los grandes sectores controlados por capital español. Estos grupos están diversificando su actividad hacia otras áreas, caracterizadas por la importacia de los contratos públicos, mediante la creación de empresas filiales en ámbitos como limpieza pública, saneamiento y medio ambiente, aparcamientos, telecomunicaciones, etc. Quien ejemplifica mejor que nadie esta evolución es Fomento de Construciones y Contratas (FCC), el segundo grupo empresarial de capital español, controlado por la familia Koplowitz. Se trata de un grupo empresarial con una larga tradición de relaciones con la Administración, puesto que las dos empresas que dieron lugar a la FCC, Fomento de Obras y Construciones y Contratas, han participado desde su fundación en el negocio de saneamiento público (limpieza viaria, recogida de basuras). La relación de actividades del gupo FCC indica mejor que nada esta capacidad de entrar en todo lo que tenga relación con el poder político: contrucción y obras públicas (realizó un 40% de la obra olímpica de Barcelona), limpieza viaria y recogida de basuras, aparcamientos, suministro y tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, sistemas de señalización, mobiliario urbano (donde participa en una empresa mixta con una entidad dependiente del Ayuntamiento de Barcelona), instalaciones deportivas, seguridad, inspección técnica de vehículos, transportes públicos, autopistas y desde principios de 1994, *handling* (movimiento de maletas y carga en los aeropuertos españoles) tras ganar el primer concurso de privatización realizado en nuestro país.

Prodríamos encontrar otros muchos ejemplos de interrelación entre lo público y lo privado. Por ejemplo el desarrollo del urbanismo concertado, al que yo llamaría "especulación concertada": procesos de remodelación urbana en los que el capital privado participa con el sector público en la definición de grandes proyectos de remodelación urbana en los que prima la rentabilidad. En Barcelona este tipo de desarrollo es habitual, y ha estado en el centro de la remodelación propiciada por las Olimpiadas **/7**.. Una situación también presente en las recalificaciones de suelo industrial realizadas en la mayor parte de ciudades españolas.

Es evidente que estas operaciones no tienen por qué ser corruptas. Pero el papel crucial que juegan en las mismas las decisiones políticas las convierten en terrenos abonados para que ésta florezca. La ausencia de pudor de las empresas a la hora de captar apoyos políticos es patente, como lo muestran el "fichaje" por parte de Bayer del ex-responsable de urbanismo barcelonés Jordi Parpal, para potenciar proyectos de construcción en sus antiguas factorías, o de la empresa alemana

7/ Vázquez Montalbán/Moreno, el Carrer.

RWE, competidora en un proyecto de incineradora de residuos en el área barcelonesa que cuenta entre sus asesores con un hijo de Jordi Pujol y al señor Martí Jusmet, ex delegado del Gobierno en Catalunya.

El peso creciente de la especulación financiera constituye otro espacio básico en el que se desarrollan estas actitudes. Una situación que se ha trivializado al atribuirlo a una mera moda cultural (el "yuppismo" en los EE.UU., o la "cultura del pelotazo" en nuestro país) pero que obedece a cambios más profundos en el sistema ecónomico.

La actual especulación financiera está asociada a la desregulación de los movimientos internacionales de capitales por una parte y a la creación de activos monetarios ficticios (sin necesaria contrapartida real), favorecida por la desregulación monetaria y la capacidad de innovación de las instituciones financieras por otra. Cambios que además se han visto facilitados por el avance tecnológico en el campo de las telecomunicaciones y la informática que ha dotado de base material al desarrollo de estas prácticas.

La proliferación de oportunidades de inversión financiera, genera gravísimos costes sociales (inestabilidad monetaria, volatilidad de las inversiones, freno a la inversión real, etc.) y abre nuevos campos a la corrupción. No sólo porque se pierde el norte en cuanto a la relación existente entre producción real y enriquecimiento, sino también porque las grandes ganancias dependen a menudo de la información confidencial, de las decisiones de política monetaria o simplemente de la mera connivencia pasiva de la autoridad monetaria frente a las prácticas aventureras en materia financiera, etc. Incluso el temor a tener que enfrentarse a movimientos erráticos de capitales puede favorecer la tolerancia de las autoridades económicas a este tipo de manipulación.

Una larga tradición

No se puede escapar, además, que en cualquier proceso social pesan elementos de continuidad con el pasado. La actual corrupción española tiene mucho en común, aunque con mecanismos nuevos, con un largo pasado de connivencia entre determinados grupos privados y el sector público. El nacimiento y desarrollo de gran número de empresas en el período franquista dependió directamente de decisiones políticas en forma de licencias, concesiones y monopolios de todo tipo.

Si bien se ha producido una cierta ruptura con estas prácticas, las continuidades son numerosas (podríamos citar los ejemplos del mismo Mario Conde, cuya fortuna proviene de una empresa –Antibióticos– nacida por concesión del Gobierno y favorecida con numerosas ayudas hasta hace poco, o Claudio Boada, importante figura empresarial en el "antiguo régimen" y mentor de dirigentes económicos de la órbita del PSOE). Las empresas españolas han tenido una larga tradición, a la vez, de fraude fiscal y de utilización de la conexión política (relación ironizada en el film de Berlanga *La escopeta nacional*) la cual no ha

4/ Jean-Marie Vincent, "Max Weber et la constellation du matérialisme historique", en *Actuel Marx* n.11; y "Les automatismes sociaux et le general intellect", in *Futur antérieur* n.16.

desaparecido y, posiblemente ha encontrado nuevas vías de actuación en el ambiente actual de gestión liberal.

La lucha contra la corrupción requiere un enfoque global

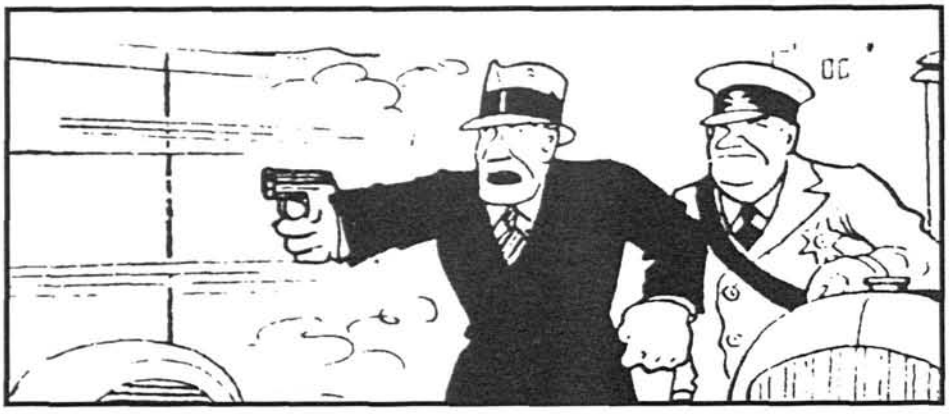
El argumento central sobre el que he querido llamar la atención es que la actual corrupción no puede interpretarse como un mero problema de dejación moral de los actuales gobernantes, aunque ésta es evidente y ha tenido su buena parrte de responsabilidad, sino que debe situarse en un contexto de giro neoliberal y en el mantenimiento de una larga tradición de capitalismo parasitario. Por la extensión del texto he dejado de analizar otra cuestión clave: la reducción de una gran parte de la vida política a una actividad de *marketing* electoral desarrollada por un aparato de funcionarios que absorbe gran cantidad de recursos y las modalidades de financiación a que da lugar.

La simple condena moral de la corrupción puede resultar inútil, como medio de hallar respuestas políticas a la misma, o incluso peligrosa por cuanto puede generar corrientes de opinión opuestas al desarrollo democrático y promotoras de pasividad social. El objetivo básico de la política anticorrupción debe orientarse a denunciar las manipulaciones de los grupos privados, máximos beneficiarios de la misma, y a impulsar reformas institucionales y cambios en la orientación de las políticas económicas encaminadas a invertir las perversas tendencias que ha generado la ofensiva neoliberal.

Un objetivo básico debe ser la transformación de la gestión pública ampliando la información y el control social. De forma más ambiciosa va a ser necesario transformar e invertir algunos de los procesos generales que han desembocado en esta situación: en algunos casos propugnando una recuperación de lo público (por ejemplo, en el caso de la propiedad y gestión del suelo) aunque no del estatismo autoritario, en otros avanzando nuevas medidas reguladoras (especialmente en el ámbito de los movimientos de capitales) que no sólo reduzcan los espacios que propician la corrupción sino también sirvan para aumentar la transparencia de las instituciones y resguardarnos de los perversos efectos generados en múltiples campos de la vida social.

En este sentido la lucha por el control de la corrupción debe ir directamente ligada a la lucha por una reforma en profundidad de los mecanismos, las formas, bajo las que tienen lugar los procesos económicos y la actuación del sector público. Es cierto que las dinámicas de las economías capitalistas son de alcance mundial y no pueden esperarse cambios espectaculares a corto plazo, pero sí cambios que actúen por acumulación a través de un largo proceso que desande el camino anterior. Reformas orientadas a establecer el pleno control democrático sobre las decisiones económicas que incumben a la mayoría de la sociedad.

Jueces para la Democracia vol 21. nº 1/Madrid



2 Los negocios de la política

Estado y corrupción en el Tercer Mundo

Pierre Salama

La corrupción tiene múltiples caras y la frontera con la legalidad es a veces borrosa. Ante esta dificultad surge la tentación de minimizar los problemas que plantea la corrupción. Lo que es corrupción en un sitio puede que no se considere como tal en otro, gracias a un sistema legislativo más permisivo. Con la excusa de que la corrupción es poco visible hay quienes afirman que no se debería condenar necesariamente a quienes se descubre ("a los capitostes nunca se les coge", "de todas maneras, todo el mundo está corrompido"). A la inversa, la corrupción es a veces utilizada para eliminar chivos expiatorios. La función de distracción que cumple es a veces evidente cuando los mismos actos delictivos que ayer fueron ignorados hoy son denunciados. Conviene, sin embargo, añadir que la sensibilidad de la opinión pública no es el resultado sin más de una propaganda eficaz, aunque esta sea juiciosamente propagada. Es también el producto complejo de la percepción que tiene una población del deterioro de la situación económica, social y política.

La violencia en detalle

La corrupción, erigida en un medio de esquivar reglamentaciones con frecuencia poco coherentes, complejas y apabullantes, se presenta con frecuencia como la única vía para la eficacia, sea en la financiación de los partidos políticos (bien porque esté prohibida, o sea muy difícil de llevar a cabo en el marco de la legalidad); bien en materia de flexibilidad de empleo y gestión liberada de la fuerza de trabajo con el desarrollo del sector informal, fuera de las normas oficiales, más allá de la legislación laboral en materia de despidos, derecho a la salud o jubilación; bien por la utilización de dobles contabilidades para evitar los

límites que impone la creciente inadecuación entre una situación económica deteriorada y los reglamentos oficiales. Los ejemplos son numerosos. La corrupción se justifica a partir de la presencia paralizante del Estado y sus reglamentos parasitarios.

La corrupción, aprovechándose de ciertos aspectos del marco legal y las lagunas que existen en toda reglamentación, así como de viejos favores prestados, en un chantaje velado o explícito que se apoya en la ambición personal y la avaricia de beneficios, puede llegar a aparecer como un medio eficaz para quienes la utilizan, sin que por ello se pueda deducir, como pretenden otros, un beneficio global para el conjunto de la sociedad. Tampoco se puede trazar facílmente la frontera entre los intereses profesionales que se representan y el enriquecimiento personal.

Vayamos un poco más allá. Mezcla de formas y estilos, la corrupción se situa en los entresijos de los fallos que existen en todos los reglamentos. Cuanto más complejos son éstos con más fuerza prolifera, porque tiene más necesidad de desarrollar medios de presión extra-legales. Contrariamente a lo que se dice a veces, la corrupción no es un sustituto de la violencia: es la violencia al por menor. Genera violencia abierta. Así, la corrupción masiva se manifiesta en la producción, la transformación y la distribución de drogas, en las que siempre está presente la violencia. Sería un error creer que esa violencia es el producto únicamente de la dificultad de corromper a ciertas personas y que, si se generalizase, permitiría el desarrollo de las actividades ilegales de una forma ordenada. La corrupción crea todo un sistema de codificación alternativo al sistema oficial, poderes de hecho en contraposición a los poderes de jure. Pone en cuestión el monopolio legal del estado de la violencia y al hacerlo lo gangrena, porque desarrolla su propia violencia ilegal.

La corrupción no es, por lo tanto, neutral desde el punto de vista social. Contiene los gérmenes de un "no Estado" y de la creación de un sistema de poderes que desafían a la democracia. Por eso conviene analizar la corrupción en relación con los puntos de vista económicos liberales y con la reproducción de los sistemas económicos.

La posición liberal

La posición liberal privilegia el mercado. El exceso de reglamentación es sinónimo de una intervención excesiva del Estado. Y esta se considera perjudicial: no respeta los derechos de propiedad, provocando una asignación ineficaz de los recursos. Cuando se soslaya esa reglamentación mediante la corrupción, el mercado debería recuperar su vigor natural. De esta manera, la corrupción, al devolver al mercado su función puede llegar a ser eficaz e incluso necesaria.

Nos encontramos, por lo tanto, ante unos postulados sobre los efectos negativos de la intervención del Estado. Cuanto menos Estado, mejor. Hay, sin duda, matices en las posiciones liberales. Se admite la necesidad de que el estado intervenga en ciertas parcelas. Pero en general, la definición misma de los derechos de propiedad constituye una hipótesis ad hoc, es decir una hipótesis que contiene la conclusión en sí misma.

Más allá de una crítica sobre la concepción particular del Estado en su relación con el mercado, que no haremos aquí, hay que recordar que el mercado no funciona sin instituciones, sin normas codificadas. El mercado es más que un conjunto de ofertas y demandas. Es también lo que permite a esas ofertas y demandas expresarse, es decir, los reglamentos y las instituciones que le apoyan. Por ello, el razonamiento liberal reposa sobre un sofisma. La corrupción puede ser quizás eficaz, en caso de reglamentaciones excesivas o ineficaces, pero siempre lo es para quien sale beneficiado de ella, no al nivel del sistema en su conjunto. La corrupción es incompatible con la necesidad de normas oficiales y de instituciones que necesita un mercado para ser eficaz y funcionar desde el punto de vista macroeconómico.

La economía a cualquier precio

El segundo postulado liberal se basa en la dominación estricta de lo económico sobre las conductas. El individuo actúa movido por el único objetivo de maximizar sus ganancias. La política, la ética son prisioneras de la economía. Los individuos analizan en términos de costes y beneficios. El coste de la corrupción es ser descubierto, perder el empleo, etc.; la ventaja es la ganancia que puede obtenerse por el hecho de ser corrupto o de corromper. Si se defiende que la corrupción, que no se justifica por un exceso de reglamentación, debe ser perseguida, sería suficiente con pagar por adelantado a los individuos para que fueran menos tentados por las ventajas hipotéticas de la corrupción. El coste que implicaría perder el empleo sería así más alto. Se crea una espiral causa-efecto entre el aumento legal de las rentas y el aumento ilegal de los beneficios. La corrupción, si costase más cara, desaparecería por sí misma, a menos que las ventajas que procurara no fueran a su vez crecientes.

Si es verdad, frecuentemente, que salarios muy bajos suelen favorecer la corrupción, es erróneo creer que este asunto es exclusivamente económico. Hay que hacer varias puntualizaciones. En aquellos países en los que la crisis fiscal del Estado es de tal calibre que los funcionarios perciben rentas muy bajas, el poder del "tampón" es un medio de conseguir rentas suplementarias que en algunos casos pueden llegar a constituir la parte más importante de los ingresos. Pero hay que añadir que el Estado se hace cómplice de esta situación. La pequeña corrupción es una especie de impuesto directo que cobra el funcionario cuando el Estado no tiene medios para obtener unos medios fiscales suficientes. Los poderes públicos pueden pagar unos salarios tan bajos a sus funcionarios precisamente porque saben que esa pequeña corrupción existe. Los funcionarios disfrutan de alguna manera de una remuneración en especies. Esta remuneración en especies, recibida en la base del sistema económico, es a su vez difundida, ya que el funcionario corrompido pasa una parte de la coima así obtenida a sus superiores, que hacen a su vez lo mismo; o bien, hacia abajo, extendiendo un clientelismo hacia los funcionarios de nivel inferior a cambio de una legitimación que puede ser imprescindible para mantener la propia posición superior. En este último caso, la lógica no es estrictamente económica. La posición que se ocupa en el seno de la familia, o

de un grupo étnico, constituye el fundamento de esta circulación de dinero corrupto. Estas coimas sustituyen a una presión fiscal suficiente por parte del Estado, convirtiéndose parcialmente en ingresos y en impuestos, imprescindibles en ambos casos para conservar el empleo.

Estos casos extremos son frecuentes en aquellas sociedades en las que el Estado moderno no se ha constituído plenamente. Esta es la razón por la que la corrupción tiene unas causas más complejas que las que le atribuye el reduccionismo economicista del análisis liberal. Con el desarrollo y la modernización del Estado, se desarrolla el espíritu de cuerpo de la Función Pública. Los funcionarios reciben una remuneración más que un salario, ya que trabajan para el Estado y no sólo por dinero. Su remuneración es, por lo general, inferior a la que recibirían en el sector privado, pero su sentido del Estado hace más difícil una corrupción que, de acuerdo con el pensamiento liberal, debería por el contrario generalizarse.

La corrupción ha existido siempre. Su amplitud es, sin embargo, variable. Sus fluctuaciones están ligadas a factores complejos y explicar su desarrollo por un exceso de Estado es reduccionista. No es simplemente un deshecho de la reproducción del sistema, sino un Janus de dos caras. Puede ayudar o puede obstaculizar la reproducción en su conjunto.

El cuadrado mágico de la corrupción

La metáfora del cuadrado mágico puede ayudarnos a comprender esta dualidad de la corrupción. Sus cuatro ángulos son la reproducción, el enriquecimiento, el clientelismo y el poder. Como todo cuadrado mágico, éste es también por naturaleza inestable y el posible equilibrio entre sus ángulos, fugaz. Es decir, la eficacia de la corrupción es cuanto menos aleatoria.

Desmontemos por un instante este cuadrado mágico. Existe una relación dialéctica entre enriquecimiento y clientelismo. El clientelismo permite un enriquecimiento rápido mediante la corrupción, creando redes paralelas a las oficiales, redes que reducen la imperfección de la información en su beneficio y a costa de otros. El clientelismo es posible sólo si hay posibilidades de distribuir dinero o prebendas, trabajo o rentas a través de los hilos que maneja una red de influencias. El clientelismo asegura una base de reproducción gracias a la legitimidad que procura un enriquecimiento bien redistribuido.

Enriquecimiento y clientelismo están por lo tanto, estrechamente unidos. No hay enriquecimiento duradero sin capacidad de alimentar una red clientelista. Se trata de un coste de transacción inevitable de la corrupción. El enriquecimiento y el clientelismo exigen, por lo tanto, la búsqueda de un poder alternativo al que confiere la legalidad. Este poder no puede concebirse en el marco de la reproducción regular del sistema. Puede afirmarse que el objetivo último del poder es su perpetuación. La reproducción busca así el enriquecimiento bien por vías directas materiales o por una elevación de status social o profesional; la corrupción produce corrupción no solamente por las redes que desarrolla y la multiplicación de complicidades que genera, sino fundamentalmente porque el objeto del poder se convierte en el poder mismo. La corrupción gira sobre sí

misma, alejándose de su objetivo inicial, el enriquecimiento y se inserta en una cadena cuyo objetivo es la reproducción del poder y su ejercicio.

Más allá del estudio del individuo preso en esta espiral de corrupción, el análisis de esta desde este punto de vista sistémico, pero a un nivel macrosocial, adquiere una importancia particular. Permite mostrar como el paso de un polo a otro puede bloquearse más allá de ciertos umbrales y como el tejido social y la democracia son profundamente afectados.

Especulación o redistribución

El dinero de la corrupción funciona un poco como una renta. El enriquecimiento no es el producto del trabajo si no una relación de fuerzas. Se observa el mismo fenómeno en las rentas. La importancia de las rentas depende de la negociación. La circulación prima sobre la distribución desde el comienzo y es lo que explica que en el conjunto de la economía la producción de plusvalía sea dejada de lado y que el enriquecimiento sea el resultado de la capacidad de participar en el circuito de las rentas. La producción sirve así, ante todo, para obtener una parcela de rentas, de legitimación (de ahí la plétora de personal y la constitución de un mercado de trabajo burocrático-clientelista) más que para procurarse recursos. Esta es la razón por la que estas economías se consideran anti-productivas.

El dinero de la corrupción, funcionando como una renta, no genera por lo tanto poca o mucha riqueza. Para ser exactos lo que hace es facilitar el acceso a ciertas informaciones, que a su vez permiten competir en la producción de riquezas, pero al generalizarse facilita las vías fáciles de acceso a la riqueza y al hacerlo deja de lado a aquellos que se sitúan precisamente en el proceso de producción de riquezas. Es más fácil y más lucrativo consagrar esfuerzos a la especulación corrupta que a la producción. Pero igual que en la economía rentista, hay un momento en el que las riquezas producidas ya no son suficientes para satisfacer las necesidades y la redistribución de la escasez desarticula el tejido social.

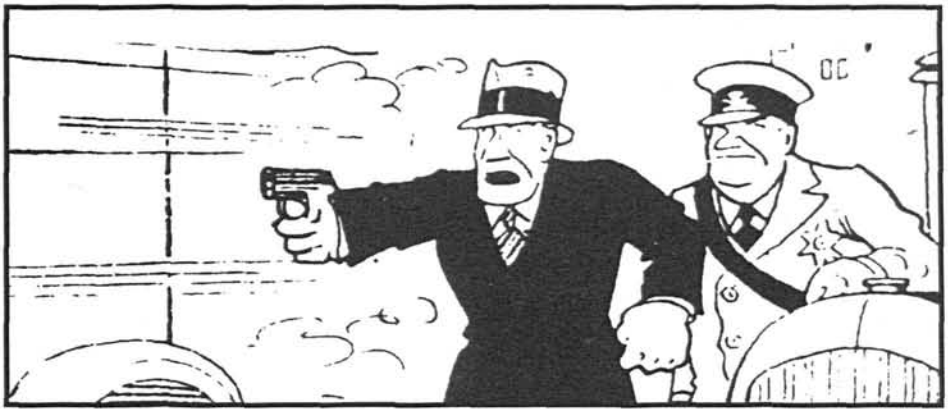
El impacto de la corrupción, por lo tanto, es muy negativo. La corrupción produce sus propias leyes que tienden a sustituir a las leyes oficiales, debilitando al Estado. La corrupción produce poderes de hecho que sustituyen a los poderes de jure y los litigios y conflictos, en vez de canalizarse judicialmente, tienen que recurrir a la violencia.

El mal del Estado débil

La corrupción no es la consecuencia de un Estado demasiado fuerte, aunque una reglamentación excesiva y poco flexible, puede estimularla. La corrupción no constituye la solución eficaz a esta situación. El mercado, enfrentado al Estado, no es el medio mágico para luchar contra la corrupción. En vez de oponer Estado y mercado y utilizar esta oposición a la vez para explicar y legitimizar la corrupción, sería más juicioso considerar que tanto el mercado como el Estado son dos categorías históricas. El Estado ha creado el mercado al dotarle de un marco jurídico e institucional. El Estado, como el mercado, puede entrar en crisis. La intervención del Estado puede perder entonces la eficacia anterior y sus aparatos

funcionar peor. La corrupción y su ciclo deben comprenderse en relación con esta debilidad enfermiza del Estado y no en relación a un concepto etéreo del mismo. Cuando la corrupción se desarrolla afecta con mayor facilidad al tejido social cuanto más fuerte sea la crisis del Estado.

HISTOIRES DE DÉVELOPPEMENT, nº 24 / París, diciembre 1993
Traducción: G. Buster



3 Los negocios de la política

La mafia rusa

Stephen Handelman

La criminalidad organizada es la fuerza más explosiva que ha surgido del naufragio del comunismo soviético. La llamada mafia rusa ha minado toda reforma, engendrado en las grandes ciudades un nivel de violencia extraordinariamente alto y ayudado a fomentar una reacción ultranacionalista que sigue creciendo. Aunque está bastante menos organizada que los sindicatos del crimen de Occidente, y por tanto es subestimada y poco entendida en el mundo occidental, la mafia rusa constituye una grave amenaza para la democracia post-soviética.

La mafia al estilo ruso es una hidra de mil cabezas que se nutre de la naciente economía de mercado. Hay entre 3.000 y 4.000 bandas en Rusia, incluso varios centenares cuya esfera de acción abarca todo el territorio de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), cruza las fronteras soviéticas y penetra hasta Europa central y Occidente.

En Rusia, la definición de crimen organizado a veces se amplía por intenciones de política interior. Por costumbre, la policía y los políticos siguen imputando relaciones mafiosas a quienes poseen cantidades de dinero que parecen desmesuradas. El número de miembros de las bandas mafiosas se calcula en menos de 100.000 en total. Sin

embargo, la confusa frontera entre lo lícito y lo ilícito en asuntos empresariales ha permitido que los grupos mafiosos se hayan infiltrado en casi todas las áreas de la economía rusa y les ha dotado de una influencia desproporcionada.

Según el Ministerio del Interior ruso (MVD), en 1993 los sindicatos del crimen habían llegado a controlar hasta el 40% del movimiento de mercancías **/1**. Hay pocos empresarios que puedan seguir mucho tiempo en el mundo del comercio sin que "protectores" armados les pidan dinero en efectivo o acciones de sus empresas. A falta de regulación por parte del Gobierno, cárteles criminales se han infiltrado en la banca, en el mercado inmobiliario, en la bolsa y hasta en el mundo del comercio de la música rock. Al mismo tiempo, otras actividades criminales más tradicionales han transformado la economía de regiones como Asia Central, que está convirtiéndose en el eje más reciente del narcotráfico mundial. Pero puede que más preocupante sea la participación de los sindicatos del crimen en el tráfico de armas robadas del Ejército Rojo, que aparecen posteriormente empleadas en las luchas étnicas de las fronteras meridionales de Rusia.

Lo que hace más distintivamente amenazadora a la mafia rusa es su relación con sectores clave de la burocracia del Gobierno. Ninguna red delictiva tan compleja hubiera podido prosperar sin que oficiales de todos los niveles la fomentaran y apoyaran. Según los investigadores del Gobierno, en 1992 más de la mitad de los grupos criminales del país tenían conexiones con el Gobierno. Algunos cárteles son tapaderas de la antigua élite soviética, los capitalistas nomenclaturistas, que se han deshecho del carné del partido mientras se convierten en financieros y monopolistas ricos. Hay más y más indicios que demuestran que los capitalistas nomenclaturistas se sirven de los sindicatos del crimen como instrumento en la lucha intensa por el botín de la antigua Unión Soviética: las industrias, los bancos, las instalaciones militares, los puertos y las fábricas, anteriormente todos bajo el control único del Partido Comunista.

En uno de los escandalos de 1992, algunos mafiosos de Chechenia fueron detenidos cuando pretendían estafar unos 350 millones de dólares a bancos privados de Moscú y otras ciudades por medio de pagarés, un sistema de transferencia de fondos bancarios heredado de la época soviética. Poco después, se acusó a cuatro empleados del Banco Nacional de Rusia de facilitarles los pagarés falsos a cambio de una parte de las ganancias. Además del afán de lucro, es posible que tuvieran otros motivos. El presidente de la sociedad de la banca privada más grande del país cree que el móvil de la estafa era la determinación, por parte de altos cargos del Ministerio de Hacienda, de sabotear el comercio bancario privado. Es decir, que la actividad criminal post-soviética es en muchos casos una continuación de la política, por otros medios.

El reverdecer de las bandas del crimen rojas

Para comprender el papel de la mafia rusa en las guerras políticas de la nación, ayuda considerar un poco el pasado. El hampa rusa tiene una historia curiosa. Al margen de la vida nacional, existían durante siglos sociedades de contrabandistas,

1/ Todas las estadísticas aquí citadas, si no se atribuyen a otra fuente, proceden del Ministerio del Interior de Rusia. Visto que gran parte los datos del crimen organizado se quedan sin publicar, mucha de la información aquí presentada se funda en entrevistas privadas con altos mandos de la policía, con políticos y con los propios mafiosos.

ladrones y salteadores de caminos. En los últimos años de la época zarista los grupos criminales eran símbolos prestigiosos de la lucha contra los terratenientes y el Estado tiránico. La estructura tradicional de la banda, fortalecida por un código de honor y rituales que excluían a los no comprometidos, fue adoptada como modelo por las primeras organizaciones bolcheviques clandestinas.

Los que serían los fundadores del futuro Estado Soviético no sólo admiraban las características antisistema de las bandas, sino que las emplearon también en la revolución. Reclutaron bandidos para ejecutar "expropiaciones" (secuestros y atracos a bancos), que eran fuentes importantes de fondos. El joven Josef Stalin contaba entre sus socios más íntimos a jefes de bandas criminales, algunos de los cuales fue incorporando a su policía secreta. Una vez establecido el poder soviético, se utilizó a miembros del hampa como represores e informadores contra disidentes políticos en el sistema carcelario del gulag.

Pero la colaboración más lucrativa se estableció en los años 60, con el desarrollo del estraperlo. Los mafiosos rusos servían de intermediarios no oficiales en las economías negras y grises, comerciando con mercancías privadas o bienes públicos con la colaboración tácita de directores de fábricas y aparatchiques. Al mismo tiempo, la estructura tradicional de la antigua banda rusa empezó a cambiar. Grandes organizaciones criminales asomaron la cara en muchas ciudades rusas, encabezadas por jefes mafiosos llamados *vory* y *zakonye* (ladrones dentro de la ley), que dirigían lo que equivalía a monopolios comerciales en su territorio. A medida que flaqueaba la proscripción tradicional de colaborar con las autoridades, muchos jefes de bandas empezaron a operar en tándem con oficiales públicos de su región. Al final de la época soviética, más de 600 vory actuaban en toda la extensión de la Unión Soviética.

Las autoridades comunistas no iban a la zaga de nadie en cuanto a conducta criminal. Durante los años 70 y 80, escándalos tales como el asunto del algodón, en el que jefes del Partido en Uzbekistán falsificaron informes de producción y sacaron una ganancia enorme, descubrieron que detrás de la fachada puritana de la dirección soviética, existía un talento para el latrocinio hasta entonces insospechado. Los rusos empezaron a utilizar por primera vez en dichos decenios la palabra *mafiya,* para denominar las extensas redes de corrupción escondidas dentro de los ministerios centrales y regionales.

Dinero negro y gris

De poco sirvió la perestroika para derribar el poder de las redes criminales. Más bien aquélla empalmó los diversos ramales del escenario criminal soviético. "La perestroika fue el verdadero comienzo del crimen organizado en nuestro país," dijo un investigador de alta graduación del MVD, un comentario que se ha repetido muchas veces. La riqueza secreta acumulada por magnates mafiosos encontró un modo legítimo de empleo cuando el gobierno ensanchó el área permisible de la iniciativa privada. El dinero negro y gris inundó las bolsas, sociedades limitadas, cooperativas, bancos y sociedades anónimas, mientras todos estos fenómenos eran alabados en el extranjero como presagio de una reforma económica. Mientras tanto, sectores del Partido (y del KGB) iban invirtiendo fondos en empresas mercantiles y de comercio exterior, planteadas para aprovechar la tan nombrada nueva era del "socialismo de mercado".

Los empresarios rusos que pretendían operar de acuerdo con las reglas, descubrieron que no era posible prosperar ante la competencia tanto oficial como criminal. De este modo resulta que a finales de los 80, según los analistas rusos, la mayor parte de las pequeñas empresas cooperativas fundadas durante la perestroica eran controladas por intereses criminales o tenían deudas importantes con ellos.

Así se creó un clima favorables a las alianzas movedizas y a las luchas violentas, características ya del moderno crimen organizado de Rusia. Tanto los mafiosos rusos como los políticos correspondientes están poco dispuestos a ajustarse a las reglas de la transigencia y el consenso, imprescindibles en las grandes organizaciones. La proliferación del poder mafioso por todo el país resulta arrolladora. En muchas ciudades rusas los secuestros, asesinatos por pistoleros, atentados con bomba y confrontaciones a tiros entre bandas armadas son parte de la vida cotidiana. La violencia creciente de este estilo es la evidencia más visible de la lucha por parte de la mafia para conseguir un papel en la nueva economía, y demuestra una capacidad criminal más avanzada de lo que nunca se ha visto en Rusia.

La banda criminal rusa es posiblemente la única institución soviética que se ha beneficiado de la desintegración de la URSS. Una vez desmoronado el poderoso aparato del Partido que gobernaba el antiguo imperio, las 15 nuevas naciones fueran consideradas un coto privado por los criminales que percibían todo el continente euroasiático como su campo de operaciones. Por ejemplo, prosperó el comercio de contrabando, ya que cantidades enormes de cobre, cinc y otros metales estratégicos salían de Rusia Central en camiones sin identificar y en aviones militares para llegar a puertos bálticos y de allí a Escandinavia y a Europa occidental. Los contrabandistas se aprovecharon con astucia de las luchas por el predominio en la CEI; los productos robados a una fábrica rusa se convertían en mercancías legítimas en cuanto cruzaban las fronteras de Rusia. Tanto metal ilícito de las fábricas de armamento rusas pasó por Estonia camino del extranjero, que la pequeña república báltica se distinguió como uno de los exportadores de metal acabado más grande del mundo, sin operar allí ninguna fábrica.

Las ganancias sacadas del contrabando han sido el fundamento de la riqueza mafiosa poscomunista y la base de la colaboración activa entre los criminales y la nomenclatura. Para cuando los gobiernos de la CEI se enteraron de los peligros creados por sus fronteras porosas y por lo tanto se precipitaron a firmar acuerdos aduaneros (la mayor parte de ellos poco eficaces), los ingresos procedentes del comercio ilícito de los recursos soviéticos estaban reinvirtiéndose en bienes raíces, comprobantes de bienes privatizados y sociedades financieras. Pronto llegó a ser difícil distinguir entre las bandas y sus patrocinadores gubernamentales.

Las autoridades rusas no desmienten que la mezcla de capitalismo desenfrenado, crimen organizado y corrupción pública ha producido una crisis de gobernabilidad. Un Boris Yeltsin frustrado declaró el año pasado que las actividades de las mafias "ha llegado a ser de tal índole y a tan gran escala" que amenaza el futuro del Estado ruso. Se quejó de que se estaba destruyendo la economía, desestabilizando el ambiente político y minando la moral pública. "El crimen," concluyó Yeltsin, "ha llegado a ser el problema número uno para nosotros." Era oratoria altisonante; pero con todo, desafortunadamente, da la impresión de ser una admisión de derrota.

Aunque se ha fanfarroneado mucho en el Parlamento Ruso sobre la prevención de la criminalidad, la verdad es que, desde que se desechó el régimen comunista

en 1991, los nuevos líderes de Rusia no han tomado ni una sola medida eficaz para refrenar el crimen organizado. Al contrario, los éxitos más destacados, la supresión de los últimos rastros del estado policíaco y la abolición de casi toda restricción sobre la propiedad privada, han servido de una manera perversa para crear un ambiente óptimo donde florecen las operaciones mafiosas.

Crimen y castigo

Al formular la nueva política, los dirigentes rusos cometieron un error fundamental: pretendieron desarrollar un mercado libre sin haber construido antes una sociedad civil en la que tal mercado pudiera funcionar con seguridad. Resulta que los hombres de negocios, los políticos y las fuerzas de seguridad están a merced de los persistentes prejuicios ideológicos de la jurisprudencia soviética. Siguen siendo ilegales o estan desprotegidas por la ley muchas de las medidas necesarias para que una economía de mercado funcione; otras actividades que en Occidente se consideran ilegales, tal como el crimen organizado, no están proscritas explícitamente.

Bajo el sistema actual, la policía puede detener a un grupo de delincuentes cogidos con las manos en la masa pero, por falta de leyes al estilo occidental contra la conspiración, no se puede proceder contra la figura principal si ésta permanece entre bastidores. Bajo las leyes soviéticas, el crimen organizado se consideraba un concepto capitalista y por tanto inaplicable a la realidad soviética. En cambio, la obtención de beneficios sigue estando en una zona ambigua en el derecho post-soviético. Todavía hay que clarificar los métodos para solucionar los conflictos entre las empresas privadas, y no existen líneas de actuación sobre la validez de los contratos ni el proceso de quiebra legítima. Rusia no tiene una judicatura independiente y todavía no hay manera de abordar los delitos de cuello blanco de estilo más complejo. Las leyes actuales no facilitan ninguna manera de embargar las cuentas de empresas fraudulentas ni de averiguar la procedencia criminal de cuentas bancarias. Aunque existieran tales provisiones, sería dudoso que se cumplieran. Los policías rusos están tan mal provistos que algunos persiguen a los criminales en autobús y taxi. En tales circunstancias, no hay motivo para sorprenderse de que la criminalidad prospere.

En el último Parlamento, no se pudieron aprobar varios planes ambiciosos para incrementar los presupuestos de la policía y las fuerzas de seguridad y de reemplazar el antiguo Código Penal soviético. La nueva Constitución rusa, aprobada el último diciembre por una pequeña mayoría, plantea unos principios importantes para reformar el sistema de justicia tales como una judicatura independiente y el derecho de libre empresa y la propiedad privada. Queda por descubrir si dichos principios serán traslados a la legislación práctica. El peor impedimento para una política coherente contra la mafia es un problema de percepción. Muchos políticos rusos (y algunos no rusos) creen que la corrupción y el crimen son el precio que hay que pagar por el experimento ruso de libertad de empresa. Se arguye que otros Estados (incluida la Rusia posterior a 1917) también padecieron un alto índice de criminalidad durante épocas de grandes cambios sociales y económicos. Hay quien identifica a los magnates estraperlistas y a los turbios empresarios de hoy día con los *robber barons* de la Norteamérica

decimonónica. Quizás, por otra parte, no tenga nada de extraño que aquellos cuyo punto de vista sobre el orden público se formó bajo el autoritarismo soviético, se pregunten si el remedio no será peor que la enfermedad. Pero los argumentos en pro de acomodarse a la mafia se malogran ante un hecho, una cosa es tolerar los excesos de los Carnegie, los Vanderbilt y los Morgan rusos del futuro, y otra permitir que pasten gratis dentro del sistema político.

Los lazos de la mafia con el gobierno, nacidos de su relación simbiótica con las antiguas clases dirigentes de la Unión Soviética, hacen que el crimen organizado constituya un puñal que apunta al corazón de la democracia rusa. El peligro es especialmente evidente fuera de las grandes urbes de Moscú y San Petersburgo, donde los jefes mafiosos de los pueblos y sus aliados políticos han llenado el vacío dejado por las autoridades comunistas al marcharse. Las alianzas se forman por razones tanto políticas como económicas, ya que los jefes regionales ambicionan más poder sobre los recursos y comparten un interés común con los estraperlistas y las figuras mafiosas en resistir el control central.

El crimen organizado ha infectado el sistema nervioso central de la política rusa. Durante todo el año 1993, escándalos de corrupción, uno tras otro, paralizaron el Gobierno de Yeltsin. Ninguna institución quedó sin tacha; se descubrió que hasta altos mandos del Ejército Rojo estaban implicados en redes de contrabando y que ministros del gobierno y mandos policiales trabajaban para empresas de negocios poco claros. En el caso más famoso, un grupo de miembros del malogrado Soviet Supremo, encabezados por Alejandro Rutskoi, vicepresidente por aquella época, forzó que varios ministros reformistas dimitieran de sus cargos por cuestiones de corrupción. Algunos oficiales del Gobierno se vengaron divulgando documentos que pretendían demostrar que Rutskoi y sus aliados políticos eran culpables de blanqueo de dinero y de tráfico ilícito de armas **/2**.

¿A quien defender?

De este modo, acabaron politizándose, en una clima de acusaciones y recriminaciones, aun los esfuerzos mínimos del Estado para poner fin a la corrupción, con lo que la credibilidad del Gobierno siguió disminuyendo. Los rusos bien podían acordarse que bajo el régimen soviético los casos de corrupción, casualmente, sólo perjudicaron a los perdedores de las luchas políticas. Aunque el propio Yeltsin no estaba implicado en ningún escándalo, es evidente que le era violento tener que hacer frente a la conducta delictiva de sus aliados políticos. Disgustados algunos de sus mejores investigadores contra la corrupción abandonaron su puesto. Mientras la euforia de agosto de 1991 iba consumiéndose, la mayoría del pueblo llegó a la conclusión que, salvo las caras de quienes gobernaban, no había cambiado apenas nada. "A decir verdad," me dijo un periodista conocido de Moscú, "si mañana se montara un golpe de Estado, yo no sabría a quién ni a qué defender."

Es indignante sugerir a un pueblo cada vez más desilusionado que la criminalidad

2/ En febrero de 1993, Pavel Grachev, Ministro de Defensa de Rusia, comunicó que 46 generales y altos oficiales serían procesados por un juzgado militar acusados de corrupción, y que 3.000 oficiales más serían disciplinados por "negocios ilegales" tales como tráfico de armas y venta en el mercado negro de materiales militares. Algunos meses después, el propio Grachev fue blanco de acusaciones de corrupción en el asunto de la compra de automóviles oficiales a Alemania.

es el subproducto desgraciadamente inevitable de la transición política y económica. Es posible que sea admisible un coste de vida cada vez más alto; el ruso corriente será el primero en informar a los extranjeros que ya aguantó otras épocas de vacas flacas. Pero cuando el descontento económico se une a la ira causada por la corrupción oficial y la violencia criminal, se convierte en una fuerza política poderosísima. El sentimiento de traición y de inseguridad personal se intensifica al ver a los nuevos ricos del país saliendo de los restaurantes de lujo, los coches atascando las vías públicas, y a los pistoleros pavoneándose por las calles.

Las crecientes tasas de criminalidad han convertido en una multitud de desconocidos mutuamente recelosos lo que antes era una sociedad ordenada y solidaria. En una encuesta de 1992, 3 de cada 4 moscovitas temían andar por las calles de noche. En otra, realizada en 1993, el 49% de los rusos se mostraban más preocupados por la criminalidad que por el paro.

En las elecciones del 12 de diciembre de 1993, el alto número de votos del neofascista Vladimir Zhirinovsky se debió tanto a la reacción contra el crimen como al populismo económico. La gran popularidad de los patriotas ultranacionalistas y de los neocomunistas se basa principalmente en sus invectivas contra los valores mafiosos, léase occidentales. Zhirinovsky, al igual que muchos otros candidatos de la oposición, hizo campaña a favor de un severo programa de orden público y, en su última aparición en la televisión antes de las elecciones, abogó volver a los decretos de la época de la guerra civil rusa que autorizaban disparar a muerte a los criminales nada más ser vistos.

La defensa de soluciones draconianas para la crisis de orden público figuran en el programa político de las principales fuerzas políticas y quizá domine el orden del día de la nueva Duma del Estado. Al no haber logrado desarrollar una sociedad conforme al Estado de Derecho, el primer gobierno post-soviético está volviendo a las prácticas de sus predecesores. Durante la crisis de octubre de 1993 aparecieron actitudes reaccionarias como consecuencia de la confrontación entre Yeltsin y el Parlamento. Poco después del asalto a la Casa Blanca rusa, el Gobierno impuso el toque de queda en Moscú y mandó a soldados y policías patrullar por las calles. No hay motivo para sorprenderse de que cayeran en picado los índices de crimen. El éxito incidental de estas rigurosas medidas reforzó entre los policías y los políticos a los que abogaban por una guerra contra el crimen al estilo soviético. Yeltsin, en un esfuerzo por controlar a los poderosos sindicatos del crimen que circulaban libremente entre Moscú y otras ciudades por toda la CEI, mandó que la policía expulsara de la capital a los extranjeros no empadronados. La medida se dirigía principalmente contra los gángsteres de la zona del Cáucaso. A chechenos y azeríes, específicamente, se debe gran parte del tráfico de drogas. Pero este método de dar palos de ciego condujo a la expulsión o el hostigamiento de miles de comerciantes no empadronados, pero inocentes. Tal violencia reflejaba tanto la creciente intolerancia racial entre los rusos como una determinación seria de desarraigar el crimen. Y como dijeron sardónicamente algunos comentaristas, la mayoría de los jefes mafiosos aprobaron las medidas como una manera de eliminar a sus competidores más importantes.

También hay indicios de que el Gobierno está haciendo preparativos para endurecer las medidas contra los empresarios, conforme a los prejuicios que identifican la iniciativa privada con el delito. El Ministerio del Interior desempolvó una táctica utilizada por la KGB en el último año de la época soviética, que es el registro de

establecimientos comerciales y la incautación de bienes sin orden judicial, y la propuso como parte de un conjunto de medidas contra el crimen. Después de que se filtrara a los periódicos, Yeltsin descartó el proyecto. Pero no sorprendió a nadie que fuera recibida con comprensión por la derecha y los capitalistas nomenclaturistas.

En realidad, un retraso o supresión completa de las reformas es el objetivo del antiguo aparato soviético, que prefiere un capitalismo corporativo y subvencionado, a la expansión sin límites de la propiedad privada. Coincide con las intenciones de los sindicatos del crimen más grandes, que ansían transformar su riqueza en influencia política. En el golpe de estado de agosto de 1991, los gángsteres figuraron entre los más firmes defensores de la democracia, debido en parte a su antipatía tradicional hacia los comunistas. Pero después, varios de ellos han dicho en confianza que, a causa del "desorden" de la economía rusa, ya no respaldan las reformas. "En este tipo de ambiente, ¿quién puede hacer negocios?" dijo un mafioso, sin trazos de ironía.

Durante la campaña de diciembre /3, se sospechaba que algunos candidatos de la oposición recibieron fondos de grupos mafiosos. y hay informaciones de fuentes fidedignas de que partidos ultranacionalistas se han aprovechado de bandas criminales para hostigar a caucasianos y otras minorías étnicas. Puedan o no creerse estas historias, el Gobierno de Yeltsin ya ha visto reducida su capacidad de maniobra.

Poli bueno, poli malo

Los observadores occidentales no son conscientes de hasta qué punto la corrupción y el crimen organizado han obstaculizado las reformas políticas y económicas en Rusia. Las primeras suposiciones de que la introducción de la iniciativa privada allanaría el camino para la democracia no tuvieron en cuenta el poder persistente del antiguo régimen soviético. El crimen organizado ha reforzado el aparato anterior en su lucha por seguir controlando sectores clave de la economía y ha intensificado la hostilidad popular hacia la política democrática de mercado libre, a favor del cual hacen campaña los reformistas pro-occidentales.

Occidente debe tomar mucho más en serio de lo que lo ha hecho hasta ahora, al crimen organizado ruso. La situación actual plantea un dilema para los políticos de las capitales occidentales. Mientras la evolución de la política interna de Rusia ha vuelto a suscitar más interés internacional, disminuye la influencia que puede ejercer Occidente sobre los asuntos nacionales de Rusia. El asesoramiento y la ayuda económica, por escasa que sea, se encuentran desacreditados por la crisis profunda que ha sufrido la nueva Rusia tras la introducción caótica del mercado. Dentro del país, las soluciones nacionalistas y autoritarias están en ascenso. Pero desde el punto de vista internacional, hay áreas de influencia importantes todavía sin explorar.

Una primera área exige un cambio de percepción en la política de ayuda económica y en la estrategia para desarrollar el mercado ruso. Hasta hace poco, Occidente se concentraba en ayudar a Rusia a pagar sus deudas internacionales y en animarla a continuar una política de austeridad. Pero desde las elecciones de diciembre, ha habido un cambio de opinión, que apoyan más abiertamente diversos programas de seguridad social como medio de apaciguar el descontento económico. Pero esta política, a pesar de

3/ Del año 1993. (Nota del Traductor).

todo, no ataca el problema central: el vacío legal en la misma estructura de la economía rusa. Occidente debe ofrecer asesoramiento y ayuda para crear una infraestructura comercial, incluidos un sistema bancario viable y agencias reguladoras, y para desarrollar un sistema legal que se aplique a asuntos comerciales; eso contribuiría en gran medida a desvanecer las dudas sobre la seguridad por parte de los inversionistas, tanto rusos como extranjeros. Si los obstáculos en el mercado ruso estorban a los empresarios domésticos, en mayor grado ahuyentan a los extranjeros, para quienes los nexos entre la política y el crimen organizado exacerban las barreras culturales entre el Oriente ex socialista y el Occidente capitalista. El soborno siempre representaba un coste oculto al hacer negocios en la época soviética. Actualmente, el desventurado empresario extranjero puede acabar siendo el blanco de extorsionistas o chantajistas. En tal caso, encontrará poca comprensión por parte de la policía y los juzgados, ya sobrecargados de trabajo.

Por lo tanto, es imprescindible la ayuda internacional para modernizar los sistemas judicial y policial de Rusia. Esta tarea exige algo más que un programa de intercambios de personal policial y unos cursillos para familiarizarse con la jurisprudencia occidental. La policía rusa carece de casi todo, desde coches y ordenadores hasta técnicas de prevención y detección de actividades delictivas. Ayudar a reformar el anticuado sistema de la justicia soviética, con sus prejuicios en favor del procesamiento y contra los derechos del individuo, serviría en gran parte para quitar de en medio una de las causas principales del desprecio generalizado a la ley.

Es comprensible que la policía occidental en su totalidad recele a la hora de colaborar con la policía rusa. Aunque la decisión, recién adoptada, por el FBI de abrir una oficina de enlace en Moscú es un gran avance, varios agentes admiten que las relaciones no son las que uno esperaría entre colegas, a causa de la corrupción generalizada dentro de la policía rusa. Sin embargo, Occidente tiene un interés más que académico en fraguar buenas relaciones con los cuerpos de seguridad de Rusia.

Un buen cliente

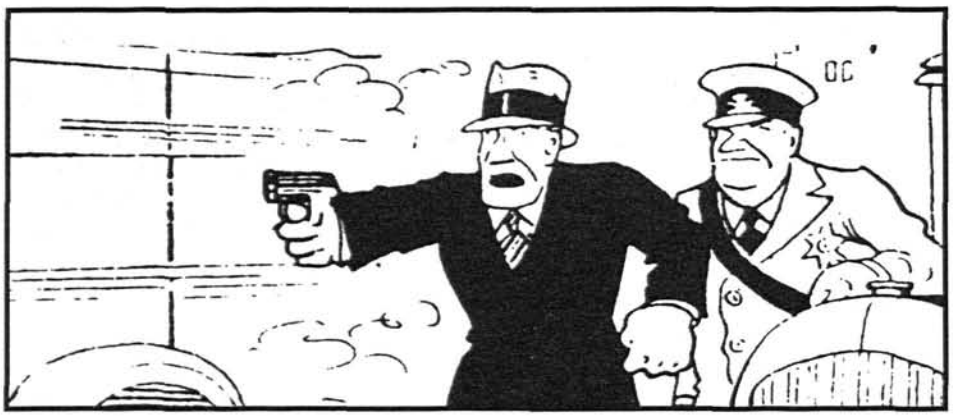
La vieja retórica del "imperio del mal" ha sido sustituida por el miedo a que la mafia rusa penetre las economías occidentales. Hay razones bien fundadas para este miedo. Las bandas rusas han provocado una oleada de violencia en Europa Central y Alemania. El contrabando de recursos rusos en el extranjero ha hecho bajar los precios mundiales de mercancías como el aluminio. El uranio de calidad superior y otros subproductos del arsenal nuclear soviético se han puesto a la venta en capitales de Europa occidental.

También los sindicatos del crimen de Rusia están atrayendo en Occidente a tipos indeseables como socios. Algunos jefes de las bandas de Moscú y las repúblicas bálticas han celebrado conferencias en la cumbre con miembros de la mafia italiana, y la creciente importancia de Rusia como vía de tránsito del narcotráfico ha despertado el interés de cárteles colombianos. Gángsteres post-soviéticos se han interesado activamente en los Estados Unidos, como sugiere el creciente número de asesinatos, detenciones de contrabandistas y la evidencia de transferencias de importantes cantidades de dinero negro. El MVD calcula que en 1993, 25.000 millones de dólares fueron transferidos por el crimen organizado desde la CEI a bancos occidentales. La preocupante posibilidad de que el antiguo

aparato comunista, por medio de sus aliados mafiosos, pueda llegar a ser un inversionista importante en las economías occidentales subraya la necesidad de proteger con más cuidado la seguridad económica de Occidente.

Los conflictos internos de Rusia han moderado el jubiloso espíritu que sucedió a la guerra fría. La confusión de los últimos dos años ha puesto en duda varias presunciones de Occidente después de la derrota de la Unión Soviética: que el aparato comunista hubiera perdido sus fuerzas políticas, que los rusos se sumaran irrevocablemente a la democracia y que el capitalismo sería el motor de la transformación de Rusia. La más preocupante es la incertidumbre sobre la tercera presunción. A medida que los rusos van identificando la democracia y el mercado libre con el crimen organizado y la corrupción, recurrirán a sistemas de gobierno mucho más desagradables. Si siguen desenfrenados el caos económico y la violencia de las bandas, es previsible que pueda subir al poder un gobierno autoritario y hostil en el continente euroasiático, en lugar del socio próspero que le gustaría a Occidente para lograr un mundo estable en el siglo veintiuno.

Traducción: Ben Donahue



4 Los negocios de la política

Un análisis comparado

Donatella Della Porta e Yves Mény

La multiplicación de los escándalos políticos ha llevado a primera línea las cuestiones que se refieren a los actores de la corrupción: ¿Quiénes son los corruptos? ¿Cómo hacen carrera? ¿Cómo consiguen ocupar puestos importantes en sistemas políticos y económicos complejos, como son las democracias occidentales? Podemos avanzar dos hipótesis diferentes. Por un lado, la corrupción política está ligada a la presencia de profesionales de la política, es decir, según la conocida expresión de Weber, a la existencia de esos hombres políticos

"que viven de la política", buscando extraer de ella ventajas extrínsecas o instrumentales, a diferencia de los "que viven para la política" y que encuentran en ella gratificaciones intrínsecas e ideológicas. Segunda hipótesis: los políticos corruptos provendrían de una clase política emergente, falta de práctica y privada de toda ética pública. Éstas son, por ejemplo, las interpretaciones que surgen de la literatura americana sobre las maquinarias corruptas de los partidos, cuyo desarrollo se considera directamente relacionado con el acceso a la política de "ex-plebeyos", que no tienen ni recursos económicos, ni civismo.

Los políticos de la ganancia

A la luz del análisis de los diversos casos nacionales, parece que los actores de estas relaciones corruptas de reciprocidad presentan características particulares que les diferencian de los profesionales de la política en sentido tradicional.

En primer lugar, la carrera política se presenta como una vía rápida de movilidad social. Por su utilización de la política como vía rápida de ascenso social, estos políticos corruptos se asemejan a los que Rogon y Lasswell han llamado en sus trabajos sobre los boss de los partidos americanos, "políticos de la ganancia", en otros términos, hombres poco interesados en las vicisitudes de la política nacional, pero impulsados a hacer política para enriquecerse a título personal.

Junto al ascenso social, aparece frecuentemente otra motivación en las carreras de los administradores corrompidos: la relación indisoluble entre las posiciones públicas y las actividades económicas que se ejercen en el seno de una empresa. Para dar un sólo ejemplo, que vale tanto en Francia como en Gran Bretaña, las ocasiones de corrupción se multiplican a consecuencia de esa práctica de las grandes empresas que consiste en contratar a administradores públicos tras su jubilación o en establecer una relación con administradores en activo, como "consultores". La práctica corriente de las "confidencias" permite a altos funcionarios utilizar informaciones obtenidas gracias a sus posiciones en el seno de las instituciones para enriquecerse al mismo tiempo que las empresas que les remuneran.

Tercera observación, la corrupción política engendra la proliferación de personajes que, hablando con propiedad, no pertenecen ni al Estado, ni al Mercado y que, consecuentemente, violan las reglas de uno y otro. Según las teorías más extendidas, los administradores públicos y los empresarios privados deberían actuar, en principio, según motivaciones diferentes: la burocracia debería, según los criterios weberianos, administrar el Estado de manera racional e impersonal; por su parte, los empresarios, deberían buscar el máximo beneficio por medio de la competencia en el mercado. La corrupción origina una especie de mutación genética de los actores, de modo que es difícil situarlos en uno u otro campo.

En las diversas democracias occidentales, la clase política corrompida se compone de varios tipos de actores muchos de los cuales gestionan un poder que no ha sido objeto de ninguna investidura democrática y que escapa a cualquier control burocrático: "boss" al frente de instituciones públicas de gestión, cuya carrera se basa en el ejercicio de cargos de libre disposición de los partidos dentro de los órganos públicos; "cajeros de partidos" que coordinan los gastos y los ingresos ilícitos obtenidos por medio de las relaciones con las instituciones

públicas; "portadores de carteras" que organizan, como emisarios de los políticos más poderosos, las actividades ilícitas en el seno de la administración pública; representantes de profesiones liberales protegidas, arquitectos, ingenieros, abogados o managers, relacionados con la política y la administración, que los partidos sitúan como "hombres de confianza" en las diversas comisiones de atribución y control de los mercados públicos; empleados o dirigentes de la administración pública, que actúan como fieles servidores de sus padrinos políticos. Estos casos diversos pueden ser definidos sintéticamente como "políticos de los negocios", es decir, según Pizzorno, "individuos que conjugan la mediación en asuntos lícitos e ilícitos y, en general, la participación a título personal en la actividad económica, con la mediación política en sentido tradicional". Para este tipo de políticos, el reconocimiento es de carácter clandestino y de naturaleza económica. Su función principal es la mediación entre los diversos participantes en los intercambios ocultos, ya se trate de crear contactos o de facilitar las negociaciones entre los partidos, dos o más, afectados por este intercambio. Sus principales recursos consisten en conocimientos e informaciones "reservadas" que son también recogidas e intercambiadas en los mercados ilícitos.

La imbricación Estado-Mercado caracteriza también a los empresarios que esperan obtener sus éxitos económicos, no de la competencia en el mercado, sino de las relaciones privilegiadas que mantienen con el Estado. Entre los empresarios relacionados con la administración pública, hay carteles más o menos formalizados que incluyen empresas víctimas de extorsión y empresas "protegidas" por algunos hombres políticos o "sponsorizadas" por partidos, e incluso empresas que son propiedad directa (aunque en la mayoría de los casos por medio de testaferros) de agentes públicos. Muchas de estas empresas basan su éxito económico en las relaciones privilegiadas con los responsables de las inversiones públicas, valiéndose de sus "conocimientos" políticos y no de las competencias profesionales o de los recursos de la empresa.

¿Fuerza o debilidad de los partidos corruptos?

En una explicación ya clásica, el politólogo Samuel Huntington estableció una relación estrecha entre el desarrollo de la corrupción política y la debilidad de los partidos durante las fases de expansión de la participación política. La corrupción se desarrollaría en el curso de fases específicas de la modernización, cuando el aumento de la partipación de la población no va a la par con un reforzamiento de las instituciones que, como los partidos, deberían filtrar y canalizar las necesidades colectivas: "cuanto más débiles son los partidos y menos reconocidos, más probable es la emergencia de la corrupción".

En aparente contradicción con esta hipótesis, encontramos la opinión muy extendida según la cual la omnipresencia todopoderosa de los partidos políticos, mecanismos sólidos y muy bien organizados, capaces de controlar la sociedad civil y el sistema económico, favorece la corrupción. En fin, ¿la corrupción política es favorecida por la debilidad o por la fuerza de los partidos políticos?

Fuerza y debilidad no son función solamente del número de electores o de

afiliados. En efecto, la corrupción política se ha desarrollado tanto en el seno de los grandes como de los pequeños partidos, sobre todo si éstos están dotados de un fuerte "poder de coalición". La corrupción política ha aparecido también especialmente difundida tanto en partidos de notables (Francia), como en partidos de electores (España), o en partidos con muchos militantes, como los partidos de masas italianos y alemanes.

Si en el primer caso la corrupción se puede desarrollar para remediar la carencia de canales internos de financiación, en el segundo, los sobornos pueden ser considerados como un medio de atender a las gigantescas exigencias de las burocracias de los partidos.

Según Alessandro Pizzorno, la "fuerza" o la "debilidad" de los partidos puede ser juzgada de forma diferente según se considere el poder de reforzar un sistema de delegación, suministrando ventajas a los diversos representantes o al aparato del partido, o bien el poder de transmitir las aspiraciones de aquellos a quienes se representa. Según nuestras observaciones, las dinámicas de la corrupción política han aparecido estrechamente ligadas con el poder de los partidos para reforzar el sistema de delegación. Usando como coartada el carácter político de las decisiones administrativas, los partidos se han infiltrado en los consejos de administración de las agencias de gestión, utilizando su poder de un modo no siempre lícito, ni colectivamente útil. Los mecanismos más o menos oficiales de control político de las nominaciones de ciertos funcionarios, –quienes sea el *spoil system* americano, la *proporz* alemana o la *lottizzazione* italiana, conducen a un dominio de los partidos sobre la administración pública, creándose así feudos que los partidos y sus amigos pueden utilizar para practicar la corrupción y el clientelismo. La influencia de los partidos, incluso en el exterior de la administración pública, desde los bancos a los medios de comunicación, ha llevado a hablar en numerosos países, de una colonización de la sociedad civil, lo que reduce aún un poco más el potencial de defensa contra la corrupción y la mala administración.

La corrupción de los partidos reduce la capacidad de elaborar programas a largo plazo, de movilizar recursos ideológicos, de distribuir estímulos a la participación, de lograr un consenso en el electorado. En Italia, los partidos políticos, al especializarse en la organización de intercambios corruptos, privilegian las decisiones más rentables en términos de sobornos, frente a las que responden al interés general. Si la política oculta vence sobre la visible, la lógica del grupo prevalece sobre la búsqueda de una participación más amplia. El pragmatismo de los acuerdos bajo mano reemplaza al recurso a la ideología.

Colaboración mayoría/ oposición y los intercambios ocultos

A veces parece que la corrupción política está ligada con la llegada al poder de nuevos partidos. Así en Francia y en España, los partidos acusados de malversaciones son los que entraron en el gobierno después de un largo período de oposición. En los dos casos, los partidos socialistas recién llegados al poder debieron afrontar los problemas de financiación de sus maquinarias burocráticas sin poder contar ni con la benevolencia de los grandes intereses económicos, como

sucede con los partidos conservadores, ni con las cotizaciones de militantes ideológicamente motivados, como ocurría en los partidos comunistas.

Por el contrario, en otros casos, la corrupción política ha sido favorecida por la larga permanencia en el poder de un mismo partido, es decir, por la ausencia de alternancia. En Japón, como en Italia, la inamovilidad del partido en el gobierno parece haber ofrecido, a los liberales en un caso, a los demócratacristianos en el otro, una cierta impunidad tanto desde el punto de vista electoral como desde el punto de vista judicial. En los dos países, los partidos excluidos del poder, convencidos de que nunca podrían alcanzarlo, no han conseguido jugar el papel de oposición coherente que, en el caso británico, se presenta como un instrumento real de control de la corrupción.

En efecto, la ausencia de una verdadera oposición aparece como el denominador común de numeroso casos de corrupción. La difusión de la corrupción política se hace posible por todo un sistema de acuerdos entre mayoría y oposición para el reparto de ciertos beneficios materiales. En la política "visible", el interés de los partidos por aumentar la financiación política ha engendrado leyes cada vez más generosas y permisivas sobre las contribuciones públicas, multiplicando también las asociaciones-pantalla, como los *stiftungen* de los partidos alemanes, esas 10.000 fundaciones en relación oficial con los partidos en el Japón o las sociedades de estudios ligadas oficiosamente a los partidos franceses. En la política ilícita, el acuerdo difuso entre mayoría y oposición permite acuerdos secretos, formas de connivencia, como lo prueban el caso Flick en Alemania o los famosos "comités de negocios" que en Italia reúnen a los hombres políticos de diversas corrientes y, a veces, a altos funcionarios responsables de la gestión de oficinas públicas locales o nacionales.

Gracias a este principio de connivencia entre mayoría y oposición, el sistema de partidos juega un papel de garante de los intercambios corruptos. Según los términos de una demanda de autorización para perseguir judicialmente a un senador de la República italiana, los representantes de los partidos en el seno de la administración pública "tienen un papel de garantes en materia de adjudicación de la contratación, el buen desarrollo de la gestión del contrato, la rapidez de su resolución y todo lo que lleva consigo".

Coste de la política y el clientelismo

La connivencia mayoría/oposición permite aumentar ilegalmente la masa de financiaciones políticas, pero no elimina naturalmente la competencia entre partidos, las facciones y los hombres políticos; esta competencia absorbe una parte de los rercursos obtenidos gracias a los sobornos. En efecto, el coste de la política es una variable que tiene una incidencia sobre la difusión de la corrupción. Le necesidad de dinero de los hombres políticos es creada, en parte, por factores institucionales que influencian el nivel de competencia entre los partidos y en el interior de éstos (por ejemplo, el carácter uninominal o no de los colegios electorales, el voto preferencial, etc.), el número de elecciones (locales y nacionales, primarias, número de instituciones que se deben elegir, etc.). Junto a estas variables institucionales, hay ciertamente otras de carácter más cultural que definen los modelos de organización

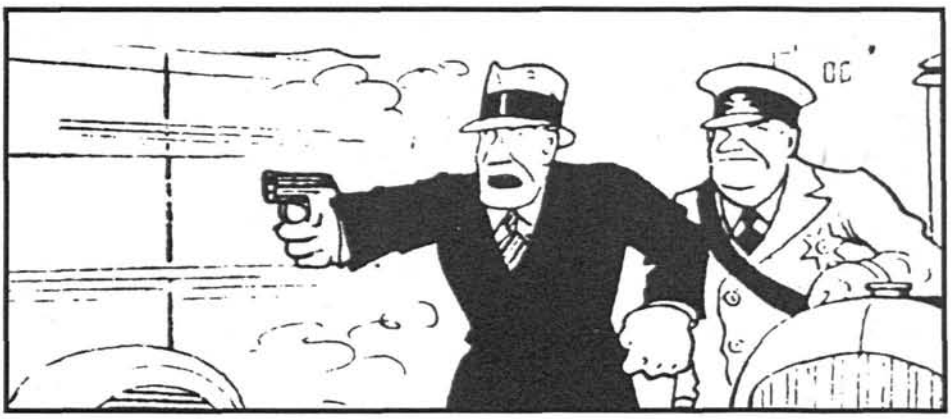
del consenso. En particular, numerosos ejemplos muestran que los costes de la política aumentan allí donde la integración política se basa en la distribución de recursos materiales por medio de los intercambios clientelares.

Cientelismo y corrupción son considerados como fenómenos "vecinos", o incluso difícilmentes separables. Pero hay buenas razones para considerar ambas nociones analíticamente distintas. En primer lugar, hay una diferencia importante en el motor del intercambio: mientras que la corrupción política supone un intercambio de decisiones públicas contra dinero, en el caso del clientelismo, los términos del intercambio son protección contra consenso. En los dos casos, el intercambio es diádico, pero en el caso del clientelismo, podemos resaltar una distinción vertical, es decir, la subordinación de los clientes a un patrón. Si las relaciones patrón/clientes se basan en un intercambio generalizado sobre prestaciones no específicas, en el caso de la corrupción política, por el contrario, el intercambio es de tipo económico y comporta contrapartidas bien definidas e inmediatas.

Estas diferencias tienen también implicaciones en cuanto a los mecanismos de restitución de las prestaciones: en el caso del clientelismo, la restitución está asociada a obligaciones de naturaleza personal y al reconocimiento; en el caso de la corrupción, la restitución proviene más bien de una opción de racionalidad instrumental ligada a la espera de una reiteración del "juego". Existe, en fin, una última diferencia entre los dos fenómenos, en la conciencia de la ilegalidad cometida: mientras que los protagonistas de un intercamnbio corrupto tienen conciencia de realizar actos ilícitos y, por consiguiente, tratan de disimularlos, las relaciones clientelares han sido durante largo tiepo consideradas "normales" y se han desarrollado a la luz del día.

[Este artículo es la conclusión del libro compilado por estos mismos autores, *Demócratie et corruption en Europe*, Editions La Découverte, París, 1995. Lo publicamos en una versión ligeramente editada].

Traducción: Miguel Romero



El "Pacto de Toledo" y el futuro de las pensiones

Jesús Albarracín y Pedro Montes

Las agresiones contra los derechos de los trabajadores no cesan y, así, no ha pasado un año desde que se aprobó la contrarreforma laboral cuando parece llegado otra vez el turno a las pensiones. Pero en esta ocasión, el acoso viene precedido del más amplio consenso, pues el llamado "Pacto de Toledo", en el que se establecen las líneas generales de lo que será el futuro sistema público de protección social, ha sido refrendado por todas las fuerzas políticas parlamentarias.

El consenso

En febrero de 1994, a propuesta del Grupo Parlamentario de CiU (reténgase el promotor), el Congreso de los Diputados decidió crear una Ponencia para elaborar un Informe sobre los problemas estructurales de la Seguridad Social y las reformas necesarias para garantizar el sistema público de pensiones. La creación de dicha Ponencia, a pesar de lo declarado, tenía como objetivo fundamental tratar de evitar que la Seguridad Social adquiera un peso excesivo en el futuro provocando un aumento de los costes laborales de las empresas. En este sentido, la proposición no de ley presentada por CiU era meridianamente clara.

Durante los últimos años, afirmaban, los déficit de la Seguridad Social han sido crecientes, a pesar del aumento de los tipos de cotización que se han producido. La recesión ha agravado esta situación a corto plazo, al provocar un descenso de las cotizaciones y un aumento de las prestaciones sociales, y, a medio y largo plazo, el agravamiento sería aún mayor, a causa del envejecimiento de la población, del aumento del paro y de la estructura financiera de la Seguridad Social, basada en un régimen de reparto. De ahí se concluía con la necesidad de estudiar la reforma de la Seguridad Social "con la finalidad de evitar el incremento del déficit público, como consecuencia de los mayores pagos de prestaciones y en especial de las pensiones por jubilación".

A principios de 1995, los miembros de la Ponencia se reunieron en Toledo y alcanzaron un consenso que no defrauda estos objetivos. El Informe suscrito por todos ellos analiza la evolución de la Seguridad Social en España, haciendo un canto de las sucesivas reformas que han introducido recortes en las pensiones, en particular, la de 1985, y establece que las perspectivas futuras del sistema están determinadas por el aumento del número de pensiones que se verá provocado por el envejecimiento de la población, y el menor ritmo previsible de aumento de las cotizaciones que se corresponde con el hecho de que no todo el crecimiento económico se traduce en creación de empleo. Por tanto, la reforma es ineludible, pero es posible mantener el sistema de protección social si se emprenden las reformas necesarias, y para ello lo mejor es un amplio consenso político.

El sistema se basaría en tres modalidades:

a). una contributiva, de carácter público y obligatorio, financiada con cotizaciones sociales;

b). una no contributiva, para los ciudadanos "que se encuentren en situación de necesidad por razones de edad, enfermedad o cargas familiares", financiada con cargo a los Presupuestos del Estado;

c). un sistema complementario, de naturaleza libre y gestión privada, al que podrán acceder todas aquellas personas que deseen completar las prestaciones del sistema público.

El documento acaba con unas "recomendaciones" sobre las reformas concretas que se han de realizar, de acuerdo con el análisis anterior.

Durante el proceso de discusión en la Comisión de Presupuestos, se introdujeron algunas enmiendas menores que no cambiaron el sentido del Informe. La fuerza del consenso que se había logrado se reflejó nuevamente en el Pleno, donde dicho Informe solo tuvo el voto en contra de un diputado socialista que se equivocó. Y de esta forma, todas las fuerzas políticas parlamentarias, desde la derecha hasta la izquierda, se han puesto de acuerdo en que el futuro sistema de protección social responderá a los criterios pactados en Toledo. Las condiciones para un nuevo ataque a los trabajadores están servidas.

Agitación y propaganda

El "Pacto de Toledo" hay que situarlo en el marco de la ofensiva contra los sistemas públicos de pensiones que se ha desarrollado durante los últimos años. La ofensiva se inició en 1990, momento en el que la OCDE diagnosticó que los países industriales no podrían pagar las pensiones en el futuro como consecuencia del envejecimiento de sus poblaciones. A principios de 1994, el Ministro de Economía se hacía eco de ese argumento, afirmando que los que en ese momento acudían al mercado de trabajo no tenían aseguradas las pensiones. El problema se zanjó porque, dada la proximidad de las elecciones europeas, no era conveniente abordar un tema tan sensible. Pero después han sido los técnicos del FMI y del BM en la asamblea celebrada en Madrid en otoño de 1994, conocidos santones de la economía y múltiples columnistas económicos los que han insistido en el asunto. De esta forma, la creencia de que el sistema actual de pensiones no se podrá mantener en el futuro se ha convertido casi en un dogma, probando una vez más que, en política, una mentira repetida convenientemente acaba por parecer una verdad. En este contexto, no es extraño que todas las fuerzas parlamentarias hayan ratificado la nueva verdad revelada en el Congreso.

Hay que comenzar dejando claro que no es cierto que la Seguridad Social esté crisis debido a su enorme déficit. En 1993, dicho déficit ascendía sólo a 96.000 millones de pesetas, una cifra que tanto en términos de PIB como del déficit público total es absolutamente insignificante. Por otra parte, con independencia de que no es admisible la compartimentación de las cuentas del Estado, dicho déficit no se debe al sistema de pensiones, que todos los años ha presentado superávits, sino a los gastos de protección al desempleo, que han crecido enormemente como consecuencia del alto nivel de paro existente y de la explosión que ha sufrido durante los últimos años.

Desde el punto de vista de la financiación de las prestaciones sociales, no se necesita pues reformar el sistema, sino luchar contra el paro poniendo en práctica una política económica que genere puestos de trabajo. Aún con el alto nivel de paro actual las prestaciones sociales se pueden financiar perfectamente y una reducción drástica del desempleo provocaría incluso un superávit de cierta consideración.

Pero si en estos momentos el sistema de protección social es sostenible, pensar que en el futuro está amenazado es algo que repugna a la razón. Nunca se ha alcanzado un nivel de bienestar tan alto y nunca se ha dispuesto de tanto recursos - avances tecnológicos, mejoras de la productividad, disponibilidad de mano de obra- para ser utilizados en cubrir las necesidades materiales y culturales de toda la población. Después de todo, si en 1980, por ejemplo, se podían garantizar las pensiones, ¿cómo es posible que no se puedan pagar dentro de treinta años cuando, con una modesta previsión del 2,7% anual, el PIB real se habrá triplicado?

Es un hecho indiscutible que la población está envejeciendo: según el Instituto de Demografía, del CSIC, en 1994, la población mayor de 65 años representa el 21,8% de la comprendida entre 15 y 65 años, mientras que, en el año 2001, será del 24,8% y, en el 2026, del 33,4%. Estos porcentajes son esenciales, puesto que el problema bien enfocado se reduce a transferir una parte de la renta generada por la población en edad laboral a la población que la ha traspasado. Pero de ello no se infiere que el sistema de protección social sea insostenible, puesto que existe un enorme crecimiento potencial del producto social. El alto nivel de paro, la baja tasa de actividad masculina, la necesidad de integrar plenamente a la mujer al mundo laboral y el crecimiento de la productividad inducido por la ciencia y la técnica proporcionan la posibilidad de cubrir sin problema alguno las necesidades de todos los ciudadanos. A partir de ahora habrá que dedicar más gastos en términos absolutos para garantizar los medios de vida de los jubilados, pero en términos del PIB no tendrían que aumentar ni en el inmediato futuro ni a largo plazo si se activan los muchos recursos ociosos disponibles.

En nuestro país, los gastos dedicados a la pensiones en términos del PIB son inferiores a la media de la Unión Europea y aunque se sumaran a ellos el seguro de paro y el subsidio de desempleo seguiría sin superarse dicha media. En 1994, los gastos de protección social destinados a pensiones y cobertura de paro representaron el 13,2% del PIB, porcentaje que puede admitirse como la base del llamado problema de las pensiones.

En el inmediato futuro, los resortes para cambiar las condiciones económicas son limitados, reduciéndose el problema de las pensiones a lograr un moderado crecimiento del PIB. Bajo las hipótesis bien poco estridentes de que la productividad aumente desde ahora hasta el año 2001 al 2% anual (2,4% en la pasada década) y el empleo al 1,4%, (lo que haría disminuir la tasa de paro al 20% en el año 2001) el PIB crecería a una tasa anual del 3,4%. Este aumento seria suficiente para reducir hasta el 12,5 el porcentaje que las prestaciones sociales representan sobre el PIB, incluyendo una mejora del poder adquisitivo de éstas del 2% y manteniendo la actual cobertura del paro. Con estas cifras, difícilmente puede afirmarse que las pensiones son insostenibles por el momento.

A largo plazo, no pueden admitirse restricciones a la hora de diseñar el futuro de la sociedad. Treinta años, por ejemplo, es un plazo suficiente para que se acometan los cambios necesarios que permitan garantizar a todos los ciudadanos

una vida digna, a pesar del sensible envejecimiento que registrará la población. Las posibilidades productivas son enormes y mas que un problema de recursos para satisfacer las necesidades materiales de todos, la cuestión que tiene planteada la sociedad para entonces es plasmar un modelo social que, además de cubrir dichas necesidades, atienda los aspectos personales y culturales y preste especial atención al equilibrio ecológico. Es decir, más que crecer de modo indiscriminado según las actuales pautas de producción y consumo, se ha de tender a lograr un desarrollo ecológicamente sostenible, contando con que existen recursos suficientes para atender con holgura las necesidades básicas y para procurar un elevado bienestar al conjunto de la población.

Para el año 2026, último para el que se dispone de proyecciones de población, deberían ser objetivos ineludibles reducir la tasa de paro al 4%, elevar la tasa de actividad masculina y femenina, siquiera al nivel medio de la Unión Europea en 1992, y moderar el crecimiento de la productividad hasta el 1%, para impulsar una reducción significativa de la jornada laboral. Tales objetivos se traducirían en un crecimiento anual acumulativo del PIB del 2.8%. En el 2026, bajo estas hipótesis, el PIB se habría multiplicado por 2,4 sobre el de 1994 y la renta por habitante por 2,3, tras crecer a una tasa anual del 2,6%. Las prestaciones sociales en pensiones y desempleo, admitiendo una mejora real del 2% anual y la cobertura al 100% de los parados, representarían el 12,7% del PIB, por debajo nuevamente del 13,2% actual.

Es evidente que tampoco a medio plazo existe problema alguno para sostener las pensiones, a condición de que la sociedad no recorra el camino disparatado de mantener un paro masivo, excluir a la mujer y destrozar la naturaleza, en cuyo caso lo que resultaría insostenible no es el sistema de protección social sino la estabilidad de la sociedad misma.

La estrategia

Estos simples, pero contundentes datos, demuestran que no existen limitaciones para garantizar el futuro de las pensiones. La principal amenaza que se cierne sobre ellas no es el envejecimiento de la población ni que haya pretendidas dificultades de financiación, que no deja de ser un problema técnico una vez que se decide en términos políticos las transferencias que han de producirse entre los sectores de la población. Están amenazadas porque las pensiones son el próximo objetivo de la política económica neoliberal.

La crisis económica que se desencadenó a principios de la década de los setenta está originada por un descenso estructural de la tasa de beneficio debido a las especiales condiciones que se fueron creando durante las dos décadas de expansión posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Elevar la tasa de beneficio exigía actuar en muchos frentes. Había que reestructurar el aparato productivo con cargo al empleo para que desaparecieran las empresas y sectores no rentables y aumentara la productividad global. Se deberían reducir los salarios reales para disminuir la presión que ejercen sobre los costes. Era preciso profundizar en la regresividad de los sistemas fiscales, desgravando los beneficios y las rentas altas y haciendo recaer la mayor parte de la recaudación impositiva sobre los salarios y el consumo. La actividad laboral se debía desregular, para que los empresarios

pudieran rentabilizar al máximo la utilización de la fuerza de trabajo y para que se crearan las condiciones necesarias para que los salarios fueran flexibles a la baja en el futuro. Los salarios indirectos (el seguro de desempleo, la sanidad, etc) y los diferidos (pensiones) deberían disminuir, por una parte, porque son partidas que entran en el cálculo de la tasa de beneficio y, por otra, porque la crisis económica y la regresividad fiscal determinarían una agudización de los déficits públicos y éstas eran las partidas que el capital consideró mas adecuadas para disminuirlos. En un contexto de tasa de beneficio baja, no era posible encontrar inversiones rentables suficientes y, por ello, el Estado debería disminuir su participación en la economía, devolviendo al mercado todas aquellas actividades que pudieran abrir un campo propicio para el capital privado.

En consecuencia, el pleno empleo, el crecimiento de los salarios, la mejora de los derechos laborales y la generalización de la protección social, los tres rasgos básicos del "estado del bienestar" implantado en los países industriales durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, han sido cuestionados y degradados en lo posible. Y todo ello debía facilitarse con la contraofensiva ideológica adecuada, en la que el neoliberalismo ha desempeñado un papel clave: el mercado es el único sistema eficiente de organización social, la competitividad es el objetivo supremo de todas las economías, la culpa de la crisis la tienen los salarios y los altos gastos sociales, el "estado del bienestar" es inviable. En fin, todas las patrañas que constituyen en la actualidad un lugar común entre muchos sectores sociales, incluidos algunos que se reclaman de la izquierda.

El Gobierno del PSOE ha sido uno de los ejecutores más fieles del proyecto neoliberal y, sin duda, ha conseguido que avance considerablemente durante los últimos años. El paro masivo se ha convertido en un dato estructural. La ofensiva sobre la culpabilización de los salarios ha sido constante y, desde los primeros años ochenta, su crecimiento ha sido inferior a la productividad, por lo que la renta se ha redistribuido acusadamente en contra de los asalariados. El IVA, un impuesto regresivo donde los haya porque penaliza más cuanto mas bajo sea el nivel de renta, se ha convertido en el eje del sistema fiscal que, por otra parte, tiene una segunda fuente de financiación en los gravámenes sobre las rentas del trabajo. Las pensiones ya fueron recortadas en 1985, e igual suerte han corrido las prestaciones por desempleo. La contrarreforma del mercado de trabajo, una de las ofensivas mas recientes, ha aumentado la precariedad del empleo, ha deteriorado considerablemente las condiciones laborales y ha debilitado sensiblemente las filas de la clase obrera. Y así es como, con lógica inexorable, solo unos pocos meses después de que se aprobara dicha contrarreforma, le ha llegado el turno a las pensiones.

La reforma del sistema público de pensiones es, por tanto, un escalón más de la estrategia que el neoliberalismo ha diseñado para que el capitalismo remonte la crisis económica y, con la misma, se pretende alcanzar varios objetivos. Por un lado, el déficit público es uno de los más altos de la Unión Europea y una reducción de los gastos del sistema de protección social podría contribuir poderosamente a su disminución, justamente por la vía que más le interesa al capital. Por otro, una parte importante de las prestaciones se financia con cuotas a la Seguridad Social y una reducción de las mismas contribuiría a elevar la tasa de

beneficio por la vía de la disminución de costes. Finalmente, el descenso de la tasa de beneficio que se ha producido con la crisis hace difícil encontrar inversiones suficientemente rentables, de modo que una privatización parcial del sistema de pensiones puede constituir un buen negocio para el capital privado.

La táctica

El documento aprobado por el Congreso de los Diputados es un buen ejemplo de esta estrategia neoliberal. En su parte analítica, están presentes todas las falacias que se han señalado sobre la crisis de la Seguridad Social, las consecuencias del envejecimiento de la población, etc. Bastaría con esto solo para rechazarle, pues es una pieza importante de la campaña de agitación y propaganda que ha desencadenado el neoliberalismo para sentar las bases ideológicas del futuro ataque a las pensiones. Pero el documento contiene, además, y como aspecto fundamental y más grave, una serie de "recomendaciones" que prefiguran las medidas legislativas que se adoptarán en el futuro sobre la base del consenso obtenido. Las criticas a esas recomendaciones pueden concentrase en cuatro cuestiones clave.

a) La compartimentación de las cuentas públicas

Los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social no se pueden considerar compartimentos estancos en un tratamiento coherente de lo público. Por consiguiente, los superávits del sistema contributivo deben revertir al Presupuesto del Estado y, de la misma forma, los déficits de aquél deben ser financiados por éste. Ello es así porque el sector público financia el conjunto de las prestaciones sociales y los servicios públicos con un conjunto de impuestos, cotizaciones sociales e ingresos patrimoniales. Cualquier imputación de algunos ingresos a algunos gastos es arbitraria porque el superávit o déficit público no es imputable aisladamente a ninguno de sus componentes. De no concebirse así, bastaría con cambiar la estructura de los ingresos para que aparecieran déficits en algunos organismos, servicios o prestaciones que no se corresponderían con la realidad. Por ejemplo, bastaría bajar las cotizaciones y subir el IVA, dejando la recaudación y la presión fiscal inalterada, para que se redujese el superávit del sistema contributivo o, incluso, para que apareciera un déficit.

Pero el objetivo del Informe no es mantener la coherencia de las cuentas públicas, sino evitar, en una primera etapa, que los aumentos de las prestaciones o la reducción de las cotizaciones se traduzcan en un aumento del déficit público. Y, en el futuro, contando con las tendencias de los ingresos y gastos y las política económica propugnada, recortar las pensiones.

Para conseguirlo, la recomendación 1 establece la separación de las fuentes de financiación según la naturaleza de la protección, de modo que el sistema contributivo se financiará sólo con cotizaciones y el no contributivo con impuestos. El sistema contributivo deberá presentar presupuestos equilibrados, es decir, las cotizaciones deberán ser suficientes para la cobertura de las prestaciones y la Seguridad Social no podrá acudir a los Presupuestos Generales del Estado para financiar eventuales déficits. Este equilibrio presupuestario se debe producir en el conjunto del ciclo económico y no año por año. Durante las recuperaciones económicas, el crecimiento

del empleo induce un aumento de los ingresos por cotizaciones que provocará un superávit en el sistema contributivo y, durante las recesiones, ocurre lo contrario. Por ello, los superávits que se obtengan en los momentos de bonanza se utilizarán para comprar fondos públicos y constituir reservas, que se utilizarán para financiar los déficits que se produzcan en los momentos bajos del ciclo, de modo que no sea necesario recurrir a los Presupuestos del Estado. De esta forma, se "consolida" el sistema público de pensiones sobre la base de que se pagarán las prestaciones que sea posible pagar con las cotizaciones que se recauden.

La separación de las fuentes de financiación que recomienda el Informe abre el camino para que, en el futuro, las vicisitudes que atraviese el sistema de pensiones contributivas no afecten al déficit público. Si las cotizaciones se reducen "para facilitar la creación de puestos de trabajo", la disminución de los ingresos hará que, tarde o temprano, haya que reducir también la cuantía de las prestaciones. Si el número de prestaciones crece a causa del envejecimiento de la población, el aumento de los gastos subsiguiente no podrá ser financiado, lo que "obligará" también a reducir la cuantía de las pensiones para que el sistema esté en equilibrio. De esta forma, el sistema contributivo no tendría ningún problema de financiación porque se rebajaría la cuantía de las pensiones hasta que así fuera.

b) La reducción de las cotizaciones

En la recomendación 8, "la Ponencia hace suya las recomendaciones contenidas en el Libro Blanco de Delors, relativas a la reducción de las cotizaciones sociales como elemento dinamizador del empleo". Es verdad que tal reducción queda condicionada al mantenimiento del equilibrio financiero del sistema, pero los actuales superávits del mismo pueden ser utilizados como un argumento para reducirlas, puesto que el sistema no está amenazado. Cabe recordar que el Presupuesto de 1995 recogió una reducción del tipo de cotización y un aumento del IVA y que CiU ha declarado que se debe profundizar por esa vía. En la actualidad, las prestaciones podrían soportar la disminución de los ingresos que se produciría pero, en el futuro, la capacidad de financiación del sistema estaría seriamente debilitada. Y a cambio del deterioro en las prestaciones que ello conllevaría, es más que dudoso que dicha reducción favoreciera la creación de empleo, porque su crecimiento depende de otros muchos factores: situación económica coyuntural, evolución de la demanda, perspectivas para el futuro, cotización de la peseta, etc. Además, las cotizaciones son una parte del salario (son un salario diferido) y una reducción de las mismas compensada por un aumento del IVA, por ejemplo, supondría una disminución de los costes que pagan los empresarios y un aumento de los impuestos indirectos que pagan los consumidores, perjudicando por partida doble a los trabajadores. Se cumpliría, así, otro de los objetivos de las reformas: la disminución de los costes laborales y el aumento de la tasa de beneficio.

c) La ampliación del período de cálculo de las pensiones

En la recomendación 9, bajo el epígrafe de "equidad y contributividad del sistema" se sientan las bases para una inmediata reducción de la cuantía de las pensiones y se abre el camino para que las reducciones continúen en el futuro. Dicha recomendación propone que, a partir de 1996, las prestaciones contributivas guarden una mayor relación con el esfuerzo de cotización realizado, lo que implica

ampliar el número de años a tener en cuenta en el cálculo de la pensión. Como se recordará, antes de 1985 se consideraban los salarios de los dos últimos años de la vida activa del trabajador, la reforma de 1985 amplió el período de cómputo a ocho años y ahora se abre el camino para que las ampliaciones continúen en el futuro. Se empezará pasando de los 8 años actuales a los 10 ó los 15 pero, si lo requiere el equilibrio del sistema, se puede acabar calculando la cuantía de la pensión según los salarios percibidos por el trabajador desde que era joven hasta que se jubile. Dado que los salarios tienden a crecer con la edad, como consecuencia de la inflación, de los complementos de antigüedad y el progreso profesional, cualquier ampliación del período de cálculo significa reducir la cuantía de la pensión para todos los trabajadores. Pero el problema es mucho mayor para todos aquellos que pasen una parte de su vida laboral en el paro -un situación bastante normal, potenciada con la precariedad de los contratos-, puesto que habrán cotizado un menor número de años y, por tanto, tendrán derecho a una pensión más reducida que los que hayan tenido la suerte de contar con un empleo estable. De esta forma, la mayor proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones se logrará progresivamente reducir los gastos en prestaciones sociales.

d) El sistema complementario privado

Como se ha dicho, el tercer escalón del sistema de protección social es un sistema privado de pensiones al que pueden acudir todas aquellas personas que estén dispuestas a ahorrar hoy más para obtener mayores rentas en el futuro. No habría nada que objetar si tal sistema se concibiera realmente como complementario, esto es, si el sistema público garantizara unas pensiones suficientes y que se correspondieran con el salario de los trabajadores. Pero ya se ha visto que la reducción de las cotizaciones, la ampliación del período de cálculo y la imposibilidad de que los déficits del sistema contributivo se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado provocarán un deterioro de las prestaciones en el futuro. Los trabajadores se verán forzados a cotizar adicionalmente al sistema privado de pensiones, con lo que el efecto resultante será equivalente a una reducción de los salarios netos. Y el capital privado podrá disponer de enormes fondos aportados por los trabajadores. Ya es sorprendente que en un acuerdo político para garantizar el sistema público de pensiones se potencie y se otorgue tanta relevancia al sistema privado.

La resistencia

Así pues, dejando aparte el tendencioso análisis en que se sustentan las recomendaciones del Informe, todo son beneficios para el capital a costa del bienestar y la seguridad de la mayoría de la población: los costes laborales se reducirán porque lo harán las cotizaciones sociales, el déficit público no se verá afectado por dicha reducción o por el aumento de la población susceptible de ser protegida porque se rebajarán las prestaciones tanto como sea necesario, y los trabajadores se verán obligados a ahorrar más hoy si quieren garantizarse el futuro, acumulando unos fondos que serán manejados por el sector privado.

A partir de ahora, las potenciales agresiones que encierran las recomendaciones comenzarán a tomar cuerpo legislativo y cada una de ellas tendrá el respaldo del

consenso logrado en Congreso de los Diputados. El terreno esta preparado tras el "Pacto" y la campaña permanente del déficit público. Se defenderá como un dogma que "el sistema público de pensiones está amenazado a causa del envejecimiento de la población", se reducirán las cotizaciones "para crear empleo", se ampliará el período de cómputo para conseguir "una mayor equidad y contributividad del sistema", se rebajarán las prestaciones "para garantizar el sistema público", etc y en cada nueva medida se aducirá que "ya se había pactado". La resistencia será, pues, mucho mas difícil.

Pero no es imposible. Es verdad que la ideología que sustenta el "Pacto de Toledo" ha calado en amplios sectores de la población, e, incluso, de la izquierda, pero una cosa son las ideas generales y otra los ataques concretos. El "Pacto de Toledo" ha pasado sin pena ni gloria entre la indiferencia de la población, en parte, porque no existe conciencia de lo que supone. Pero una rebaja de las cotizaciones y, sobre todo, una ampliación del período de cálculo son mucho mas comprensibles y es en este terreno en el que hay que practicar la resistencia. Porque es necesario detener la ofensiva si se quiere evitar que el neoliberalismo arrase otra conquista histórica de los trabajadores.

HOLA, KIKI...
¡SUELTA EL ROLLO,
¿QUÉ HAY DE
NUEVO?!...
¡MUCHAS
COSAS!
pyright, 1937, by Chicago

Más allá del voto

De la participación ciudadana a las democracias participativas

Tomás R. Villasante

1. Las experiencias de participación ciudadana no estan generalizadas, pero existen en suficiente número como para demostrar su viabilidad. Las experiencias de democracias participativas son más escasas y hoy significan más un reto para nuestras formas democráticas que una realidad suficientemente contrastada (aunque haya algunas experiencias muy interesantes).

En el año 1992 desde la Red CIMS hicimos una investigación en equipo sobre los municipios que presentaban las experiencias más interesantes del Estado, como ejemplos reales de participación ciudadana. Encontramos una serie de municipios pequeños en las diferentes Comunidades autónomas que han hecho experiencias de más de 10 años muy participativas, y en cambio en ciudades sólo pudimos recoger experiencias sectoriales de cierto interés. En total de los 60 municipios inicialmente señalados, nos quedamos con 20 que parecían más interesante para estudiar a fondo, y de ellos solo de algunos podemos decir que se acerquen a formas de democracia participativa. De todas formas no se trata de hacer aquí juicios sobre tales experiencias, sino más bien tratar de aprender de los mejores resultados en cada caso.

Donde hay ejemplos más interesantes sobre democracias participativas es en Latinoamérica. Y aunque evidentemente las condiciones socio-económicas son muy distintas de las nuestras, hay algunos elementos democráticos que sí pueden ser incorporados a nuestras prácticas locales. El Presupuesto participativo de Porto Alegre, que ya está en su tercera legislatura, o el nuevo planeamiento participativo de Recife, son ejemplos concretos de las formas democráticas en algunas capitales de Estado de Brasil. La autogestión en municipios periféricos de Lima, como Villa El Salvador, son otra muestra de 20 años de persistencia de algunos procesos democráticos locales. Los gobiernos de las capitales de Uruguay (Montevideo), de Paraguay (Asunción), y de Venezuela (Caracas), han adoptado mecanismos de descentralización y participación ciudadana muy pragmáticos y con buenos resultados. En Montevideo recientemete han vuelto a ganar las elecciones, y en otros ciudades latinoamericanas (de cientos de miles y millones de habitantes) estas iniciativas empiezan a asentarse.

En Europa, en cambio, hay más teorizaciones y más programas sobre participación pero menos realizaciones. La conferencia europea que realizamos en 1992 en Córdoba así nos lo demostró, y las sucesivos seminarios a que he podido asistir no ofrecen más que algunas promesas interesantes. La participación de 2.000 entidades en el Gran Londres fué disuelta con este organismo por la señora Thatcher en su día, aunque luego le costara el puesto por insistir en su ofensiva conservadora con los impuestos *poll tax*. En Italia la descentralización de elecciones hasta los barrios acabó por desmovilizar a los movimientos ciudadanos, como lo demostró M. Caciagli. En los años 90 coaliciones amplias (rojiverdes)

han ganado las alcaldias de Roma y Lisboa, y los Verdes con apoyo de la izquierda gobiernan la Región de Nord-Pas de Calais, en Francia. En estos programas se plantean medidas de participación ciudadana, pero hay que esperar a que en la práctica funcionen realmente para sacar experiencias.

2. Desde los movimientos ciudadanos, en los años 80, se ha estado un tanto al margen de los cambios profundos que se estaban operando en el mundo y en cada país. Nosotros hemos asistido a muchas dicusiones de Reglamentos de participación dentro de una estrategia que hacía de ello el centro de la participación ciudadana: la Reglamentitis. Tantas horas y tantas reuniones se han consumido en conseguir algunos Reglamentos, que se ha descuidado el cambio generacional y de valores que se ha estado operando al mismo tiempo. Y como ahora no hay apenas con qué rellenar los Reglamentos, pues se recurre a la Subvencionitis, la otra tarea que lleva la mayor parte del tiempo de muchas asociaciones. Claro que hacen falta Reglamentos y Subvenciones, pero para cuando hay actividades que lo justifican. Las entrevistas que hemos hecho con sectores de base nos muestran el cambio de opinión que merecen hoy muchas asociaciones, y la participación ciudadana que practican, y la situan más cerca del clientelismo y hacer carrera política que de otra cosa.

Preocupados por el tema, desde distintas asociaciones nos han llamado para solucionar el que la gente ya no quiera participar en asociaciones, y el porqué los organismos de participación ciudadana ni tienen presupuesto ni apenas competencias. Las asociaciones, incluso estas más preocupadas, caen tambien en la Participacionitis en "mi" asociación, pues se definen a si mismos por su sacrifio por lo demás, por su conducta ejemplar, y además pretenden que los demás del barrio o del sector tengan que hacer lo mismo. Y si no son tachados de insolidarios, individualistas, dentro de la moda actual de echar culpas fuera ("la culpa la tiene la gente"). El problema no es de la gente, que siempre ha tenido conductas muy ambivalentes, sino de quienes no sabemos acertar con los métodos y las propuestas adecuadas. Asustamos a la gente con "militancias" y "sacrifios" más exagerados de lo que son realmente. Si la gente participa es porque le apetece, y sino no lo hacemos ninguno.

3. En los años 90 registramos un cambio en lo asociativo y en lo generacional. Desde finales de los años 80 se viene incrementando el número de asociciones de todo tipo, si bien se trata de asociaciones pequeñas y a veces en condiciones muy precarias. Esto es asi porque bastantes nacen al calor de las subvenciones, y tambien porque los más jóvenes ya no se ven en las asociaciones ocupadas por sus mayores. Los datos de los que disponemos nos hablan de un cambio generacional del tipo del que se produjo entre los años 60 y 70. Algunos síntomas actuales son el movimiento de objeción a la mili, las movilizaciones por el 0,7% del PIB para los paises empobrecidos, o la realización del Foro Alternativo contra el FMI y el Banco Mundial. En todos estos casos, y también en los colectivos ecologistas de todas las ciudades y muchos pueblos, radios libres, okupas, etc., la presencia juvenil es muy importante, y marca otra forma de entender la movilización, la participación y la democracia.

Paralelamente a estas movilizaciones de jóvenes más comprometidos, aparece la oferta del "voluntariado" desde las instituciones públicas y desde algunas grandes organizaciones asistenciales. Al igual que ocurrió en los años 80 con las asociaciones de consumidores, que aparecieron en la Constitución y en los apoyos oficiales por delante de los propios vecinos asociados (que tenian una presencia más real), ahora la moda del voluntariado trata de ignorar que los voluntarios comprometidos ya están en asociaciones concretas. Desde las instituciones se prefiere ayudar al voluntariado individual que presta un servicio asistencial, pero que no se asocia para plantearse qué tareas integrales habria que realizar en tal localidad o en tal sector de actividad. Por eso hoy más que nunca tienen gran importancia las Plataformas que se crean ante temas concretos que agrupan a asociaciones diversas, y que empiezan a proliferar por nuestra geografia. En algún caso tales Plataformas dan lugar a Foros de reflexión y debate sobre el sentido autónomo de las movimientos de base para la construcción de las democracias participativas.

4. En algunas ciudades hemos retomado prácticas de "investigación-acción-participativa" (IAP) precisamente desde los movimientos sociales, y en algún caso con el respaldo municipal. En Córdoba, Madrid, Vigo, Salamanca, etc. empezamos a sacar conclusiones que van más allá de aplicar una simple técnica tal como venía haciéndose. Hacemos un auto-diagnóstico, vecinos y técnicos conjuntamente, que va más allá del Reglamento y que retoma los problemas de la gente de la calle. El punto crucial es escuchar lo que esta pasando, los cambios que se están produciendo, porque no se trata de adaptar a la gente a la participación sino la participación a la gente. Tiene que ser el voluntariado asociado y sus expertos los que se impliquen en los nuevos fenómenos emergentes de nuestra sociedad.

No nos quedamos en el auto-diagnóstico I-A-P, sino que se hace una propuesta de actuación que se va a negociar con todos los grupos implicados, tanto local como sectorialmente. La idea es promover Plataformas unitarias por temas concretos que sean multiplicadores, y que cada año movilicen a la gente que se sienta atraida por cuestiones concretas, que se han planteado colectivamente. Y así ir mejorando la calidad de vida del sector o la localidad. Los locales, los técnicos, los Reglamentos deben adaptarse a estas actividades que cada año deben renovarse desde la base, ser construídas democráticamente con la mayor participación social posible. Esto implica tambien que las ciencias sociales y el derecho deben ser más reflexivos y prácticos, construirse desde los propios procesos participados.

5. Se trata de salir del rincón donde la democracia del voto ha metido a la participación ciudadana. Esta ha quedado reducida a una concejalía, casi sin presupuesto, para entretener a algunas asociaciones con algunas subvenciones. Lo que realmente le interesa al poder local son los sondeos de opinión que le diagnostiquen cómo ganar las siguientes elecciones, y la presentación mediática (TV, radio, prensa) de las realizaciones institucionales. La democracia representativa se dirige al tipo medio de ciudadano, aunque éste sea abstracto y no asociado, y pretende reproducir sus valores, de los que se considera representante

legítimo, sacralizar el rito de la votación secreta como única fuente democrática. Se trata de gestionar bien según los valores dominantes en la sociedad. Gestionar honradamente lo que hay no es poco, pero no es necesariamente transformador.

La democracia directa casi ha desaparecido como criterio de legitimidad, aunque haya referencias a ella en la propia Constitución. Sólo en algunas asociaciones se defiende el "campo del tercer sistema" o las redes de movimientos sociales con otros valores que no son ni los gubernamentales del Estado, ni los lucrativos del Mercado. Para una lógica transformadora de la realidad no es aceptable una democracia sólo concebida en términos representativos de lo existente, es necesario entender la democracia como juego de iniciativas y controles mutuos entre los distintos poderes: no sólo legislativo, ejecutivo, judicial, sino tambien movimientos sociales, opinión pública, críticas técnicas, etc. que pueden aportar, desde sus campos específicos, otros valores y criterios que dinamicen la sociedad.

La democracia participativa es reflexiva con las representaciones del voto individual, pero tambien con las representaciones asociativas y con todo tipo de iniciativas constructivas. De tal manera que pretende basarse en distintos procesos, todos ellos democráticos, que dinamicen la sociedad hacia mejores calidades de vida. Cada proceso, cada programación, debe ser en sí mismo democrático, es decir contar con la participación de representantes, asociados y expertos, que negocien las iniciativas de cada cual y se controlen mutuamente. La democracia pasa asi de ser la representación de un poder incuestionable de una mayoría pasiva, a un instrumento dinamizador de los procesos sociales. La garantía de que los cambios que se estan produciendo responden a un debate vivo que aumenta las probabilidades de eficiencia al servicio de todos. Lo que se garantiza no es sólo la foto fija de la sociedad en un momento, sino cómo se construye con la máxima participación y críticas autorizadas el futuro común de los ciudadanos.

6. De los reglamentos a los procesos instituyentes. Es decir de lo instituído como normativa mínima (que supera aquellos otros hábitos del poder de ser discrecional y caprichoso), hacia procesos para renovar con participación ciudadana los mínimos instituídos, haciéndose instituyentes de la democracia de forma renovada. Es cierto que los Reglamentos pueden objetivar la participación rescatándola del paternalismo y/o del clientelismo a que estabamos acostumbrados. Pero avanzar con la democracia no se puede quedar en lo instituído sino pasar a la construcción de Procesos instituyentes. Con regularidades reglamentadas y con procesos (del tipo de la investigación-acción-participativa, programaciones-alternativas-integrales) que de forma sistemática nos habitúen a otro estilo de hacer las cosas, la política.

No es tanto que los vecinos o las asociaciones puedan acudir a los técnicos, concejales y alcalde, sino que sean éstos quienes acudan a los barrios y a las formas descentralizadas, de manera rotativa. Porque la democracia participativa incluye una buena dosis de pedagogía. Pedagogía para los técnicos y políticos que deben escuchar pacientemente los problemas concretos de las gentes sencillas, cualitativa y directamente, y no solo por encuestas (cuantitativamente). Pedagogía popular porque desde cada problema local surge un debate globalizado, que nos sitúa en reflexiones y críticas de las estrategias más generales que se pueden

adoptar. Los Procesos instituyentes son negociaciones prácticas entre los ciudadanos, los expertos y los políticos representantes, donde los tres tipos de actores sociales han de aprender los unos de los otros.

7. De las privatizaciones a las economías Sociales. El debate entre estatalizaciones y privatizaciones se suele saldar analizando cada servicio y cada circunstancia según los criterios de uno u otro sistema. Pero habitualmete no se debate que lo público no solo es lo estatal, sino que existe lo público social (asociaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, etc.) sector de creciente importancia, con bases descentralizadas, con voluntariado, con buena experiencia y dedicación en muchos casos. Desde el Derecho muchas de estas formas podrían calificarse como privatizaciones hacia entidades sociales (cooperativas, sindicatos, etc). Por todo esto hay que reintroducir la Economía Social como salida preferente, frente a las privatizaciones (con ánimo de lucro) y las municipa-lizaciones (con riesgo de burocratización e ineficacia).

Al decidir en cada coyuntura quién y cómo se gestiona cada servicio, no sólo vale el criterio de eficacia mercantil, sino tambien el de eficiencia social. Habrá que dar preferencia a crear empleos en una sociedad con tanto paro, redistribuir el tiempo de trabajo, flexibilizar los horarios no sólo en favor de los trabajadores sino tambien de los usuarios del servicio, etc. Las mujeres italianas de izquierda han planteano la necesidad de un nuevo reparto del tiempo en lo doméstico y lo local, que debe ser un indicador fundamental de la calidad de los servicios, y de su adecuación flexible según las necesidades de los distintos colectivos implicados. Esto significa participación y negociación democrática entre todas las partes implicadas.

8. De la cultura virtual a las *movidas* con-vivenciales. Cada vez más la cultura se define a traves de los grandes medios audio-visuales, sigularmente la TV. De tal manera que las propias fiestas locales van camino de ser espectáculos virtuales, para ser vistos, más que implicaciones con-vivenciales que se construyen por los propios sujetos. No hay porqué estar en contra de los grandes sucesos, identidades o sloganes que permiten a una ciudad mostrar sus propias señas distintivas. El problema, una vez más, es cómo se construye tal identificación social, si es fruto de un proceso democrático ciudadano, o si es dependiente de la importación de una moda. Cuando se da la oportunidad a la cantera de jóvenes valores, tarde o temprano acaban apareciendo *movidas* locales, más o menos críticas, que dinamizan las identificaciones de los sectores populares.

Lo que pasa es que no hay que tener prisas electorales para que estas formas democrático-culturales vayan cuajando. Se trata sin duda de procesos generacionales, y por lo tanto de 10 ó 15 años. La cultura democrática no es sólo grandes temas políticos, tambien está en las emociones cotidianas, en la música, las fiestas, lo doméstico, etc. Se asienta mejor si se va practicando desde la infancia en las casas, y luego en los colegios, y en las pandillas, los trabajos, etc. Para esto hace falta una buena dotación de locales, de monitores y de medios de difusión muy descentralizados, en cada barrio, que puedan ser auto-gestionados o co-gestionados entre las asociaciones y las instituciones. Más que subvenciones en

metálico, que haya que justificar más o menos clientelarmente, lo que se necesitan son medios a disposición de la creatividad popular.

9. De la fiscalidad a los presupuestos participados. Uno de los grandes problemas locales está en las grandes tentaciones de fraude que se presentan a cada responsable político que maneja el presupuesto. Ante esto cabe actuar con distintos grados de fiscalización sobre las conductas particulares, al tiempo que se hacen llamadas a la ética particular de cada persona responsable. Pero la mejor forma de actuar sobre la ética particular de cada cual es refozar la ética social. O sea que la ciudadanía se haya acostumbrado a saber controlar lo que son los bienes públicos, y para ello tienen que dejar de ser algo muy alejado e inaccesible, y pasar a ser algo más comprensible y controlable. Si los Presupuestos Municipales, por ejemplo, se debaten descen-tralizadamente, como en varias de las grandes ciudades brasileñas donde gobierna la izquierda, entonces se reducen drásticamente las tentaciones de poder actuar con ellos discrecionalmente.

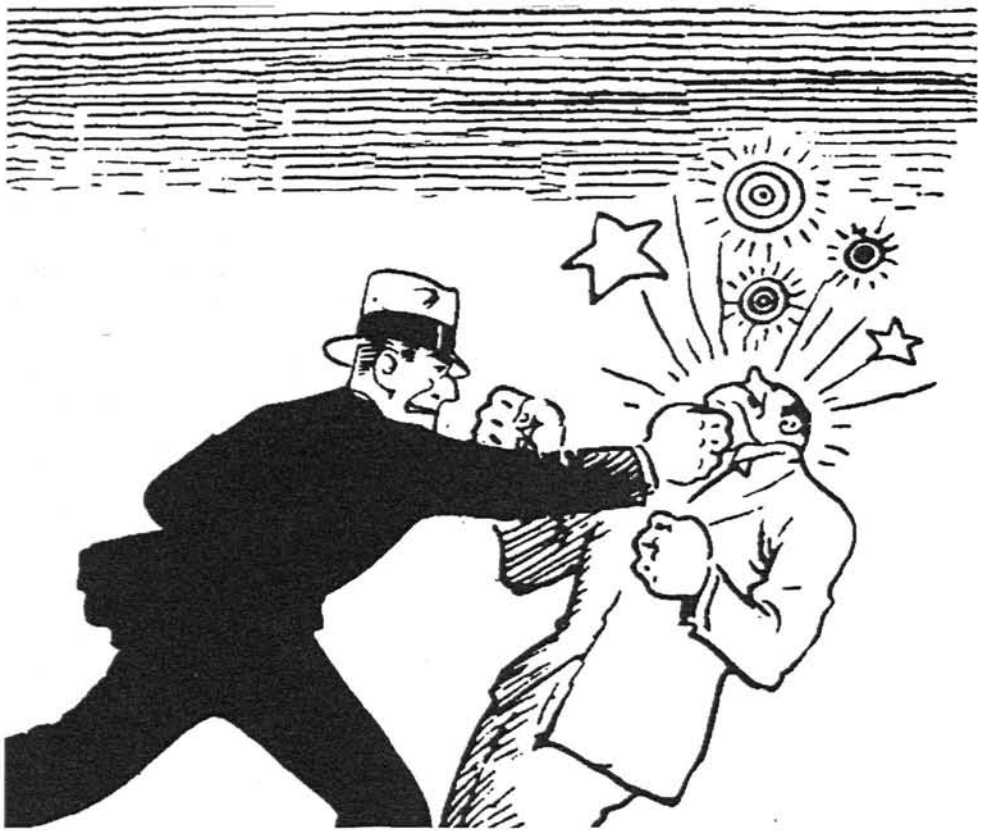
Tanto los presupuestos, los planes o las programaciones participadas, por más descentralizadamente que se discutan con las asociaciones, sindicatos, etc. al final han de confluir en una programación unitaria local. Para ello debe existir una Cámara, Foro o Consejo, donde se puedan resumir y coordinar las distintas prioridades presupuestarias. Los Consejos Económicos, Ecológicos y Sociales, como cámara donde se programe participadamente, por los representantes, asociaciones y expertos, los presupuestos pueden ser los órganos fundamentales de la democracia participativa. Ahora están de moda los Planes Estratégicos para cada ciudad, para hacer la definición de objetivos a medio y largo plazo. Con la participación de expertos lanzan un slogan publicitario, y tratan de convencer a los empresarios y financieros para que inviertan en tal ciudad. Si esta participación se reduce sólo a expertos y los objetivos son sólo la competitividad empresarial, entonces no se está haciendo democracia participativa, aunque empresarios y gobiernos hayan comprendido que la técnica puede ser buena.

10. Del desarrollo sostenible al reequilibrio sustentable. Se utiliza mucho ahora el concepto de *desarrollo* sostenible, cuando se ha demostrado la inviabilidad ecológica a medio y largo plazo del crecimiento sostenido. Pero la ambigüedad del concepto *desarrollo* hace que sea necesario precisarlo con indicadores concretos. Desde luego no valen indicadores como el Producto Interior Bruto y semejantes, porque su incremento en determinadas actividades puede ser un signo incluso de empeoramiento la calidad de vida. Así que necesitamos indicadores de calidad ambiental, de servicios públicos, de salud, de asociacionismo, de vida cultural, de reducción de la polaridad social, etc. Los índices de calidad de vida de una ciudad, como en el caso de Seattle (USA), pueden construirse participadamente, lo cual promueve un debate ciudadano de primera importancia sobre los objetivos de la ciudad. Se trata de Reequilibrar unos sectores para una mejor calidad y eficiencia energética, con otros que despilfarran y degradan la calidad de vida (y que deben ir siendo sustituídos).

Lo *sostenible* es un criterio que tiene en cuenta a las futuras generaciones (cosa que antes no se hacía) y con bastante técnica ecológica, mientras que *sustentable*

está más vinculado con las culturas locales, y con tecnologías adaptables a cada situación. Porque el problema no solo es intercalar tecnologías apropiadas en los ciclos naturales, sino también en los ciclos culturales de cada población. Sustentar una tecnología por una comunidad o una ciudad es acostumbrarse a usarla habitualmente, no sólo sostenerla con un decreto o con medidas técnicas. El reciclado de residuos sólidos, por ejemplo, tiene que basarse tanto en la separación en origen como en los medios de recogida y de recilaje. El transporte público y el no motorizado está sustentado en Copenhague o en Curitiba por la gente, pero en otras ciudades necesita un proceso pedagógico, además de la mejora técnica de los servicios. Lo mismo ocurre con la rehabilitación de barrios antiguos y degradados, con las nuevas formas de empleo, o con la lucha contra la droga.

11. Para evitar toda apariencia de decálogo, este punto es una invitación a cuestionar y debatir las anteriores afirmaciones, muy escuetas y apretadas para que el artículo no fuera demasiado largo y pesado. Pero si se quiere ampliar la discusión, y conocer los fundamentos de lo que aquí se propone, entonces lo mejor es consultar mi último libro: "Las democracias participativas, de la participación ciudadana a las alternativas de sociedad" (que este año ha editado HOAC). En él se aportan tanto experiencias de ciudades y pueblos concretos, como métodos para la construcción de indicadores, procesos de investigación-acción-participativa actualizados, o razonamientos sobre las redes de movimientos sociales y las democracias participativas y sus horizontes. En cualquier caso el debate debería continuar ante todo sobre experiencias en la práctica con nuevos métodos para estos objetivos, más que por discusiones con pretensiones filosóficas sobre estos temas.



La sociedad ante los cambios en las telecomunicaciones

Javier Navascués

"La sociedad al servicio de las nuevas tecnologías", que diría Antonio Estevan **/1**. En poco más de un año las telecomunicaciones han experimentado una vertiginosa sucesión de cambios que las han puesto de actualidad. En junio de 1993 la Comisión Europea acordó establecer el objetivo de liberalizar antes de 1998 los servicios básicos telefónicos y las redes de telecomunicaciones, que hasta ahora se mantienen en monopolio en prácticamente toda Europa. El Estado español, junto a otros cuatro países, consiguió una moratoria suplementaria de hasta cinco años para dichas liberalizaciones.

A finales del 93 se presentó ante la Comisión Europea, para su aprobación, el Libro Blanco sobre "Crecimiento Competitividad y Empleo", el conocido Libro Blanco de Delors, en el cual se sitúa el objetivo de inversión en redes transeuropeas de telecomunicaciones —las autopistas de la información-, en un nivel (150.000 millones de ecus) equivalente al que plantea para la construcción de redes transeuropeas de transporte y energía (250.000 millones de ecus), o a los proyectos sobre medio ambiente (174.000 millones ecus), eso si, su financiación se confía a la iniciativa privada, o a los estados nacionales, pues la Comisión solo acordó financiar con 20.000 millones de ecus el conjunto de las actividades anteriores.

En mayo de 1994, se presentó un informe -el informe Bangemann- a la cumbre de la Unión Europea de Corfú de junio, que fue aprobado, y en el cual se establecían los criterios para desarrollar la "Sociedad de la Información en Europa". Este informe se pronunciaba por una más amplia liberalización de las telecomunicaciones **/2**. Ya mas recientemente, el pasado 28 de noviembre, se presentó el proyecto de Libro Verde sobre la Liberalización de Infraestructuras de Telecomunicaciones, aprobado por la Comisión, y en período de consulta a partir del mes de Febrero.

En el ámbito del Estado español, el Consejo de Ministros de 7 de octubre pasado estableció las líneas de la política de telecomunicaciones hasta 1998, que fueron presentadas, por el propio Felipe González, como el medio de implantar en el Estado español las Autopistas de la Información. No obstante las únicas acciones del Estado en dicha política se reducen a la liberalización/mercantilización de los servicios públicos. Entre estos planes está el objetivo de liberalizar el servicio telefónico, y las redes, antes de 1998, de acuerdo con las propuestas del Libro Verde,

1/ "La Sociedad al servicio de las nuevas tecnologías "artículo publicado en la revista *Alfoz* y que resume un informe sobre "La calidad de vida y las Telecomunicaciones en la Región de Madrid 1990-2000" elaborado por A. Estevan y finalizado en septiembre de 1991.

2 / "Draft, Green paper on the liberalisation of telecommunications infrastructure and cable television networks. Part II. A common approach to the provision of infrastructure for telecommunications in the European Union" DG XIII/ DG for competition, Brussels, 28 November, 1994.

renunciando por tanto al período suplementario de cinco años. Se pone en marcha la ruptura del monopolio telefónico mas importante después de la de los terminales y los datos, la de la telefonía móvil, que incluye una liberalización parcial de sus redes, y se prepara la legislación correspondiente a la televisión por cable. En esa marcha hacia la ruptura del monopolio, el acontecimiento socialmente más señalado ha sido la modificación de la estructura de las tarifas de Telefónica. Por último, en este repaso doméstico de acontecimientos, no podemos dejar de destacar la espectacularidad de la presencia de Telefónica en el terreno internacional, especialmente en Sudamérica, que también se corresponde con movimientos similares de otras operadoras.

Ante estos cambios, pretendemos ahondar en dos cuestiones básicas. ¿Cuáles son las principales justificaciones de los cambios? y ¿cuales serían sus verdaderas consecuencias sociales?.

Las razones de los cambios en las telecomunicaciones

En las diversas fases en que se han ido introduciendo los mecanismos de mercado en las telecomunicaciones, los gobiernos europeos han utilizado diversas justificaciones, tecnológicas, tarifarias, de unidad europea, que pasamos a comentar.

Las justificaciones tecnológicas tienen que ver con que, las nuevas tecnologías, al ser mas flexibles y capaces que las antiguas, permiten la creación e integración de redes y servicios que en el pasado eran mas difíciles de ofrecer o combinar. Así los satélites permiten coberturas mundiales sin los tremendos gastos de las infraestructuras terrestres. O, también, la voz, la imagen y los datos pueden integrarse en una misma red, si esta es digital. De lo cual los liberalizadores deducen que redes dedicadas a objetivos parciales, pueden ser impulsadas por la iniciativa privada, y se pueden combinar con las grandes redes públicas.

No obstante, el que sea posible la combinación de las redes de propósito global con las parciales, no es una justificación suficiente de la necesidad de la ruptura de los monopolios, y la derivada sustitución de los objetivos de Servicio Público por los de negocio, pues en la era de las redes integradas lo lógico sería que los nuevos servicios se integraran y crecieran armoniosamente sobre la red existente y no crear absurdas duplicicaciones de redes. Sólo será suficiente la justificación tecnológica si aceptamos, como hacen los liberalizadores, que la iniciativa pública debe ser la excepción, de forma que si es posible la iniciativa privada, a ella hay que darle la prioridad.

La justificación de la liberalización en base a una posible reducción de las tarifas no puede ser acogida por la mayoría de los ciudadanos, cuando las consecuencias están siendo una subida de las llamadas locales, de mayor consumo doméstico para abaratar las de larga distancia, de mayor consumo empresarial.

En relación con el argumento de favorecer la liberalización para permitir la creación de redes intraeuropeas, debemos decir que desde el momento en que se ha profundizado la liberalización de las telecomunicaciones han aparecido multitud de acuerdos intereuropeos e incluso intercontinentales, que con seguridad

ayudarán a su armonización, pero dado que los actores principales en dichos acuerdos son los actuales monopolios o ex-monopolios, el argumento difícilmente ayuda a la justificación del proyecto liberalizador.

No obstante la última justificación de los cambios, y la que parece tener mas éxito, en el momento en que la UE pretende poner en marcha el proyecto liberalizador de mas amplios objetivos -mayor que el de los EEUU **/3**- ha sido una justificación importada de la administración Clinton: el fin de los monopolios ayuda a la implantación de las autopistas de la información **/4**.

En el Libro Verde de las infraestructuras, citado antes, se plantea que "la apertura en la provisión de infraestructuras,... está en el corazón de la transición hacia la Sociedad de la Información en la UE **/5**". Pero el argumento, continuando con la cita anterior, no tiene más apoyos que los de la continuación de las medidas liberalizadoras precedentes: "La liberalización de las infraestructuras reforzará los beneficios de la liberalización de los servicios". Pero no se trata de que tenga lógica, necesita sólo una cierta credibilidad, el mercado la tiene, y poner en marcha la capacidad de soñar de las poblaciones. Con la "Sociedad de la Información" el mito está servido.

Las autopistas de la información

Muy resumidamente, las ideas básicas que se manejan sobre dichas "autopistas" consisten en:

- Las autopistas de la información constituirían una red única por la que circularían todos los servicios actuales de telefonía, televisión, sonido, datos y otra gran cantidad de nuevos servicios y combinaciones de éstos, conectando a la inmensa mayoría de la población -no sólo a los edificios/viviendas, pues serían comunicaciones personales- mediante un único medio de conexión. De esta forma los propagandistas de las autopistas de la información nos presentan un futuro donde cada uno tendría acceso a una densísima red, que conectaría entre sí todos los medios de telecomunicación e informáticos. Los centros del saber, bibliotecas, museos, centros de investigación, de enseñanza, de trabajo, de entretenimiento, comercios, medios de comunicación, organizaciones de todo tipo y todos los hogares y personas, se encuentren donde se encuentren.

- Para construirlas sería necesario invertir cantidades astronómicas en nuevas tecnologías de conmutación y de trasmisión, llevando terminales de fibra óptica hasta todos los hogares y utilizando de forma masiva las comunicaciones móviles y los enlaces por satélite.

- Según sus impulsores, las ventajas de embarcarse en este reto serían inmensas, impulso de una gran cantidad de nuevos servicios de información, equipos, redes y

3/ En las 6 regiones en que se divide el territorio de los EEUU -cada uno casi tan extenso como toda Europa-, las Baby Bell, tienen un monopolio telefónico y de red casi total.

4/ Autopistas de la Información. Símil utilizado por Al Gore vicepresidente de los EEUU para describir nuevas redes de telecomunicaciones que superan la capacidad de las actuales (simples carreteras, o caminos) para trasmitir una gran cantidad de información y que ocuparán en la sociedad del futuro el papel económico que jugaron los ferrocarriles a finales del siglo pasado y comienzos de éste

5/ Libro Verde citado pág. 109 *Proposed Positions - Towards the Information Society*

terminales, que darían lugar a nuevas y fantásticas actividades generadoras del empleo futuro. En EEUU estiman 1,5 millones de empleos inducidos hasta el año 2000, en Japón 2,4 millones de puestos hasta el año 2010. En Europa el plan Delors, con una actitud a la defensiva, considera las autopistas de la información como un medio para defender la competitividad de Europa frente al reto americano-japonés, y de este modo mas que un impulsor del empleo, lo considera como un medio para no perder más del empleo existente.

Hacia la sociedad de la información de la mano del mercado

Esta es aproximadamente la primera frase del llamado Informe Bangemann **/6** y resume muy sintéticamente los objetivos del mismo.

En el contenido de dicho Informe encuentra el Consejo Europeo la principal justificación para la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones. Así vemos que en la introducción del citado Libro Verde, se recoge: "En las conclusiones del Informe del Grupo Bangemann y de la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de Corfú se consideró que, ... la revolución tecnológica en el área de la Sociedad de la Información ... será dirigida por la tecnología y las fuerzas del mercado **/7**".

Por lo dicho, tiene interés detenerse en el Informe pues proporciona una clara exposición de las tendencias y justificaciones de las políticas que piensan impulsar en Europa. Sus ideas básicas son:

- Europa debe responder conjuntamente al reto americano-japonés si quiere alcanzar los beneficios de la Sociedad de la Información y evitar lo que sucedería en caso contrario: ser invadidos por proveedores de redes, equipos y servicios no europeos.
- La construcción de la Sociedad de la Información creará gran número de puestos de trabajo, sin concretar.
- Esta es una revolución impulsada por el mercado. Hay que acabar con los monopolios. El progreso tecnológico y la evolución del mercado obliga a que Europa deba romper con políticas que pertenecen a una época anterior a la revolución de la información. En esta orientación hay que acelerar el proceso de liberalización, abriendo a la competencia todas las infraestructuras y servicios hoy en monopolio y eliminando las obligaciones políticas de los operadores (reajuste de tarifas y reparto de la obligación del servicio igualitario y universal). La apertura del mercado europeo debe tener como contrapartida la apertura de otras regiones del mundo.

6/ El informe Bangemann es un encargo realizado por el Consejo Europeo en dic. del 93 a un grupo de expertos europeos del mundo de los operadores de telecomunicaciones (el presidente de Telefónica), de los fabricantes de equipos de telecomunicaciones e informática (los presidentes de Olivetti y Bull), las administraciones (entre ellos la administración británica y el alcalde de Barcelona), de la banca (S G de Bélgica), las cadenas de televisión (Canal Plus) y otros, coordinados por el Sr. Bangemann de Alemania, actual comisario de telecomunicaciones en la UE. "Europa y la sociedad global de la información. Recomendaciones al Consejo Europeo" Bruselas 26 de mayo 1994.

7/ Pág 9, de la versión del Libro Verde de liberalización de las infraestructuras ya citado.

- La financiación de la Sociedad de la Información sería una tarea del sector privado, siendo las medidas anteriores la condición para que el sector privado financie los nuevos servicios e infraestructuras.

No es difícil, en un mundo en el que la mayoría de las noticias que recibimos son negativas, dejarse atrapar por lo que se presenta como una solución, arropada por los más poderosos avances tecnológicos, a las penurias que atraviesa la situación económica. No obstante es necesario bajar los pies al suelo, para distinguir entre lo que hay de oferta de nuevos servicios, y lo que hay de preparación de una nueva ofensiva neoliberal de imprevisibles consecuencias.

Una vez descritos los que serían los proyectos de los verdaderos patrones europeos de las telecomunicaciones, vamos a someter a crítica algunos de sus aspectos mas importantes.

Nuevos servicios ¿para todos?

En relación con los nuevos servicios no es difícil poner límites a ese mundo de imágenes, datos y voz, universalmente interconectado. Por mucho que bajen los costes, ¿cómo se puede pasar del actual consumo de servicios telefónicos, a su ampliación vertiginosa para servicios inevitablemente más caros?. ¿Cuánto cuesta una videoconferencia?. ¿Cuál es el coste del envío de grandes cantidades de información desde un museo o centro de enseñanza?, ¿Qué gasto doméstico sería necesario para la adquisición de los terminales que dieran acceso a las nuevas redes?.

Es evidente que el coste podría ser asumido por determinados usuarios, empresas o instituciones, muchos de los cuales ya disponen en la actualidad de dichas posibilidades, pero la cuestión es si se trata de servicios con capacidad de universalización similar a los telefónicos –que es lo que dicen pretender los propagandistas de las autopistas de la información–, o de algo muchísimo mas selectivo y reducido.

También conviene considerar el acceso a nuevos servicios de las diferentes áreas geográficas, pues aquellas con alto nivel de concentración de usuarios no tienen el mismo interés económico que otras con una mayor dispersión.

Pero como ya nos han avisado que la llamada Sociedad de la Información viene de la mano de las leyes del mercado, tampoco nos cabe duda de que las dos preguntas anteriores tienen ya una respuesta. Sólo quienes puedan pagar los costes de las inversiones necesarias tendrán acceso a sus servicios. Las zonas de menor interés económico tardarán mas en recibir dichos servicio, les resultará más caro o no los recibirán en absoluto.

Realmente son muchos los analistas que dudan del tirón efectivo de los nuevos servicios, y en general del principal de ellos, la distribución de TV por cable, de cualquier tipo, que ya cuenta con graves dificultades para su expansión, pues existen ofertas previas mas baratas. De este modo la utilización de la relación entre multimedia y liberalización sería mas bien una argucia para liberalizar la telefonía, mas que para impulsar el resto de los servicios, dado que hasta ahora y mientras no se demuestre lo contrario la telefonía es el servicio de mayor éxito social **/8**.

8/ En el caso de Telefónica en el ejercicio 93, los ingresos por telefonía, separando transmisión de datos e imagen, servicio móvil, y publicidad, representaron el 86'9% de sus ingresos totales.

Por último estos cambios no solo afectan a los nuevos servicios sino que la liberalización de la telefonía y de sus redes, plantea serias interrogantes sobre el mantenimiento de su universalidad. La obligación del Servicio Universal sólo puede provenir de una exigencia administrativa que se le imponga a la entidad que ofrezca el servicio y es difícil imponer que en áreas de poco interés, o ya cubiertas por el monopolio anterior, los nuevos operadores tengan también la obligación de dar servicio universal a precios accesibles.

Los efectos sobre los servicios básicos

El informe Bangemann, como expresión de la máxima coherencia liberalizadora, se pronunció por la opción de que la responsabilidad del Servicio Telefónico Universal en un área determinada se repartiera entre todos los operadores con licencia en dicha área. El Libro Verde de las infraestructuras, propone que esa compartición se realice mediante la creación de un fondo para cubrir las obligaciones del Servicio Universal, de modo que los operadores, o proveedores de servicios que atiendan a los usuarios no rentables, reciban de dicho fondo, y aquellos que no lo hagan, y el Estado en caso necesario, contribuyan al mismo de modo proporcional a su participación **/9**. Formalmente este mecanismo podría resolver la cuestión, pero conociendo cómo los gobiernos neoliberales intentan reducir al máximo sus gastos sociales, y una vez que los primeros operadores se privatizan, y entran nuevos en función del negocio, no tenemos ninguna duda de que todos van a buscar la eliminación de los usuarios no rentables, por mecanismos de mercado, o sea, de precios.

Frente a esta introducción de los nuevos servicios, de la mano de las fuerzas del mercado, con sus casi seguras consecuencias de dualización social, y las repercusiones negativas para los servicios básicos, ¿no sería mas útil socialmente, que estos servicios se extendieran por medio de la intervención pública, como lo hicieron en su momento los servicios telefónicos? ¿Estaría el servicio telefónico como está si hubiera sido tratado con mecanismos de mercado y libre competencia desde su origen? ¿Qué papel ha jugado en la extensión del servicio telefónico la oferta de servicios locales baratos? –recordemos que en sus orígenes, y todavía lo sigue siendo en los EEUU, las llamadas locales eran gratuítas–.

Servicios más baratos ¿para quién?

Por otra parte las modificaciones de tarifas telefónicas, que se están produciendo al calor de la progresiva reducción de los monopolios en todos los países, y en el Estado español más pronunciadamente desde el año pasado, tienden a modificar los ingresos aumentando el coste de las llamadas urbanas (un 30% en Telefónica), reduciendo las interurbanas (un 34%), las internacionales y las líneas de datos. Estos cambios cargan especialmente al usuario/a doméstico en beneficio del empresarial.

9/ Pág 114 del Libro Verde citado anteriormente "Proposed Positions. Safeguarding and developping universal service"

La razón esgrimida es la de aproximar las tarifas a los costes, con el argumento de que hay importantes subvenciones cruzadas (de las tarifas de larga distancia a las de corta), lo cual seguramente es cierto, pero no por eso aceptable como justificación de la política tarifaria. En primer lugar porque "las subvenciones cruzadas" de las zonas urbanas a las rurales son la justificación misma del monopolio (el Servicio Público Universal). Además éstas son una práctica habitual en cualquier empresa (no todas las actividades son directamente productivas), no exenta de intereses prácticos (si el número de líneas telefónicas por habitante es muy pequeño el servicio pierde también una buena parte de su interés económico). Por otra parte hay que señalar que los nuevos servicios, no siempre rentables, han sido puestos en marcha y subvencionados por el servicio telefónico básico.

Además nadie se molesta en demostrar los costes reales. El único criterio válido para las operadoras telefónicas, al establecer las nuevas tarifas, es el de la comparación con las de la posible competencia. Esta se introduce primero en las llamadas internacionales de todo tipo, en las comunicaciones de datos, en las comunicaciones internas de las empresas, y en las comunicaciones móviles y en todas ellas la competencia tira a la baja. O sea, donde hay mas competencia las tarifas bajan. Y hay mas competencia donde hay mas negocio, en definitiva ¡que paguen menos los más ricos!

Ciertamente las medidas de liberalización pretenden reducir globalmente los precios de los servicios, provocando un aumento general de la productividad en las operadoras telefónicas. Este proceso ha tenido una primera experiencia europea en el Reino Unido donde la administración impuso a British Telecom, junto con la obligación del Servicio Universal, tarifas con una variación media menor que el incremento del IPC, en porcentajes que en el período 84 al 89 eran un 3% menores que el IPC, un 4'5 % menores entre el 89 y 91, un 6'25 % menores entre el 91 y 93 y pretenden ser del 7'5% menores que el IPC en el período 93- 97 **/10**. No obstante a pesar de este proceso de reducción media de las tarifas, que ha supuesto tremendas agresiones al empleo y las condiciones de trabajo de los trabajadores/as de la BT, las tarifas urbanas en el Reino Unido en el período 82-93 han subido en un 147% mientras que las de larga distancia han bajado un 34%.

Con lo cual, la frase de más arriba podría leerse ¡que los abonados domésticos y los trabajadores de las telecomunicaciones ayuden a que los ricos paguen menos!

Por lo comentado anteriormente ya podemos hacernos una idea de que los proyectos liberalizadores en las telecomunicaciones están especialmente puestos al servicio de las necesidades del capital, pero es necesario que apreciemos que las telecomunicaciones están jugando ya, y lo harán mas en el futuro, un papel económico creciente.

La cada vez mayor integración a escala planetaria de los procesos productivos, la agudización de la competencia y el desarrollo imparable de los mercados financieros, están favoreciendo una cada vez mayor importancia económica de las telecomunicaciones. El que cada vez mas artículos tengan sus componentes producidos en lugares situados a gran distancia -en muchas ocasiones para

10/ "La liberalización de las telecomunicaciones" MOPTMA 1993

conseguir un artículo final sus partes han dado varias vueltas al globo- requiere una gran seguridad en la recepción de los mismas, y esto hace de las telecomunicaciones una herramienta imprescindible. Los mecanismos de reducción del volumen de los almacenes (los procesos "just in time"), que requieren un conocimiento preciso de las necesidades en el momento de producirse, y del envío de las mercancías en el menor tiempo posible, son otros de los responsables del aumento de las telecomunicaciones.

Estas, son las razones de un crecimiento económico de las telecomunicaciones superior a la media. En el informe elaborado por la UIT (institución especializada de las Naciones Unidas para las telecomunicaciones), sobre el estado mundial de las mismas, destacaba que en el período 91-92 los ingresos mundiales medios en concepto de servicios crecieron un 8%, elevándose a un 9% en el mercado de equipos, mientras que la tasa media mundial de crecimiento anual en el período 80-91 había sido del 1'2% **/11**. Por otra parte, el citado Libro Verde de las infraestructuras, recoge un pronóstico de crecimiento en las telecomunicaciones de un 7% anual durante las próximas 2 décadas mientras la estimación es de un 2-4% en el crecimiento general equivalente **/12**. Además en este crecimiento de las telecomunicaciones es el incremento de las llamadas telefónicas internacionales el que más destaca **/13**.

¿Menos monopolio o nuevos oligopolios mundiales a través del mercado?

Los impulsores del proceso liberalizador, y los autores del informe Bangemann entre ellos, sitúan a los monopolios como algo superado por la tecnología y la evolución del mercado, apostando por un desarrollo de las telecomunicaciones sin más orientación que la que dicte el propio mercado, repudiando en consecuencia cualquier obligación política.

Desde una óptica simple de repudio hacia entes, los monopolios, que aparecen con un poder excesivo, sea este en la forma de organizaciones ministeriales (los PTT) o de empresas semipúblicas como Telefónica, la población se ve tentada a apoyar dichos planteamientos con la esperanza de que el fin de los monopolios representará el fin de dicho poder, y en consecuencia que se llegará a una situación mas favorable a las demandas de la población.

Pero nada mas lejos de la realidad. La tendencia es atender mejor al que más pague y no a todos. En lo de la reducción del poder nos vamos a encontrar con un nuevo engaño, pues no sólo no van a tener menos poder sino que éste, en el caso de los operadores exmonopolistas de los países mas desarrollados, tiene muchas posibilidades de ampliarse a escala planetaria.

En los países donde la liberalización se ha producido antes, EEUU, Japón y Reino Unido, y a pesar de que la intervención gubernamental ha estado espe-

11/ Publicado en el Anuario del diario *El Mundo*-1994, que cita fuentes del Banco Mundial.

12/ Pág 41 Libro Verde citado "The Employment Impact. Europe needs a dynamic telecommunications sector"

13/ La UIT, en el informe citado anteriormente, señala que durante los 10 años comprendidos entre 1983 y 1992 el número de minutos de las llamadas telefónicas internacionales mundiales ha crecido con una tasa anual media del 15'7%.

cialmente dirigida a reducir el poder de los antiguos monopolios, prohibiéndoles entrar en determinadas actividades, la situación, después de más de una década, es que éstos siguen siendo los operadores más fuertes en sus respectivos países con gran diferencia respecto a los que les siguen, aumentando considerablemente sus beneficios. Pero no sólo se ha producido este fenómeno sino que además, todos estos operadores, ya convertidos en sociedades anónimas (ATT, BT, NTT), han buscado en el exterior la compensación de los mercados que perdían en sus países originarios, con lo cual se han lanzado a una loca carrera internacional de copo del mercado mundial de las telecomunicaciones.

Como respuesta a este proceso, se ha desatado una reacción de concentración del resto de los monopolios, que se ven amenazados por las anteriores iniciativas, y respondiendo a la naturaleza mundial de la actividad de las telecomunicaciones. Este es el caso de FT y DBT en Francia y Alemania respectivamente, y de las operadoras sueca, suiza, holandesa y española, con la constitución de Unisource. A su vez estos grupos y BT forman parte de otros grupos más amplios con operadoras norteamericanas y asiáticas.

A esta orientación de alianza internacional de los exmonopolios fuertes, se une un proceso de desmantelamiento y absorción de los monopolios de países menos desarrollados. En un gran número de países dependientes, especialmente en aquellos que se han plegado primero a las orientaciones liberalizadoras del FMI/GATT/BM, bajo la doble presión de la deuda externa y la de modernizar sus economías e integrarlas mas profundamente en el mercado mundial, han desmantelado sus monopolios nacionales entregándolos al capital multinacional, en muchos casos representado por operadoras monopolistas de los países desarrollados. En América Latina, en países de Europa oriental, y en otras zonas se están privatizando los anteriores PTT, vendiendo en condiciones de saldo el patrimonio de dichos Estados.

La combinación de ambos procesos, nos hace prever un futuro donde en lugar de los más de 200 monopolios estatales existentes hasta hace poco en el mundo, nos podemos encontrar en pocos años (no muchos más de 10) con 4 ó 5 grupos mundiales que controlen la inmensa mayoría de la actividad mundial de las telecomunicaciones, eso sí, rodeados de un enjambre de minioperadoras, que darán la apariencia de un mercado regido por la "libre competencia", pero que en realidad estará controlado por la planificación capitalista de unas pocas operadoras multinacionales.

¿Crecimiento del empleo?

Como se ha visto anteriormente es un argumento recurrente en los impulsores de la liberalización de las telecomunicaciones, sean estos estadounidenses, japoneses o europeos el presentar su orientación como una oportunidad para crear empleo directo o inducido. *El Libro Verde de las Infraestructuras*, hace un buen número de comentarios sobre el empleo, utilizando un sin fin de referencias, perfectamente seleccionadas para favorecer sus propósitos liberalizadores, pero el primer anuncio de estudio específico sobre el impacto de sus decisiones en el empleo, se hace después de la aprobación del LVI **/14**, por lo cual es

imposible contrastar sus opiniones. Veamos pues, como están influyendo los cambios en el empleo, utilizando otras fuentes.

Según el informe citado de la UIT, y referido a las operadoras principales, el empleo medio a nivel mundial habría caído un 0'6% anual entre los años 83 y 92, pero esta tasa encubre lo que ha sido una dispersión notable en las tendencias, pues mientras en muchos países crecía el empleo como en Alemania o España, con tasas del 1'4 y del 0'5% respectivamente, en otros se mantenían al nivel medio, Francia -0'7%, pero otros sufrían un descenso vertiginoso, Japón -2'4, EEUU -3'7 y el Reino Unido -4%. En estos tres países, que representan la vanguardia del proceso liberalizador, y que en el año 83 sumaban un total de 1.450.000 empleados -el 32% del empleo de todas las operadoras del mundo- se han perdido 361.000 empleos hasta el año 92 -un 25% de sus efectivos-.

En relación con Telefónica, a fines del pasado año, la dirección ha establecido un Plan de empleo 95-99 que prevé segregar a empresas filiales las actividades liberalizadas, además pretende bajar la edad de jubilación a los 58 años y ofrecer incentivos para promover bajas. Todo ello para reducir el empleo en 14.000 los 75.000 puestos actuales.

Bien es verdad que la situación del empleo en las telecomunicaciones no puede apreciarse mirando solo hacia los antiguos monopolios. Habría que tener en cuenta también a los nuevos operadores y a la industria. A pesar de no disponer de estadísticas similares a las manejadas anteriormente, sí que es interesante considerar que mientras BT pierde unos 76.000 empleos en el período 83-92 (informe UIT) su principal competidor, Mercury, en el 92 no empleaba más que a 10.000 personas, y muy recientemente ha sido anunciado un plan de Mercury de reducir drásticamente dicha cifra. En general es posible estimar que la creación de empleo en las nuevas operadoras es siempre menor a la destrucción producida en las que les precedieron, pues las nuevas se incorporan a la actividad en condiciones de máxima productividad y a su vez provocan agudos incrementos de la productividad general en la anterior operadora, que al realizar una actividad superior y emplear a mucha más gente, provocan una destrucción de empleo neto.

Una idea de la situación entre los fabricantes de equipos, en un entorno liberalizado, nos la puede dar saber que los tres fabricantes principales del Reino Unido (GEC, Racal y BICC) en el año 92 disminuyeron su empleo total en 14.900 efectivos (un 9%) **/15**. Este proceso se debe en gran medida al abandono de la compra de equipos de producción nacional, y la búsqueda de los equipos mas económicos en el mercado mundial, por parte del operador. En el Estado español este efecto ha sido especialmente claro en el mercado liberalizado de terminales, que ha creado graves problemas a las industrias productoras Amper y Cetesa (Alcatel) -el año 92 entre Standard (Alcatel) y Amper redujeron su empleo en 4000 personas (un 23%)-.

Por otra parte la aplicación de las telecomunicaciones y la telemática en el resto de sectores productivos o de servicios (financieros, comerciales,...) induce caídas

14/ "Appel d'offres relatif à une étude sur les effects sur l'emploi du processus de liberalisation/privatisation dans le secteur des télécommunications" Journal officiel des Communautés européens de 8-12-94.

15/ Telecoms Magazine nº 26 Nov-Dic. 1993

del empleo, como consecuencia de los aumentos de la productividad que dichas inversiones provocan.

Por último, quizá se produzca algún crecimiento de empleo en las aplicaciones de las telecomunicaciones multimedia, o sea, en el mercado audiovisual, informático o editorial aplicado a las telecomunicaciones, pero ¿se puede asegurar que el empleo creado por la distribución de esos productos por cable, va a compensar la caída del empleo en los sectores que ahora realizan esa actividad, cadenas de TV, productoras cinematográficas, productoras de discos, editoriales, distribuidoras, videoclubs, librerías,..? ¿No se producirá en estos sectores un fenómeno de invasión de los productos de las grandes multinacionales y los "made in USA", que acaben con producciones más artesanales?

No obstante los liberalizadores objetan que esta forma de análisis corresponde a una actitud temerosa y por tanto conservadora, respecto al futuro **/16**, que la oportunidad que nos abre la Sociedad de la Información es la de poder cambiar la actual atonía económica, y con ello poner en marcha un proceso que acabaría con la crisis económica. En definitiva, se trataría de liberar las fuerzas, contenidas por los monopolios, para permitir el surgimiento de una nueva época de crecimiento económico. "Las telecomunicaciones locomotoras del crecimiento".

A pesar de su empeño, lo que nos dicen sigue sonando a cantos de sirena. El hecho de ser tecnológicamente posibles, aparentemente rentables, desde el punto de vista capitalista, y pareciera que deseables socialmente, ¿es suficiente para poner en marcha ese inmenso esfuerzo inversor? ¿Va a ser el consumo privado, deprimido durante más de una década, el que saque adelante las inmensas inversiones necesarias? ¿Van a ser las inversiones de la industria las que lo hagan?. ¿Serán las inversiones públicas?.

Creemos encontrarnos ante una falsa solución de la crisis, como antes habían sido falsas causas de la misma los "precios del petróleo", los "desproporcionados crecimientos de los salarios", o "los gastos excesivos del Estado". La novedad en este caso es que ya no se trata de buscar culpables sino que aparece como una propuesta positiva "la tecnología nos va a sacar de la crisis", pero en cada ciclo de la crisis siempre ha habido algún novedad en el engaño.

Lo más probable es que la inversión productiva, en las telecomunicaciones como en otras nuevas tecnologías, sirva para seguir reduciendo el empleo, en las ramas donde se introduzcan estas tecnologías y en las operadoras, y el que cree nuevo sea insuficiente para obtener un crecimiento neto.

A modo de conclusión

Después de este largo repaso crítico del proyecto de las Autopistas o de la Sociedad de la Información, se podría concluir que se trata de un nuevo señuelo para hacer creíble que el camino del liberalismo económico puede alcanzar la

16/ En el encargo de la CEE, de estudio de efectos sobre el empleo, citado anteriormente, cuando se describe la tarea a realizar, dice: "Los efectos negativos a corto plazo -sobre el empleo- deberán ser sobradamente compensados por el crecimiento y la difusión de servicios electrónicos y las aplicaciones telemáticas, ligadas a los efectos inducidos por las inversiones en las redes y las tecnologías de la información". ¡Ya conocen el resultado antes de encargar el estudio!.

salida a la crisis económica y que además se trata del engaño con el que hacer tragar las amargas consecuencias de una nueva medicina ultraliberal -la de la desaparición de la intervención del estado en la actividad económica de las telecomunicaciones- que se une y refuerza a la ya en marcha de la reducción general de la acción social del estado.

Los únicos beneficiados y los reales impulsores de esta nueva agresión, son los capitalistas, interesados por entrar en una área de negocio que antes les estaba vedada (por ser servicios en monopolio o por ser operadoras PTT's) y donde han visto la posibilidad de hacer negocio seguro, con la operación de las telecomunicaciones, eso sí: asegurándose la sustitución del objetivo de servicio público por el de negocio. A su vez esto promete, al conjunto de los capitalistas de todos los sectores, que van a disponer de servicios de telecomunicaciones más baratos a costa del Servicio Público, de los trabajadoras y trabajadores del sector, y de los usuarios particulares.

Las consecuencias para los trabajadores de las operadores de telecomunicaciones pueden ser una reconversión similar a las sufridas por sectores como la banca, la producción de equipos de telecomunicación, el automóvil o la siderurgia en el pasado.

Como en las anteriores reconversiones, están produciéndose acuerdos del GATT y Directivas Comunitarias conduciendo el proceso, fusiones entre empresas a nivel mundial, subcontratación de determinadas actividades, e invasión de los mercados más débiles. Las novedades de esta reconversión estaría, por un lado, en que se trata de Servicios Públicos, que por tanto afectan también directamente a la mayoría de los ciudadanos y que puede coincidir con la reconversión de otros Servicios Públicos -Salud, Pensiones...-, que la actividad de las telecomunicaciones no ha presentado ningún síntoma de debilidad sino todo lo contrario, y por último, pero no menos importante, que ésta es una reconversión que se realizaría tras la experiencia de las anteriores, lo que debería permitir evitar los errores del pasado.

5 documentos

La Plataforma Cívica por los Derechos Sociales: un movimiento necesario /*

1. Durante los último año se ha producido un retroceso considerable de los derechos sociales. El paro masivo, la precariedad en el empleo, el deterioro de las condiciones laborales, generaciones de jóvenes sin poder incorporarse a la actividad laboral, la exclusión y la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo, el retroceso en las prestaciones sociales, el aumento de la desigualdad social, etc, están configurando una sociedad más insolidaria e injusta. En parte, todo ello es una consecuencia de la complejidad que ha adquirido el capitalismo y de los efectos objetivos que ha tenido la crisis económica pero, en mucha mayor medida, es producto de la política económica y social neoliberal que los sectores dirigentes han puesto en marcha para remontar la crisis económica a su favor.

Los ejes de esa política son sobradamente conocidos: potenciación del mercado como único sistema eficiente de organización social al que hay que subordinar todo, culpabilización de los salarios como responsables de la crisis económica, flexibilización del mercado de trabajo para facilitar la explotación de los trabajadores y la segmentación de la clase obrera, una reforma fiscal regresiva basada en la

*/ *Con bastante frecuencia recibimos en la redacción de VIENTO* SUR *manifiestos y comunicados de diversos colectivos políticos y sociales. Hasta ahora no tenían un lugar en nuestra revista. En adelante, los publicaremos en esta nueva sección. Invitamos pues a lectores y lectoras a que nos envíen documentos de este tipo que consideren de interés. Los publicaremos siempre que dispongamos de espacio y, por supuesto, sin que la publicación implique necesariamente el acuerdo de la revista con el contenido de los documentos.*

desgravación de los rendimientos del capital y las rentas altas, el retroceso de las prestaciones sociales y, en general, del estado del bienestar, el monetarismo para mantener a la economía sometida a un corsé monetario que facilite el funcionamiento del resto de las políticas, etc, acompañados de toda una batería de medidas encaminadas a desmovilizar a los sectores sociales más críticos.

Pero el neoliberalismo es mucho más que un conjunto de agresiones a los trabajadores y al conjunto de la población: es un proyecto global con el que se intenta construir una sociedad insolidaria parecida al capitalismo salvaje del siglo XIX en los albores del siglo XXI. Por eso, el individualismo, como filosofía política y social, ocupa un lugar tan destacado como las medidas regresivas que propone en el plano económico y social. En definitiva, se trata de desarticular cualquier vestigio de resistencia colectiva que pueda dificultar que el capital se mueva a su antojo. Y por eso, cada vez más, sus agresiones tienen efectos multidireccionales. La reforma laboral, por ejemplo, afecta fundamentalmente a los trabajadores ocupados, pero también tiene efectos decisivos sobre las mujeres, los jóvenes, los parados, etc, y poco a poco sirve para construir una sociedad basada en la ley de la selva. La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, verdadera ley de deshaucios, tiene efectos regresivos sobre los pequeños industriales y comerciantes pero también tendrá consecuencias decisivas sobre el empleo, sobre los trabajadores que tengan alquilada su vivienda y sobre los jóvenes, para quienes se ha hecho todavía mas difícil acceder a una vivienda digna. La reforma de las pensiones afectará sin duda a los pensionistas, pero también a los trabajadores ocupados actualmente, que se verán obligados a forzar sus tasas actuales de ahorro si quieren tener en el futuro una pensión digna. La Enseñanza Pública, con una financiación crónicamente insuficiente, está sometida en los últimos años a un duro proceso de reconversión, en detrimento del modelo tradicionalmente defendido por todas las fuerzas progresistas, de una educación gratuíta, científica y laica, al servicio de los intereses populares. El recorte de los derechos sociales afecta aún más a las mujeres. La carencia de escuelas infantiles y de centros de planificación familiar son ejemplos de las barreras infranqueables para las mujeres trabajadoras, que tienen que resignarse a las labores domésticas y al cuidado de los hijos en muchas ocasiones en situaciones económicas extremas. La regresiva reforma laboral ahonda aún más en la discriminación laboral y salarial de las mujeres quienes, junto a los jóvenes, son las primeras en sufrir sus consecuencias como colectivo tradicionalmente más vulnerable.

2. Frente a esta ofensiva, ya no son suficientes los instrumentos tradicionales de que ha dispuesto el movimiento obrero. El movimiento sindical, el ciudadano, el de mujeres, el ecologista, etc, siguen siendo fundamentales para detener la ofensiva y su potenciación y fortalecimiento son condiciones inexcusables para hacer frente a las agresiones. Sobre esto no debe caber la mas mínima duda. No es posible detener los efectos más perversos de la contrarreforma laboral y eventualmente hacerla retroceder si los sindicatos no se fortalecen y no organizan la lucha contra ella. No hay ninguna duda de que sin unos sindicatos fuertes la mayoría de las medidas que componen la política económica y social neoliberal encontrarían el camino despejado y este proyecto obtendría una victoria rápida. E igual se podría decir del movimiento feminista, el ecologista o el de la juventud, etc.

Pero hay que ir mas allá. Por un lado, porque las luchas parceladas, movimiento a movimiento, no son suficientes para hacer frente a un proyecto neoliberal que plantea una ofensiva de conjunto: la construcción de una sociedad insolidaria. Por

otro, porque cada una de las agresiones no afecta sólo a un movimiento, sino que tienen efectos decisivos sobre los restantes: la contrarreforma laboral también afecta a las mujeres y a los jóvenes, la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos también tiene repercusiones sobre los trabajadores y sobre los jóvenes, el retroceso de las prestaciones sociales incide sobre la feminización de la pobreza y sobre la exclusión de las mujeres, etc. Finalmente, porque en el capitalismo tardío, la situación de la clase obrera se ha hecho mucho más compleja y sus intereses no pueden ser defendidos por un solo movimiento. El paro masivo, la precariedad y la segmentación de la clase obrera, han dejado fuera del movimiento sindical a un porcentaje muy elevado de trabajadores. Los intereses de la clase obrera son hoy muy diversos y, en ocasiones, las agresiones más importantes a los derechos sociales se sitúan fuera del marco laboral, como ocurre con las que se derivan de la crisis ecológica, la opresión patriarcal, las reivindicaciones de los jóvenes, la corrupción política, etc.

En estas condiciones, no es posible frenar la ofensiva parcializadamente. Se necesita un movimiento que actúe en el terreno general, que es en el que se desenvuelve la ofensiva, y que sin la pretensión de sustituir ni «competir» con ninguno de ellos sirva, por el contrario, para potenciarlos a todos y coordinar la lucha contra el retroceso de los derechos sociales o, dicho de otra manera, contra la política económica y social neoliberal y por la construcción de una sociedad más solidaria.

3. En el pasado reciente, existen pruebas claras de que cuando la lucha se ha situado en el terreno general, «transgrediendo» los objetivos propios de cada uno de los movimientos, la capacidad de respuesta ha sido mayor y han mejorado considerablemente las condiciones de resistencia en el movimiento sindical, en el ciudadano, en el ecologista, el pacifista, etc. La lucha general, lejos de sustituir a los movimientos sociales, ha servido para potenciarlos. Así ocurrió con las movilizaciones contra la OTAN, contra la Ley Corcuera o contra la Guerra del Golfo y es esto lo que estaba detrás de las huelgas generales, cuando los sindicatos han llamado al conjunto de las fuerzas sociales a organizar la lucha conjuntamente. En definitiva, cuando se ha abierto un frente en el terreno general, la resistencia de cada uno de los movimientos sociales ha sido menos difícil. Es lógico, puesto que todos ellos tienen un enemigo común: el capitalismo en general y el neoliberalismo en particular.

Hoy, la apertura de un frente de lucha contra la política económica y social neoliberal que agrupe a la mayoría de las fuerzas sociales es más urgente que nunca. Durante los últimos doce años, el gobierno del PSOE ha avanzado considerablemente en la implantación del modelo social neoliberal a través de un conjunto de agresiones que se sucedían una tras otra. Primero fue la reconversión industrial, después la agresión a los salarios y la precarización del empleo; conseguido esto llegó el momento de profundizar sus ataques a las condiciones de trabajo a través de la contrarreforma laboral y ahora las pensiones están en el punto de mira. Y siempre, creando las condiciones para que el capital se mueva cómodamente, haciendo retroceder las prestaciones sociales paulatinamente, liquidando el sector público. Visto con perspectiva, la resistencia practicada, basada en una guerra de posiciones movimiento a movimiento, no ha detenido la ofensiva. Sólo se le ha detenido momentáneamente en las ocasiones en las que se producía una movilización general, pero éstas no han tenido una continuidad y rápidamente el PSOE ha retomado el camino emprendido en cuanto los efectos de las movilizaciones generales se han diluído en el tiempo. Se diría que el PSOE ha actuado como un corredor de fondo mientras que

los movimientos sociales, en algunas ocasiones, tenían dificultades para continuar la carrera justo en el momento en que estaban creando mejores condiciones para ganarla. De hecho, la unidad de acción entre todos los movimientos sociales que se producía de cara a las huelgas generales ha tenido dificultades para proseguir tras las mismas.

La consecuencia de todo ello es que, ahora, la resistencia es mas difícil, en parte, por los destrozos sociales y la segmentación de la clase obrera que la crisis económica y esta política han provocado y, en parte, porque la política de derechas practicada por el gobierno del PSOE ha abierto el camino a una política de derechas practicada directamente por la derecha. Porque en esto no hay que equivocarse: el proyecto neoliberal continuará y si hasta ahora lo ha puesto en práctica el PSOE, en el futuro lo haría el PP si llega a gobernar. Detenerlo pasa por continuar la lucha movimiento a movimiento, como se ha hecho hasta ahora, pero también por abrir un nuevo frente permanente en el terreno general.

Pero hoy no nos enfrentamos sólo a la política económica y social neoliberal y sus consecuencias sobre el retroceso de los derechos sociales, sino también a la corrupción, al abuso de poder y a los fenómenos de concomitancia entre el mundo de los negocios, la política y los gobiernos. Los distintos casos de corrupción que se han descubierto no son sólo episodios coyunturales, sino que son un reflejo de las tendencias que surgen del propio sistema político y de sus relaciones con lo económico y lo social. En este contexto es en el que hay que situar el GAL y el uso de los fondos reservados para financiar actividades delictivas y para el enriquecimiento privado de los que los manejan. Son fenómenos que hay que combatir desde colectivos concretos, como lo hicieron los 104 ciudadanos y ciudadanas que ejercitaron la Acusación Popular para esclarecer los delitos cometidos por el GAL entre 1983 y 1987, o como lo han hecho recientemente los intelecturales y profesionales firmantes del Manifiesto criticando la actuación del Gobierno en el caso GAL. Pero también exigen una lucha en el terreno general, porque suponen una amenaza contra todo el sistema democrático.

4. Esto es lo que pretende la Plataforma Cívica por los Derechos Sociales. Pero, para cumplir el objetivo de levantar un movimiento contra el proyecto del neoliberalismo, la Plataforma debe cumplir unos requisitos inexcusables:

En primer lugar, la Plataforma debe ser un lugar de encuentro de todos aquellos colectivos políticos y sociales y personas individuales que no se conforman con el actual estado de cosas y que están dispuestas a luchar para cambiarlo. En su seno, deben tener acogida todas las fuerzas políticas de izquierda, los sindicatos de clase, los colectivos ciudadanos, de mujeres, de de insumisos, de ocupantes de viviendas, de solidaridad, los que luchan por los derechos humanos, los ecologistas, etc, pero también debe servir para agrupar a todas aquellas personas que por una u otra razón no se sienten identificados con un colectivo concreto. Esta es una tarea titánica, pero si esperáramos a conseguir tal unidad de acción para iniciar el movimiento estaríamos condenados a la parálisis. Se trata, pues, de comenzar a andar, de echar a rodar una pelota de nieve y de hacerla crecer, convenciendo con el debate y con la práctica, que la Plataforma, lejos de pretender sustituir a nadie, es un instrumento para el fortalecimiento de todos.

En segundo lugar, su objetivo es levantar un movimiento contra la política económica y social neoliberal y por la defensa de los derechos sociales porque éste es el reto fundamental al que nos enfrentamos. Esto significa que se trata de poner en pie un movimiento de «largo

aliento», porque hoy es el PSOE del que vienen las agresiones, pero mañana vendrían del PP. Debe tener vocación de permanencia por encima de las coyunturas políticas y, por tanto, sus ejes fundamentales son los que se derivan de la defensa de los derechos sociales: la contrarreforma laboral, el ataque a las pensiones y a las prestaciones sociales, la reivindicación de una vivienda digna, los derechos de la juventud, de las mujeres (equiparación de salarios, creación de escuelas infantiles, lucha contra la discriminación en el acceso al trabajo, derecho a la libre disposición de su propio cuerpo, etc), la defensa del medio ambiente, la defensa de la Enseñanza Pública, superadora de la actual división entre privada y estatal, al servicio de los intereses populares,etc. La actividad de la Plataforma debe girar sobre estos ejes centrales y su objetivo debe ser levantar la más amplia movilización social en torno a ellos. Esto requiere profundizar en dichos ejes y ampliarlos si fuera conveniente, sintonizar con las preocupaciones reales de la gente para concretarlos, realizar actos, jornadas, debates, etc, que contribuyan a elevar la conciencia social y le den sentido a las luchas, y movilizar en la calle. Por supuesto, esto implica que el pluralismo político e ideológico es consustancial a la Plataforma, porque plurales son las fuerzas sociales culturales y políticas que hay que agrupar para luchar contra el neoliberalismo. Pero la Plataforma no debe ser sólo un lugar de debate y de reflexión colectiva y plural, con lo importante que es esto dado el retroceso ideológico al que se ha llegado, sino también un lugar en el que no sólo se analiza y se discute, sino que sirve para actuar conjuntamente.

En tercer lugar, la Plataforma no puede ser ajena a los conflictos políticos que recorren la sociedad, aunque estos no estén relacionados directamente con los derechos sociales. La corrupción, el GAL, la regeneración democrática, la insumisión, la solidaridad con el tercer mundo, la defensa de los derechos humanos, etc son temas en los que la Plataforma no puede quedar al margen. Pero su actitud respecto a ellos debe ser distinta: si en la defensa de los derechos sociales debe tomar iniciativas de movilización social, porque ésta es la razón de ser de su existencia, en estas otras cuestiones debe apoyar las que realicen los colectivos o movimientos específicos y favorecer la solidaridad. Se trata, principalmente, de construir un movimiento contra la política económica y social neoliberal, apoyando a la vez, en la medida de nuestras posibilidades, inciativas contra otras agresiones que se producen en la sociedad capitalista actual. Es verdad que algunos de estos temas, como la corrupción o el GAL, tienen hoy una gran fuerza movilizadora pero la Plataforma no puede desviarse de su objetivo central, porque estos temas perderán actualidad mientras que las agresiones a los derechos sociales continuarán en tanto el neoliberalismo siga dominando la política económica y social.

En cuarto lugar, la Plataforma no pretende sustituir a los movimientos sociales existentes, sino potenciarlos a todos ellos y unirlos en la lucha contra el agresor común. En particular, no pretende sustituir a los sindicatos de clase ni mermar el protagonismo que estos deben tener en la lucha de los trabajadores. Esto significa que no entra en las cuestiones concretas de política sindical, lo que no excluye el debate sobre ellas. Todos los sindicatos de clase, en nuestra opinión, deberían formar parte de la Plataforma como tales, lo que exige que ésta sea extremadamente cuidadosa en su relación con ellos, como ha intentado serlo hasta la fecha. Los sindicatos saben que la contrarreforma laboral, los ataques a las pensiones, etc, no son problemas exclusivamente laborales, sino que son piezas importantes en el diseño de una sociedad mas insolidaria que la actual. Y

por eso, el movimiento que se trata de levantar tiene un campo de acción en estos temas. La Plataforma, a su vez, debe dejar claro que su objetivo no es invadir el terreno de los sindicatos sino, antes al contrario, conseguir que la solidaridad y la unidad de acción que se dieron en torno a ellos en las huelgas generales se produzca de forma permanente.

5. Levantar un movimiento contra el neoliberalismo como el que se ha descrito más arriba no es fácil, dado el retroceso ideológico, político y material al que se ha llegado. Las causas de dicho retroceso son múltiples y complejas y, en estas pocas líneas, sólo hay espacio para señalar las más importantes.

Por un lado, existen razones objetivas. La crisis económica, los cambios tecnológicos y en la organización del trabajo que se están produciendo y la política económica neoliberal han colocado en importantes dificultades al movimiento obrero, que se ve recorrido por el peso del paro, la precariedad y el miedo a la pérdida del puesto de trabajo. No hay duda de que todo ello pesa considerablemente sobre la capacidad de organización de los trabajadores y sobre las posibilidades de movilización social. Pero, por otro lado, hay también razones subjetivas. Las ideas neoliberales han avanzado considerablemente, no tanto porque se esté de acuerdo con ellas, como porque se acepta que el mundo diseñado por el neoliberalismo es un dato imposible de cambiar. La competitividad, por ejemplo, no gusta, pero se ha instalado la idea de que si se quiere tener empleo, no hay más remedio que ser competitivo, pero de ahí hay el riesgo de pasar a aceptar la política económica del gobierno, la flexibilización del mercado de trabajo o la necesidad de algunas reestructuraciones. Concepciones de este tipo pesan en el comportamiento de sectores que, siendo críticos con la política del gobierno, se ven atenazados para plantear un proyecto político y social alternativo al neoliberalismo.

Estos factores objetivos y subjetivos explican por qué el gobierno ha podido avanzar considerablemente en sus agresiones a los derechos sociales durante el último año, debilitando las líneas de defensa de los trabajadores, y por qué los movimientos sociales tienen dificultades para reaccionar frente a la crisis política actual. Son datos que la Plataforma debe tener siempre en cuenta para que no se produzcan falsos optimismos y para hacer comprender a todos que cambiar la situación actual exige grandes esfuerzos y sobre todo tiempo.

De estas dificultades para levantar un movimiento por los derechos sociales con las características que se han descrito en el punto anterior no debe inferirse que no haya que empezar a ponerlo en marcha. Se trata de ir superándolas, venciendo las incomprensiones y susceptibilidades que se han producido, haciendo que la Plataforma Cívica por los Derechos Sociales sea cada vez más conocida como lugar de encuentro y para la movilización, extendiéndola geográficamente, etc. Y sin tener miedo a los problemas políticos y organizativos que seguramente aparecerán: ya los iremos superando conforme vayan surgiendo.

6. Lo que se ha hecho hasta ahora hay que valorarlo a la luz de lo anterior.

Existen Plataformas Cívicas en Madrid y, con diferente grado de desarrollo, en otras Comunidades Autónomas. Este movimiento está ahora en un proceso de constitución en el ámbito estatal, lo que significa que, en una primera fase, la Plataforma Cívica de Madrid debe seguir ocupándose de la extensión geográfica y el apoyo a la consolidación de otras Plataformas. Conseguido esto, habría que ir hacia una coordinación Estatal de Plataformas Cívicas.

En la Plataforma Cívica, están una gran parte de las fuerzas políticas y sociales que deben componer el movimiento: fuerzas políticas como IU, IA, Liberación, PCPE y O.C.Octubre;

sindicatos como CGT, USO y STEs; colectivos sindicales, como la Plataforma de la EMT o la de la Casa de la Moneda; de jóvenes y de estudiantes, como el Sindicato de Estudiantes; ciudadanos, como Asociaciones de Vecinos y de Inquilinos; de solidaridad, como el Comité de Acción Solidaria; de mujeres; ecologistas, como AEDENAT o Amigos de la Tierra; comunidades cristianas; sindicalistas de CCOO y UGT a título individual, etc. Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Por ejemplo, falta aumentar la presencia del movimiento ciudadano, del de mujeres o del de la juventud. Además, algunos colectivos que están en la Plataforma tienen grados de compromiso desiguales. Por otra parte, la Plataforma debe ser un lugar de encuentro y, en este sentido, debe avanzarse en la vertebración del movimiento a través de los colectivos que pertenecen a ella.

En muchos lugares, se han producido convocatoria de concentraciones el pasado 27E, aniversario de la huelga general, que ha sido la primera acción en la calle que ha realizado la Plataforma. El resultado ha sido digno, dadas las dificultades que se han señalado, pero todavía está lejos de ser el órgano con capacidad de movilización que queremos poner en pie. Esto hay que ganarlo poco a poco a través de un trabajo paciente de comunicados, jornadas de debate, presencia en la calle y realización de nuevas movilizaciones. En este sentido, para darle una continuidad inmediata, la Plataforma va convocar unas jornadas estatales sobre protección social, a realizar próximamente.

7. En una primera etapa y mientras el movimiento no se haya desarrollado suficientemente, el funcionamiento de la Plataforma Cívica podría ser el siguiente:

La Asamblea es el lugar de discusión y debate y donde se deciden las acciones a realizar. Es un espacio abierto al que acuden todas aquellas personas y colectivos que desean participar en el movimiento. Será convocada por la Permanente espaciadamente, cuando la propia actividad lo requiera. Desde el punto de vista del debate, la Plataforma debe mantener la pluralidad como algo consustancial con ella y, desde el punto de vista de las acciones, debe buscarse que las decisiones se realicen por consenso, esto es, debe evitarse adoptar decisiones con las que no esté de acuerdo alguno de sus componentes significativos. La Asamblea debe buscar la integración de todos los colectivos y personas individuales que integran la Plataforma Cívica y evitar las divisiones que se puedan producir en su seno.

La Permanente es el órgano que garantiza el funcionamiento de la Plataforma Cívica entre las Asambleas. Es un órgano abierto a todos los que quieran participar en él, ya sean colectivos que formalmente la apoyan, militantes pertenecientes a colectivos que todavía no han tomado la decisión de apoyarla formalmente o personas individuales que no pertenecen a ningún colectivo concreto. Sin embargo, para hacerla operativa, hay que tender a que en ella estén representantes de todos los colectivos. No es un lugar de discusión y debate sino que sus funciones se deberían limitar a proponer a la Asamblea los ordenes del día, los documentos y los acuerdos y a garantizar su ejecución una vez adoptados estos últimos. Su funcionamiento, en el próximo futuro, será por grupos de trabajo, cuyas reuniones deberán ser frecuentes, y por plenos, más espaciados en el tiempo.

Los Grupos de Trabajo, en los que se dividirá la permanente, tienen como función el estudio, preparación y desarrollo de tareas específicas de la Plataforma Cívica. Se crearán *ad hoc* y existirán en la medida en que la tarea correspondiente lo justifique. Presentarán a la permanente sus informes para que ésta haga las propuestas a la Asamblea. De forma inmediata y a título de ejemplo, en la Plataforma de Madrid, habría que crear grupos de trabajo sobre: prensa y medios de comunicación, jornadas

de protección social, Iniciativa Legislativa Popular, conferencia de la ONU sobre desarrollo social que se realizará en Copenhague el mes de marzo, vivienda, apoyo a otros movimientos (GAL, derechos de las mujeres, insumisión, etc), los derechos sociales de la juventud, etc.

Finalmente, queda el espinoso tema de la financiación. A este respecto, habría que crear un grupo de trabajo específico sobre el que debería recaer el seguimiento de las finanzas y las propuestas para conseguir fondos (bonos, contribuciones de los colectivos, etc).

Las propuestas anteriores tienen que ver con el estado actual en que se encuentra la Plataforma Cívica por los Derechos Sociales y, por tanto, no se pretende que éste sea el funcionamiento en el futuro, cuando el movimiento se haya estructurado más. A lo largo del proceso, irán apareciendo problemas que hoy no se pueden prever, pero ya los iremos resolviendo. Se hace camino al andar.

13 de marzo de 1995
La Asamblea de la Plataforma Cívica por los Derechos Sociales

CARTA ABIERTA DE UN INSUMISO

Cinco años llevo esperando el juicio que me van a realizar el próximo día 9 de junio en el Juzgado 27 de lo Penal en Madrid. Cinco años en los que se puede resumir gran parte de la historia de la objeción insumisa en el Estado español. Todo empezó con esas dudas frente al servicio militar obligatorio (SMO) que de forma inevitable me envolvían desde hacía tiempo: ¿Para qué ir a un cuartel? ¿De qué y a quién serviré? ¿Dónde está el lugar de una persona que, como yo, cree firmemente que los ejércitos están perjudicando gravemente a la humanidad? Una vez conseguí resolver estas dudas, tarea que me llevó algún tiempo, decidí que, existiendo la posibilidad, la insumisión era la respuesta más coherente y útil de todas, a pesar de las posibles consecuencias.

Esta fue una decisión muy difícil, pues entrañaba mayor riesgo y compromiso personal, pero sabía que mi decisión participaba de forma activa en no colaborar con quienes de forma injusta, defienden mediante la fuerza y la barbarie el ya "antiguo orden internacional" que asola a este mundo.

La insumisión no es una actitud diseñada de forma personal sino colectiva, lo que le otorga el valor estratégico que tiene; además plantea de forma valiente una manera de acabar con aquellas leyes que con injusticia se siguen manteniendo a pesar de su rechazo social.

En estos momentos existen en el Estado español más de 10.000 jóvenes insumisos, de los cuales más de 200 se encuentran cumpliendo condena. Resulta incomprensible que se siga juzgando y encarcelando la conciencia de quienes abogan por la solidaridad entre los pueblos frente a la barbarie de las guerras negándose a colaborar con el ejército en coherencia con su pensamiento.

Estos jóvenes no pueden ser esos seres insolidarios que desde el gobierno de Felipe González se pretende dibujar, pues, al negarse a cumplir el servicio militar y la prestación sustitutoria, evidencian su activo compromiso con el pacifismo, luchando para que la libertad de conciencia, la paz y la solidaridad entre los pueblos sean valoradas, como en justicia se merecen, por encima de cualquier lógica belicista e injusta que nos pretendan imponer.

El próximo día 9 de junio de 1995, a las 12.00 h. me juzgan por negarme a cumplir el servicio militar y la prestación sustitutoria. Como dice Mario Benedetti "Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente, ojo por ojo, lente por lente".

Manolo García Olea

INPRECOR
Para América Latina

Inprecor para América Latina es una revista bimestral que dispone de una red internacional de corresponsales, comprometidos con las luchas políticas y sociales de sus respectivos países, lo que les proporciona un punto de vista privilegiado para su labor de información y análisis.

Por eso, cada dos meses, nuestros lectores pueden contar con información alternativa a la que los grandes medios difunden y análisis de actualidad sobre los acontecimientos más relevantes de la política internacional.

Si todavía no conoces *Inprecor para América Latina* es el momento para que te suscribas.

Para mayor información, puedes dirigirte a la redacción de *VIENTO* SUR,
C/ Embajadores 24, 28012 Madrid,
teléfono 530 75 38 o número de fax 527 96 52

DID IT EVER OCCUR TO YOU THAT MAYBE A GANGSTER WOULDN'T BE A GANGSTER IF HE WAS TREATED LIKE AN ORDINARY HUMAN?
WHAT DO YOU MEAN, DICK?

DID IT EVER OCCUR TO YOU THAT MAYBE A GANGSTER WOULDN'T BE A GANGSTER IF HE WAS TREATED LIKE AN ORDINARY HUMAN?
WHAT DO YOU MEAN, DICK?

BOLETIN DE SUSCRIPCION **VIENTO SUR**
POR UNA IZQUIERDA ALTERNATIVA

Apellidos ..... Nombre .....

Calle ..... Nº ..... Escalera ..... Piso ..... Puerta .....

Localidad ..... Provincia ..... C.P. .....

Otras Indicaciones .....

SUSCRIPCION NUEVA ☐ SUSCRIPCION RENOVADA ☐ CODIGO AÑO ANTERIOR ☐

MODALIDAD DE SUSCRIPCION ANUAL

ESTADO ESPAÑOL	ENVIO COMO IMPRESO	☐ 3.500 pta	EXTRANJERO	ENVIO COMO IMPRESO	☐ 4.500 pta (35 $)
	ENVIO COMO CARTA	☐ 4.300 pta		ENVIO COMO CARTA	☐ 7.000 pta (55 $)

MODALIDAD DE ENVIO

ENTREGA EN MANO ☐

ENVIO POR CORREO ☐

MODALIDAD DE PAGO

EFECTIVO ☐

DOMICILIACION BANCARIA ☐

DOMICILIACION BANCARIA - AUTORIZACION DE PAGO

Apellidos ..... Nombre .....

Calle ..... Nº ..... Escalera ..... Piso ..... Puerta .....

Localidad ..... Provincia ..... C.P. .....

ENTIDAD	OFICINA	CONTROL	NUM. CUENTA
☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Fecha: ..... **Firma:**

"... un viento sur que lleva
colmillos, girasoles, alfabetos
*y una pila de Volta con avispas **ahogadas**".*

Federico García Lorca Poeta en Nueva York